

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

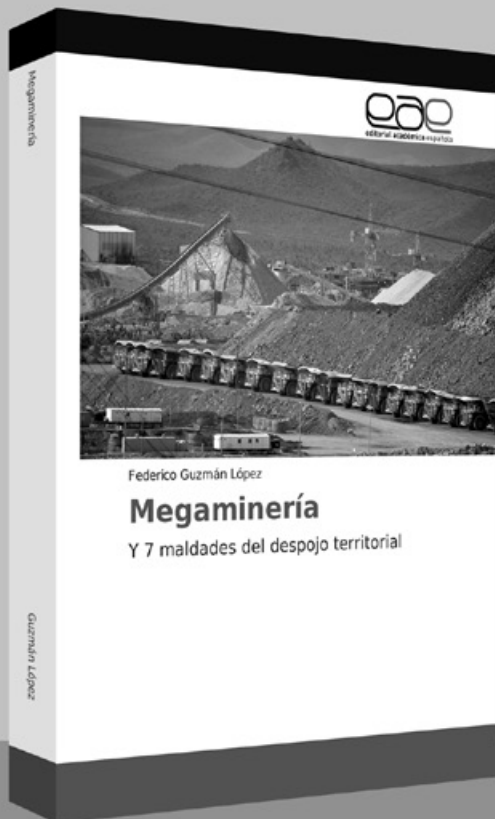
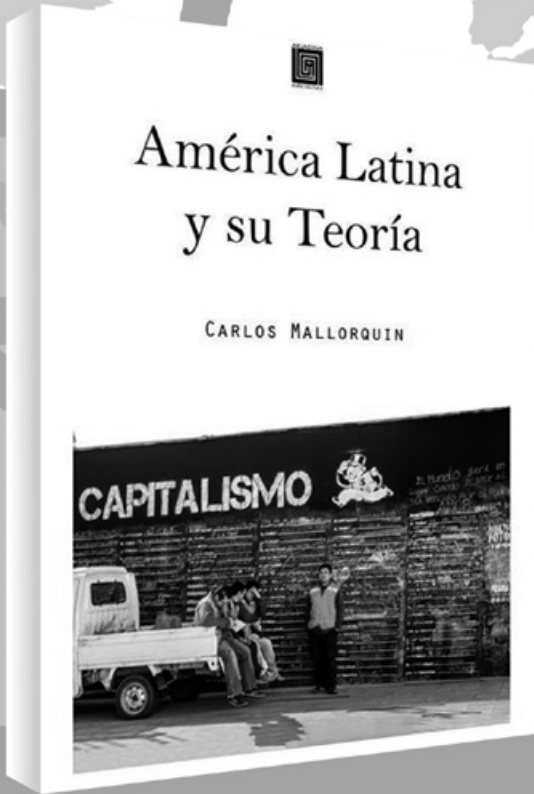
Investigación, reflexión y análisis



**Prolegómenos de la «cuarta transformación»
Crisis hídrica y proyecto de la presa Milpillas**



www.estudiosdeldesarrollo.mx



UNIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO



Universidad Autónoma de Zacatecas
«Francisco García Salinas»

Antonio Guzmán Fernández
Rector

Raúl Delgado Wise
Director UAED

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Investigación, reflexión y análisis

Humberto Márquez Covarrubias
Dirección general

Darcy Tetreault
Dirección editorial

Guadalupe Margarita
González Hernández
Coordinación editorial

James Cypher, Raúl Delgado Wise,
José Déniz Espinós, Rodolfo García
Zamora, Guadalupe Margarita
González Hernández, Víctor López
Villafañe, Carlos Mallorquín,
Gerardo Otero, Roberto Soto
Esquivel, Darcy Tetreault, Henry
Veltmeyer, Edgar Záyago
Consejo editorial

Georgia Aralú González Pérez
Selene Carrillo Carlos
Cuidado de la edición

Jonatán Aarón Piña García
Israel David Piña García
Diseño y formación

Eneas de Troya
Fotografía de portada



OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

VOLUMEN 7 · NÚMERO 21 · SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018

Contenido

EDITORIAL

Nuevo gobierno y destiempo mexicano,
cuando América Latina retorna 2

... DEBATE

Política industrial alternativa 4
Josefina Morales

Nuevo gobierno de AMLO. Hegemonía
de Morena y neodesarrollismo 16
Víctor López Villafañe

El retorno al futuro y la delirante (re)
construcción del proyecto de nación:
las estrategias de desarrollo
para el México 2018-2024
en un escenario de crisis de Estado 23
Isaac Enríquez Pérez

México, desafíos políticos y... no
desaprender de la experiencia regional 31
Oscar Mañán

Morena y la «cuarta transformación»
histórica de México 37
Gerardo Otero

El vértigo transformista. Antinomias
del lopezobradorismo en México 44
Humberto Márquez Covarrubias

Trazos y retazos en las nuevas políticas
públicas culturales en México 58
Daniel Hernández Palestino

:: TEMAS CRÍTICOS

La corrupción institucionalizada
en el manejo del agua en México:
el caso de Zacatecas 65
Cindy McCulligh

La No Factibilidad de la presa Milpillas 73
Darcy Tetreault

La desinformación oficial sobre
la presa Milpillas: una estrategia
para el despojo territorial 79
Grecia Eugenia Rodríguez Navarro
Sergio Elías Uribe Sierra
Darcy Tetreault

Problemática de la calidad del agua
que abastece a la zona conurbada
Zacatecas-Guadalupe 86
Francisco Aguilar Ortega

:: CIRCUNVALACIONES

Reseña de *Argentina será industrial o no
cumplirá sus destinos. Las ideas sobre
el desarrollo nacional (1914-1980)*,
de Marcelo Rougier y Juan Odisio 91
Carlos Mallorquín

Marx, a dos siglos 93
Sergio Espinosa Proa

Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis, volumen 7, número 21, septiembre-diciembre 2018, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, Centro, 98000 Zacatecas, Zacatecas. Teléfono: (01 492) 922 91 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.mx, revistaod@uaz.edu.mx. Editor responsable: Humberto Márquez Covarrubias. Reserva de derechos al uso exclusivo número 04-2015-060212180900-203, ISSN: 2594-0902, otorgados ambos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización: Maximino Gerardo Luna Estrada, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Campus Universitario II, avenida Preparatoria s/n, fraccionamiento Progreso, Zacatecas, 98065. Fecha de la última modificación, diciembre de 2018. Todos los textos aquí incluidos © y ® por Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de los editores de la publicación. Impreso en México / Printed in Mexico

Editorial

Nuevo gobierno y destiempo mexicano, cuando América Latina retorna

HUMBERTO **MÁRQUEZ COVARRUBIAS**

A la luz del prisma latinoamericano, donde se han incubado procesos de transformación nacional de corte posneoliberal —muchos de los cuales se están desmantelando por una intempestiva ofensiva imperialista y oligárquica, sin mencionar las inconsistencias internas—, el arribo tardío de la oleada democrática en México resulta contrastante. Mientras que en América Latina el debilitamiento de la derecha aconteció más temprano, en el caso mexicano requirió un ciclo más extenuante de seis comicios presidenciales debido a la capacidad de las clases dominantes para aletargar el proceso mediante fraudes electorales y maquinaciones políticas, al influjo del omnipresente poder imperial y al reflujo de los movimientos sociales. El aún incierto giro «posneoliberal» mexicano emana de una coalición de izquierda-centro-derecha, basada en la figura carismática de un líder popular, en un momento crítico para el desarrollo nacional, cuando además se profundizan los lazos de subordinación hacia el hegemon del norte y se posterga una integración plena con los países latinoamericanos.

En el concierto internacional, la región se ha convertido en un gran laboratorio de transformación sociopolítica, donde los gobiernos operan en países con niveles desiguales de desarrollo y refrendan programas de transformación social de alcances diversos. La configuración de una agenda posneoliberal latinoamericana, que mereció distintas denominaciones (desde marea rosa, progresismo y neodesarrollismo, pasando por revolución ciudadana y Buen Vivir, hasta socialismo del siglo XXI), impulsó la emergencia de gobiernos centro-izquierdistas catapultados, a su vez, por movimientos sociales y frentes electorales, los cuales, a la postre, terminaron por delegar el poder popular al gobierno con desenlaces a veces contraproducentes. El ciclo político propició diversas experiencias en formación de gobiernos, gestación de nuevas élites y movilizaciones sociales. El progresismo latinoamericano aflora en un periodo de crisis del neoliberalismo y es insuflado por una coyuntura económica internacional que engendra un periodo de bonanza merced a la exportación de materias primas. El neodesarrollismo y el

modelo extractivista permitieron la retención de una parte de la renta y la formación de fondos estatales que sustentaron políticas públicas y programas sociales que dieron rienda suelta a la fórmula mágica del progresismo: crecimiento más distribución. Ahora el modelo económico está entrampado en una profunda crisis y el derrotero político del progresismo está delimitado por la dinámica económica, donde se establecen los márgenes de maniobra para la política distributiva que condiciona la pervivencia de la hegemonía en ciernes y posterga cualquier proyecto de transformación social sustantiva. Los gobiernos progresistas no trastocaron el patrón de acumulación y prefirieron jugar el papel de gestores nacionales de las redes globales de capital, y en ello cifraron su suerte.

Tomando como referente la experiencia latinoamericana, los términos políticos para la configuración del nuevo gobierno mexicano de corte nacionalista burgués son el progresismo, el neodesarrollismo y el populismo, pero también el neoliberalismo. El progresismo representa una apuesta genérica por el progreso social fundado en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero en la versión regional se adhiere al terreno ambiguo de centro-izquierda para impulsar un programa reformista de crecimiento económico y distribución del ingreso. Aunque no cuenta con la potencia de la industrialización sustitutiva de importaciones, el neodesarrollismo articula la intervención estatal, la redistribución de la riqueza, el equilibrio entre clases sociales y la reapropiación de sectores económicos estratégicos para favorecer a una burguesía nacional dependiente de los apoyos estatales y supeditada al capital global. Para consolidar las bases sociales de apoyo, el populismo funge como movimiento sociopolítico que pretende representar al pueblo en general a costa de desmovilizar a las organizaciones sociales y cooptar sus liderazgos. Además, el neoliberalismo persiste como eje de la política orientada por las «señales del mercado», el poder de la oligarquía financiera internacional y la tecnocracia reinante en las dependencias que definen las políticas públicas y el manejo presupuestal. En contraste con el discurso latinoamericanista que revive la

idea de ganar cierta independencia frente al imperialismo, la carta internacional del nuevo gobierno es condescendiente, cuando no sumisa por omisión, con el flamígero gobierno estadounidense, a quien se le sigue considerando un aliado para el desarrollo. La postura conservadora en la materia se sintetiza con el eslogan de que «la mejor política exterior es la política interior».

El presidente triunfante en México, Andrés Manuel López Obrador, carece de una visión latinoamericanista y de un proyecto osadamente antineoliberal, mucho menos anticapitalista: se mueve por las aguas apacibles del pragmatismo político y la construcción de alianzas con diversos y antagónicos sectores económicos y políticos. Su mirada está clavada en el ombligo del ser nacional y tiene como referente el devenir de la historia patria. No deja de llamar la atención que el planteamiento central coincida abiertamente con la proclama reformista de los organismos internacionales orquestadores del neoliberalismo y de la derecha empresarial que plantean que el problema principal y la explicación de todos los males es la corrupción, a diferencia de la perspectiva transformadora de la izquierda que no se queda en los síntomas, sino que se remite al sistema capitalista y sus contradicciones más profundas.

Ajeno al escenario internacional adverso, donde se ha desvanecido el periodo de auge que inflaban los excedentes latinoamericanos con altas cotizaciones del petróleo y otras materias primas, el proyecto denominado la «cuarta transformación» supone que bastará con retener los recursos derrochados por la corrupción y asumir la austeridad «republicana» para cambiar el país entero, sin hacer una reforma fiscal progresiva pero sometiendo al sector público —tachado genéricamente como corrupto— al ajuste mediante el despido de personal, la disminución de salarios, el recorte de presupuestos y programas; en suma, como prescribe el recetario neoliberal, se trata de depurar la maquinaria estatal y ampliar los ámbitos de la inversión privada. En esa lógica, no se postula la necesidad de hacer cambios estructurales en el patrón de acumulación y el sistema de poder, ni de cambiar la constitución política para reconstruir el entramado institucional y la carta de derechos sociales en pauta progresista. El prontuario de proyectos estratégicos incluye una nueva generación de megaproyectos extractivistas, antes criticados por ser depredadores, pero ahora recubiertos bajo el mantra del crecimiento y la generación de empleos (zonas económicas especiales, corredor transísmico, tren maya, reforestación del sureste), el otorgamiento de todo tipo de concesiones al gran capital (subsidio a la nómina, régimen fiscal laxo, garantías

a los planes de negocios, mantenimiento de las contrarreformas) y la negociación preferente con emisarios del viejo régimen («la mafia del poder», que incluiría la amnistía a politicastros y magnates beneficiarios de la corrupción galopante y la apertura de nuevos espacios de valorización de capital).

A semejanza del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que estaba en plena sintonía con el gran capital en Brasil, López Obrador propone un gobierno pragmático de centro-izquierda que respalda a los empresarios y concede la primacía a los grandes negocios, aunque persistan discrepancias ideológicas entre las partes por temas como la redistribución hacia sectores populares mediante programas sociales asistenciales, pero sin una política de revalorización del trabajo, lo cual también favorece a los patrones. Debido a que comparten la misma agenda ideológica y política, el acuerdo total entre gobierno y capital sólo se verifica con los gobiernos de las derechas, como ocurre ahora con Jair Bolsonaro, en Brasil; Mauricio Macri, en Argentina, entre otros. Sea como fuere, el lopezobradorismo busca un acuerdo pleno con el gran capital, aunque en el discurso postula el principio ambiguo de «gobernar para todos, pobres y ricos» (antes era «por el bien de todos, primero los pobres»), en apelo a un irreal equilibrio social que ilusoriamente derivará en un bienestar para «todos». No obstante la inviabilidad del precepto interclasista, mientras se aposenta el nuevo gobierno, funciona eficazmente como arma propagandística.

Para los sectores de izquierda (indigenista, autonomista, comunista, anarquista, socialista y comunista) el lopezobradorismo no marca una ruptura con el patrón de acumulación y el régimen político sino que apuntala el reformismo, la socialdemocracia e imprime una continuidad neoliberal inercial, cuando mucho un «capitalismo con rostro humano», muy lejos de una agenda de transformación social de corte poscapitalista o anticapitalista. Para los sectores de la derecha (neoliberal, neoconservadora, religiosa, neofascista e imperialista) representa una especie de regresión a los años del populismo setentero y el estatismo, pero no dejan de presionar y chantajear para obtener acceso preferencial a las concesiones, exenciones y recursos que les promete el gobierno. Más allá de las posiciones ideológicas y posicionamientos partidarios, los sectores populares tienen eventualmente el potencial de constituirse en el fiel de la balanza, para obligar al nuevo gobierno a adoptar una política progresista, antineoliberal y popular, con miras a una espiral ascendente de transformación social sustantiva, que no se contiene dentro los linderos del capitalismo. 🐦

Política industrial alternativa

JOSEFINA MORALES*

Durante el modelo neoliberal en México, la planta industrial nacional se desarticuló —en gran medida por la privatización de la empresa pública— y se reorientó a un patrón manufacturero exportador al insertarse en la cola de las cadenas de valor transnacionales de producción y consumo con el crecimiento explosivo de la inversión extranjera, cuyo saldo ha sido la configuración de una estructura productiva muy polarizada entre, por una parte, los sectores más dinámicos articulados a la economía mundial y, por otra parte, los tradicionales vinculados al mercado interno. Con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, es necesario diseñar una política industrial alternativa, que sea estructural, integral y de largo alcance, para configurar encadenamientos industriales, propiciar una nueva política de reinserción internacional, incorporarse a la actual ola de revolución científico tecnológica, garantizar la sustentabilidad ambiental y alentar una discusión nacional sobre los sectores y ramas necesarios en pos de un desarrollo industrial alternativo.

*Investigadora titular,
Instituto de Investigaciones
Económicas, Universidad
Nacional Autónoma
de México

La autora agradece el apoyo de Alejandro López
y de Aníbal García Fernández para la elaboración
de gráficas y la sistematización de información

Introducción

El cambio abierto en julio de 2018 con el triunfo popular de Andrés Manuel López Obrador y la construcción de una «cuarta transformación» del país requiere, sin duda, de la elaboración de una política industrial alternativa. El saldo neoliberal y, particularmente, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), deja una estructura industrial desarticulada y polarizada, entre los sectores dinámicos de la manufactura global exportadora y los tradicionales que abastecen al mercado interno.

La industrialización del subdesarrollo en nuestro país ha tenido dos grandes patrones diferenciados en el último siglo: el de la llamada sustitución de importaciones (1940-1981) y el manufacturero exportador del neoliberalismo. En el primero, la participación del Estado fue fundamental, a partir de las transformaciones estructurales de la Revolución mexicana con la reforma agraria, la expropiación del petróleo, la nacionalización de los ferrocarriles y de la creación de la Nacional Financiera para el financiamiento del desarrollo y de la Comisión Federal de Electricidad, entre los aspectos más estratégicos; paralelamente se desarrolló el proceso de concentración de capital nacional mediante la formación de una amplia empresa paraestatal y la consolidación de poderosos grupos monopolistas hacia el final del periodo con la creciente participación del capital extranjero. Durante ese patrón se impulsó una planta industrial correspondiente a las dos primeras revoluciones industriales centenarias (de la energía de vapor a la energía eléctrica y petrolera, de la industria textil a la siderúrgica y la química, y de los ferrocarriles al automóvil y la aviación), que no desarrolló la producción de maquinaria y equipo y reproducía la dependencia estructural.

A partir del modelo manufacturero-exportador, impuesto a partir de la crisis del patrón anterior y de la crisis de la deuda a principios de los 1980, se desarticuló, en gran medida, la planta industrial nacional con la privatización de la

empresa pública (450 empresas) y se reorientó para insertarse a la cola de las cadenas de valor transnacionales de producción y consumo mediante el crecimiento explosivo de la inversión extranjera.

Las revoluciones industriales históricamente son procesos sociales integrales, totalizadores, radicadas en las economías centrales donde han surgido. Se entrelazan estrechamente con transformaciones en la agricultura, comunicaciones y transportes y detonan cambios en las estructuras sociales y estatales, incluso la economía mundial. Por ello, al plantearnos la elaboración y concreción de una política industrial alternativa, tenemos que entender que debe ser una propuesta estructural, integral y de largo alcance económico, social y político; una formulación necesaria frente a la política económica neoliberal de las últimas tres décadas que abandonó el proyecto industrial nacional.

La Revolución industrial internacional en curso

¿Cuál es el proceso industrial internacional característico de la tercera revolución industrial en curso, entendida como una revolución centenaria,¹ o de la cuarta revolución, si se ajusta a una periodización de medio siglo?²

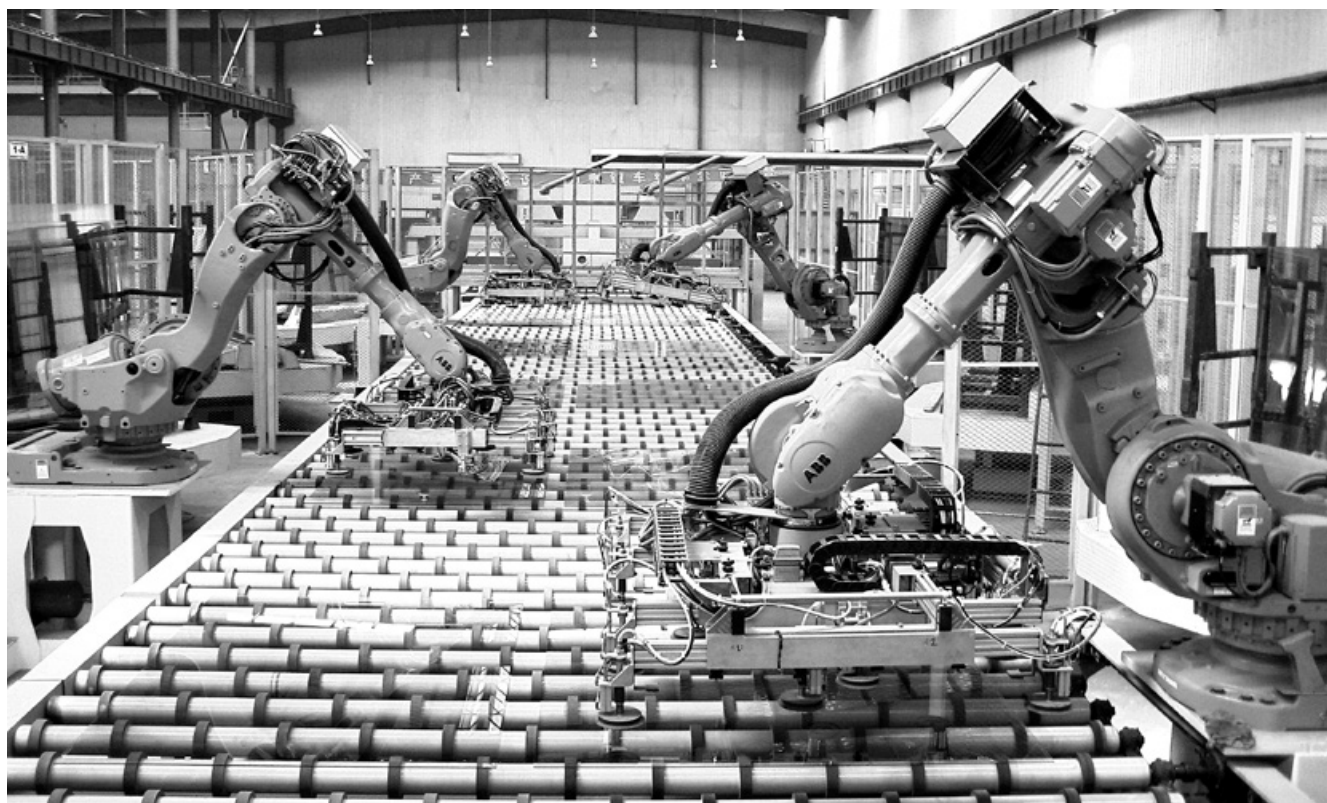
¹ Cazadero Manuel, *Las revoluciones industriales*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

² Carlota Pérez, *Revoluciones tecnológicas y capital financiero*, México, Siglo XXI, 2004.

La Revolución industrial basada en las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las tecnologías cibernéticas (del *hardware* al *software*, de lo nuclear y las telecomunicaciones a la robotización), comienza a desarrollarse en las dos últimas décadas del siglo XX, derivada de la crisis de largo alcance que cimbra al capitalismo en los 1970 y del surgimiento de una nueva fase imperialista del capitalismo que entraña una etapa superior de internacionalización con predominio del capital financiero, definida por algunos teóricos como la mundialización y la financierización. Ahora, al finalizar la segunda década del siglo XXI, propagan la robotización, la inteligencia artificial y las nanotecnologías, además se combinan con la biotecnología y en conjunto se alude a una industria 4.0 o cuarta revolución industrial.

Los procesos anteriores han reestructurado la producción industrial mundial con una nueva división internacional y territorial de la producción y del trabajo, caracterizada por la formación de cadenas globales de producción, donde la maquila, el eslabón más débil intensivo en fuerza de trabajo, es uno de los ejes estratégicos de la industria transnacional localizado en territorios de bajos salarios, excepcionalidad fiscal e insumos energéticos baratos. Proceso que convierte a los países subdesarrollados y dependientes, como México, en plataformas territoriales exportadoras de manufacturas de las viejas revoluciones

Al finalizar la segunda década del siglo XXI, se propaga la robotización, la inteligencia artificial y las nanotecnologías, además se combinan con la biotecnología y en conjunto se alude a una industria 4.0.





industriales y a los países desarrollados en los centros productores de los nuevos equipos y productos tecnológicos.

Las estadísticas internacionales registran que, desde la década de 1990, la industria manufacturera de los países en desarrollo muestra las mayores tasas de crecimiento de producción y exportación. Entre 1995 y 2015, los países en desarrollo elevaron su participación en la producción manufacturera mundial de 22.7% a 41.4%. Por ramas, en alimentos y bebidas pasaron de 30.3% a 41.4%; en textiles y confección alcanzan cerca de las tres cuartas partes; en petróleo, aparte de tener la mayor parte de los recursos naturales, registran la mitad de la refinación; en la metálica básica superan ya 60%; en la industria automotriz duplicaron su participación al pasar de 15.9% de la producción mundial a 34.5%. Los países desarrollados concentran las dos terceras partes de la producción mundial de la industria química, del plástico, equipo de computación y automotriz; más de 70% de productos metálicos, maquinaria y equipo, en éstos la producción de media y alta tecnología representa la mitad de su producción.³

En algunas de las ramas que concentran los países industrializados ha aumentado la participación de China en el mercado mundial y descendido la de Japón y Estados Unidos. Las economías industrializadas registraron, por la crisis de

2008-2009, una tasa negativa de crecimiento medio anual del valor agregado manufacturero entre 2007 y 2012, mientras las economías en proceso de industrialización registraron 6.2%, y de éstas, las de la región de Asia oriental y Oceanía 9.1%.⁴

Las exportaciones manufactureras internacionales aumentaron de 9.4 billones de dólares en 2006 a 13.5 billones en 2011 (dólares de 2005), con una tasa promedio de crecimiento de 5.5%, cuando antes de la gran crisis, entre 2003 y 2007, habían registrado un crecimiento medio anual de 15.6%. Los países en desarrollo pasaron de representar 20.4% en 1992 a 29.6% en 2011.⁵

Otra gran transformación productiva es el desplazamiento de partes de la producción industrial al área de servicios y la creación de nuevos servicios de comunicación y de sistemas computacionales y financieros necesarios para el funcionamiento de la planta productiva, así como nuevos niveles de integración del transporte de carga para el funcionamiento justo a tiempo y toda la organización logística del sistema multimodal del transporte internacional. Servicios que al volverse parte estructural del desarrollo industrial tienen contabilidad separada. En otras palabras, se registra la realización simultánea del ciclo mundial de reproducción del capital: producción-circulación-realización.

⁴ *Ibid.*, p. 31.

⁵ ONUDI, *Industrial Development Report 2009*, p. 18; *Industrial Development Report 2018*, p. 33.

Las exportaciones manufactureras internacionales aumentaron de

9.4 bdd

en 2006 a

13.5 bdd

en 2011 (a precio de 2005), con una tasa promedio de crecimiento de

5.5%,

cuando, antes de la gran crisis, habían registrado un crecimiento medio anual de

15.6%

entre 2003 y 2007.

Los países en desarrollo pasaron de representar

20.4%

del total en 1992 a

29.6%

en 2011.

Proceso que con la reestructuración industrial internacional y la nueva división internacional del trabajo explica, en gran parte, la caída de la participación de la industria manufacturera clásica en el producto interno bruto (PIB) de las economías desarrolladas y en el número de trabajadores. Por ejemplo, en 1950 la industria manufacturera en Estados Unidos representaba 27% del PIB, y en 2017, 11.6%. En 1947, en Estados Unidos había 15.2 millones de trabajadores en la industria manufacturera, lo cual representaba 30.4%; en 1980, había 19.3 millones, 22.7%, y en 2017 eran 12.4 millones, 8%.

La tercera gran transformación se registra en el proceso de producción y trabajo, tanto por la revolución científico-tecnológica que ha cambiado los medios de producción como por la transformación en el proceso de producción y trabajo con la organización de la producción desde la demanda y el toyotismo que generaliza la producción justo a tiempo, el inventario cero, los círculos de calidad y la producción y trabajo flexibles. Con ello, condiciona el ingreso individualizado de los trabajadores y multiplica la subcontratación (*outsourcing*); en otras palabras, la globalización de la precarización del empleo y de la sobreexplotación de los trabajadores.

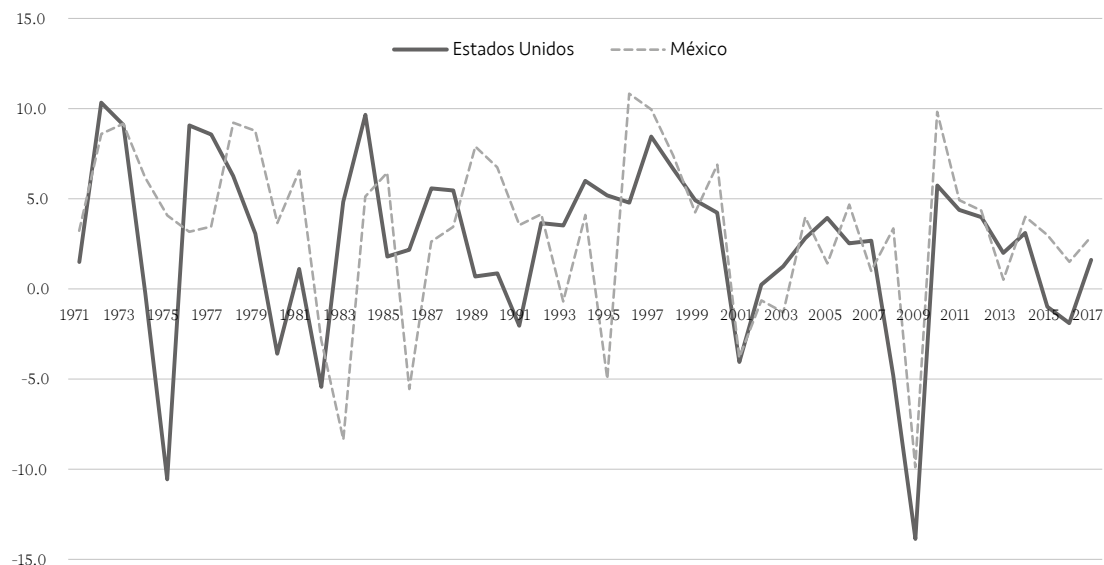
La industrialización en México del patrón manufacturero-exportador

El patrón manufacturero-exportador mexicano responde al proceso de reestructuración industrial del gran capital trasnacional, particularmente estadounidense; no responde a un proceso endógeno, no es producto de la Revolución industrial en nuestro país; se trata de una incorporación dependiente, parcial y fragmentaria de las nuevas maquinarias, tecnologías y procesos en los eslabones de las cadenas industriales de valor trasnacional que aquí se relocalizan en el transporte y las comunicaciones.

Esta modalidad se impone sobre una estructura industrial en crisis y como parte de las políticas neoliberales —denominadas como el *Consenso de Washington*— impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis de la deuda pública, pero que afectaron gravemente al patrón industrial nacional. El ajuste llevó a la privatización y a la re inserción neocolonial de la economía mexicana a la economía estadounidense, formalizada con el TLCAN, y provocó la ruptura de las cadenas industriales alcanzadas (sidero-minerometalúrgica, textil-confección, petroquímica y agroindustrial, como la del azúcar-bebidas).

Otra de las características que adopta la economía mexicana, particularmente el patrón manufacturero exportador, es un comportamiento dependiente del ciclo estadounidense, al ser en la práctica parte de la producción internacional de las grandes empresas trasnacionales de ese país, lo que implica que las exportaciones mexicanas estén poco diversificadas, ya que se destina cerca de 80% a Estados Unidos.

Gráfica 1. Producción manufacturera México-Estados Unidos 1981-2017*



*Índice del volumen 2007=100.

Fuente: Economic Report of the President (Estados Unidos); INEGI, *Sistema de Cuentas Nacionales*. Varios años.

La economía mexicana tiene un comportamiento dependiente del ciclo estadounidense, lo que implica que las exportaciones mexicanas estén poco diversificadas, ya que se destina cerca de 80% a Estados Unidos.

La gráfica 1 muestra que a partir de los 1980 se acentúa la correspondencia cíclica de la manufactura, y que entre 1993 y 2017 se registraron seis recesiones en México, cuatro de ellas en este siglo y tres en Estados Unidos. La más profunda fue la de 2009 con una caída de 13.9% en Estados Unidos y de 9.9% en México; en 2001 la contracción en los dos países fue de alrededor de 4%, la cual se prolongó hasta 2003 en México. El nuevo patrón de industrialización manufacturero exportador descansa en el capital extranjero y en la transnacionalización de la gran industria mexicana, al mismo tiempo que la pequeña y mediana empresa que produce para el mercado interno enfrenta la competencia desigual de los productos extranjeros: de los estadounidenses a los chinos.

La reinscripción de la estructura industrial en las cadenas transnacionales de producción está definida por una alta importación de maquinaria, equipo, insumos y partes que se elaboran o ensamblan en el país para el mercado exterior, fundamentalmente para el estadounidense, con una precaria integración al proceso industrial nacional, y con bajo valor agregado. Proceso límite que se manifestaba en la industria maquiladora cuyos insumos nacionales, registrados hasta 2006, no pasaron de 3% y en la escasa correspondencia entre el crecimiento de las exportaciones y el del valor agregado de la manufactura.

Entre 1981 y 1993, en medio de la crisis y la liberalización, la apertura del mercado nacional y la privatización o liquidación de la industria estatal, el Valor Agregado de la Manufactura (VAM) creció, a precios de 2013, apenas 1.5% cada año, mientras sus exportaciones, a dólares de 2009, lo hicieron 12.9%. Los primeros siete años del TLCAN (1993-2000) registraron el mayor dinamismo del patrón exportador, con 5% de crecimiento anual del VAM y 17.8% de las exportaciones del sector, puesto que la crisis de 1995 con la devaluación abarató la fuerza de trabajo e impulsó ese año el crecimiento de las exportaciones, 32% a precios corrientes, a pesar de la contracción de 6.2% del valor agregado nacional y de 4.2% de la manufactura.

El nuevo siglo registra las limitaciones y la vulnerabilidad del modelo manufacturero-exporta-

dor. La crisis estadounidense de principios del siglo XX, la burbuja de las empresas tecnológicas de comunicación, la entrada de China al mercado mundial y la crisis inmobiliaria de 2008-2009, cuyas secuelas estructurales y financieras continúan, condicionan la dinámica de ese patrón que multiplicó 2.5 veces el valor de las exportaciones manufactureras, entre 2000 y 2017, en el último año alcanzó 364 mil 485 millones de dólares.

Entre 2000 y 2008, las exportaciones manufactureras, a dólares de 2012, apenas si crecieron 3.5% anual, cayeron en 2009 y retomaron el crecimiento, con la industria automotriz, a 6.8% entre 2009 y 2017. En los primeros ocho años del siglo XXI, con el auge de los precios internacionales de las materias primas (*commodities*), que para el petróleo se extendieron hasta 2012, las exportaciones petroleras, mineras, de productos minero-metalúrgicos y siderúrgicos registraron las mayores tasas de crecimiento. Después de la crisis, la recuperación de la industria automotriz estadounidense arrastró a la industria mexicana y sus exportaciones crecieron 12.2% cada año, incluso llegan a representar la tercera parte de las exportaciones nacionales (cuadro 1).

El mayor dinamismo se registró en los productos minero-metalúrgicos asociados a la explotación minera que creció por la inversión extranjera, la gran minería a cielo abierto de metales preciosos y el alto precio de los metales, cuyas exportaciones se multiplicaron 10 veces en el mismo lapso. Resultado, asimismo, de la entrega de más de la quinta parte del territorio nacional al capital extranjero que ha creado numerosos conflictos con las comunidades.

Cualitativamente, el sector exportador, denominado manufactura global en la estadística oficial, es el que registra la más alta productividad y la mayor modernización de su planta industrial y de su proceso de producción y trabajo; en él predominan las empresas transnacionales, la mayoría estadounidenses. La competencia transnacional se agudiza en la crisis y se registra una reestructuración sistemática de las empresas para abaratar costos y organizar la producción desde la demanda, a partir de la coordinación justo a tiempo de su producción mundial. Exige cada vez más altos niveles de calidad, certificación de los procesos, supuestos derechos mínimos de los trabajadores y hasta certificados ambientales.

El nuevo patrón no ha eliminado el déficit del comercio exterior, una de las características estructurales de la dependencia y del intercambio desigual, y se registra sectorialmente. En 1993 el déficit total fue de 13 mil 481 millones de dólares y en 2017 de 10 mil 875 millones de dólares; destaca el déficit creciente de la industria petrolera por 18 mil 402 millones de dólares, el superávit agrícola de los últimos tres años y el casi inexistente déficit manufacturero.

Sin embargo, hay que registrar que el saldo deficitario en la manufactura sin el sector automotriz fue de 58 mil 994 millones de dólares;

Cuadro 1. Exportaciones manufactureras 2000-2017 (millones de dólares)

	Exportaciones		Saldo 2017	Tasa de crecimiento*		
	1993	2017		1993-2000	2000-2008	2009-2017
Total	51 886	409 494	-10 875	16.2	4.7	5.8
Agropecuario	1 545	15 974	4 450	16.2	4.7	5.8
Extractivas	13 305	29 035	-14 293	10.2	10.3	-6.8
Petróleo	8 851	23 608	-18 402	6.0	5.1	7.8
Total manufactura	4 103	364 485	-278	17.8	3.5	6.8
Alimentos, bebidas y tabaco	41 103	16 400	2 194	15.3	9.0	7.1
Textiles, vestido y cuero	1 163	7 708	-5 308	23.0	-8.0	0.8
Química	1 349	9 688	-15 033	12.9	5.8	1.5
Productos de plástico	830	10 729	-15 242	13.8	4.5	7.3
Productos minerales no metálicos	1 354	3 719	462	12.0	2.6	3.8
Siderurgia	1 122	7 124	-11 660	10.9	11.0	3.0
Mínero metalurgia	28 322	10 887	824	7.3	16.9	1.4
Productos metálicos, maquinaria y equipo	10 473	281 781	58 697	19.1	3.3	7.7
Automotriz	3 693	126 671	70 766	18.9	2.4	12.2
Maquinaria y equipo industrial diverso	407	53 789	-8 848	24.7	2.2	8.8
Equipo profesional y científico	802	17 084	2 340	22.4	9.1	7.9
Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos	12 473	72 787	-11 364	17.7	3.6	1.5

*Tasa de crecimiento a dólares corrientes de 2009.

Fuente: Banco de México, *Informe Anual 1994, 2001 y 2017*.

los mayores déficits se registran en la industria química y del plástico, por el orden de 15 mil millones de dólares; en la primera se incluye la importación de gasolin. En 2006 el sector maquilador registró un saldo positivo en su balanza comercial de 25 mil millones de dólares, mientras el no maquilador reportaba un déficit cercano a 50 mil millones de dólares; en 2017, incluso el sector de equipo y aparatos eléctricos y electrónicos, donde predomina la maquila, reporta un déficit de 11 mil 364 millones y la industria siderúrgica de 11 mil 660 millones de dólares (cuadro 1).

Estructura y dinámica de la manufactura 1993-2017

La economía nacional entre 1993 y 2017, a precios de 2013, promedia un crecimiento mediocre y desigual (sectorial y regionalmente) de 2.4% por año y un per cápita menor al 1%. El sector más dinámico de la economía nacional fue el de servicios financieros y seguros con un crecimiento anual de 8.8% y entre sus subsectores destaca la banca con 9.3%; la información en medios masivos con 8.1%, las telecomunicaciones con 11.2% y el comercio al por menor con 4%.

La manufactura atravesó por profundas transformaciones, si bien su participación en la economía nacional disminuyó de 17.2%

a 16.6%, el número de trabajadores prácticamente se mantuvo estancado, de 5.6 millones en 1993 a 5.8 millones en 2016 y descendió su participación en la fuerza laboral del país de 20.4 a 15%. Su comportamiento cíclico determinado, repetimos, por la dinámica estadounidense y la incorporación de China al mercado mundial registra seis recesiones del valor agregado entre 1993 y 2017, mientras la pérdida de empleo se registró en nueve años: las mayores caídas en 2009 (7.3%), 1995 (6.8%) y 2002 (6.7%). Entre 2000 y 2003 se perdieron 877 mil 787 puestos de trabajo y entre 2006 y 2009 otros 623 mil 859.

En el cuadro 2 se registra que entre 1993 y 2017 el valor agregado de la manufactura creció 2% anual, a precios de 2013; ocho de los 20 subsectores que la integran registraron tasas superiores de crecimiento y 12 tasas negativas. Destaca el crecimiento de actividades exportadoras transnacionales como la automotriz (5.5%), el equipo de computación y comunicaciones, la maquinaria y equipo, y las bebidas con tasas cercanas a 3% anual. Tres grandes

subsectores concentran el valor agregado: alimentario (22.7%), automotriz (18.6%), químico (8.9%) y equipo de computación y comunicación (8.1%). En 12 subsectores se perdieron 894 mil 364 puestos de trabajo; más de la mitad (54.4%) se concentraron en las ramas tradicionales de la industria textil, el cuero y el calzado, la madera, en gran medida productoras para el mercado interno. En 2016, más de la mitad de los trabajadores laboraban en la industria alimentaria, automotriz, equipo de cómputo y comunicaciones, productos metálicos y prendas de vestir.

La heterogeneidad y polarización de la planta industrial se profundiza a partir del TLCAN y se advierte entre la micro y pequeña empresa frente a las grandes empresas y los grupos, algunos de los cuales alcanzan un importante nivel de internacionalización; entre las exportadoras y las que producen para el mercado interno, así como las de capital nacional y las de capital

extranjero. La desigualdad se percibe, en mayor medida, en el nivel ramal y muestra además una polarización en la productividad.

De las 76 ramas⁶ que registra en 2016 el sector manufacturero en el Sistema de Cuentas Nacionales, 11 concentran a la mitad del personal (2.9 millones de trabajadores) y 36.8% del valor agregado. Las cinco ramas más intensivas en fuerza de trabajo —maquiladoras de partes para automóviles, prendas de vestir, componentes electrónicos y computadoras y equipo periférico; panaderías y tortillerías— ocupaban cerca de 2 millones de trabajadores, 33.9% del total, y poco más de la quinta parte del valor agregado; asimismo, registran una baja productividad.

⁶ El total de las ramas es 85, pero si eliminamos a las que se registran como otras en casi todos los subsectores quedan 76.

Cuadro 2. Dinámica manufacturera 1993–2016

	Valor agregado	Trabajo		Productividad	Trabajo 2016	Nuevos empleos
		Tasa de crecimiento				
Total nacional		2.4	1.5	1.0	38 180 513	10 846 810
Total manufactura (%)	100.0	2.2	0.1	2.1	5 755 340	187 906
Alimentaria	22.7	2.2	0.9	1.3	1 036 011	197 165
Bebidas y tabaco	5.7	2.9	-1.4	4.4	1 173 153	-45 273
Insumos textiles	0.9	-1.0	-3.3	2.4	118 254	-137 855
Prendas de vestir	2.1	-0.04	-0.8	0.8	418 971	-90 601
Cuero y calzado	0.8	-1.4	-2.4	1.1	135 411	-102 582
Madera	0.9	-0.1	-2.5	2.4	111 580	-86 009
Papel	1.8	3.2	-0.5	3.7	90 647	-10 019
Impresión	0.7	0.8	-2.1	2.9	89 195	-54 851
Derivados de petróleo y carbón	2.1	0.0	0.1	-0.1	32 144	764
Química	8.9	0.9	-2.2	3.1	197 482	-129 023
Plástico y hule	2.7	1.9	-0.7	2.6	233 912	-40 112
Productos minerales no metálicos	2.6	1.2	-1.7	2.9	201 737	-94 251
Metálica básica	6.7	1.6	0.7	0.9	90 901	12 858
Productos metálicos	3.5	2.0	-0.4	2.5	345 380	-33 928
Fabricación de maquinaria y equipo	4.2	2.8	1.4	1.4	278 386	74 797
Equipo de cómputo y comunicaciones	8.1	2.9	3.6	-0.7	661 502	366 037
Equipos, aparatos y accesorios eléctricos	3.2	2.2	0.3	1.9	242 217	18 084
Equipo de transporte	18.6	5.5	3.2	2.3	773 546	396 654
Muebles	1.1	-0.03	-1.4	1.4	185 769	-69 860
Equipo no electrónico, implementos médicos	1.0	5.5	3.2	2.3	162 217	36 600

Fuente: INEGI, *Sistema de cuentas nacionales*, varios años.



La más grave desarticulación de las cadenas productivas se registró en el sector petróleo-petroquímica que redujo drásticamente los productos petroquímicos básicos que producía Pemex, de 72 a 6, hecho que condujo al país a ser uno de los petroleros que importa cerca de las tres cuartas partes de su consumo de gasolina.

En las remuneraciones medias se observa en mayor medida la polarización: apenas siete ramas, que emplean 8% del personal y generan 22.4% del valor agregado, reciben entre 2 y 3.8 veces la remuneración media de la industria, 11 mil 214 pesos mensuales; y en 39 ramas, donde laboran 58.2% de los trabajadores, se percibe un ingreso menor a la media nacional, donde en nueve de ellas labora cerca de la quinta parte de los trabajadores, misma que se concentra en prendas de vestir, calzado y muebles.

Uno de los problemas no resueltos es la baja productividad y su profunda desigualdad, resultado tanto de la parcial incorporación de las nuevas tecnologías como del escaso valor agregado de la industria maquiladora que emplea más de un millón de trabajadores y genera la quinta parte del valor agregado total; y por el peso de los establecimientos de la pequeña empresa que registran, mayoritariamente, una baja productividad. Los cambios cualitativos se advierten en la heterogeneidad y hasta hibridez en los procesos de producción y trabajo que se agudizan con los procesos de *outsourcing* de las grandes empresas y el profundo rezago tecnológico y organizativo de medianas y pequeñas empresas como las de panaderías, tortillerías y herrerías, donde se encuentra cerca de la cuarta parte del personal no remunerado.

Este desenvolvimiento desigual y anárquico de la industria manufacturera conlleva un crecimiento de la explotación del trabajo, generalizando la sobreexplotación y el cambio drástico en las condiciones de trabajo cuya reorganización descansa en tres ejes: la imposición del toyotismo

en la fábrica, la caída de los salarios y su contraparte en el crecimiento del excedente y la multiplicación del *outsourcing*.

Desarticulación interna y transnacionalización (IED y manufactura global de exportación)

La privatización o liquidación de las empresas estatales, a la par de la apertura al capital extranjero en las últimas tres décadas, provocó una profunda desarticulación de las cadenas industriales logradas en el periodo anterior del modelo de sustitución de importaciones, una rearticulación fragmentaria en las cadenas de producción de las transnacionales y con ello la reproducción agravada de la dependencia estructural, al mismo tiempo que una recomposición de los principales grupos económicos del país que se internacionalizaron a partir del TLCAN.

La más grave desarticulación o ruptura de las cadenas productivas se registró en el sector petróleo-petroquímica que privatizó o cerró la empresa nacional de fertilizantes, redujo drásticamente los productos petroquímicos básicos que producía Pemex, de 72 a seis, para entregarlos a una iniciativa privada, nacional o extranjera, que nunca llegó, y canceló la inversión en petroquímica y refinería llevando al país a la paradoja de ser uno de los países petroleros que importa cerca de las tres cuartas partes de su consumo de gasolina.

La segunda fractura del aparato productivo con la reorientación al mercado exterior se registró en el sector minero-metalúrgico-siderúrgico, a partir del cierre de Fundidora Monterrey en 1987,

la desnacionalización de los fondos mineros y la apertura al capital extranjero a partir de las nuevas leyes de inversión extranjera y de minería, así como el predominio del capital extranjero en la siderúrgica, que ha provocado que el saldo negativo de la balanza comercial siderúrgica alcanzara 11 mil 660 millones de dólares en 2017.

Otra experiencia lamentable fue la registrada en azúcar-bebidas, que junto con la mala administración privada que llevó a la quiebra de los ingenios privatizados y al Estado a un nuevo *rescate* a principios de este siglo, enfrentó la sustitución del azúcar por la fructuosa importada. A esto se agrega que el mercado interno a la vez que se desarticula en su producción nacional se convierte en un mercado de las trasnacionales. Baste tener presente que el país ha perdido su autosuficiencia alimentaria y energética, importamos gas y gasolinas, y que en el caso de la exitosa industria automotriz exportadora, más de la mitad de la demanda interna de automóviles se cubre con importaciones. La industria maquiladora nunca alcanzó encadenamientos internos; hasta 2006, los insumos nacionales no sobrepasaban 3%.

Como se advirtió, el patrón manufacturero exportador está presidido por las empresas

transnacionales. La industria maquiladora, cuyas exportaciones se registraron hasta 2006, realizaba más de la mitad de las exportaciones manufactureras. La privatización facilitó la recomposición de los capitales y su concentración, ello permitió la internacionalización de grandes grupos industriales, apoyados en el endeudamiento externo y en las asociaciones estratégicas en busca del mercado internacional.

La privatización derivó en un proceso desnacionalizador después de que concluyó la asociación estratégica de varias grandes empresas mexicanas con el capital extranjero que pretendía impulsar su trasnacionalización, pero terminaron por impulsar la desnacionalización, al venderse 45 empresas mexicanas al capital extranjero en lo que va de este siglo. Destaca la acerera Hylsa, la otrora joya de la familia del grupo Monterrey vendida a Techint de Argentina por 2 mil 582 millones de dólares en 2006; Grupo Imsa a la argentina Terniun por 3 mil 187 millones de dólares en 2007; la división de la Cervecería Cuauhtémoc de FEMSA en 2010 a Heineken de Holanda por 7 mil 325 millones de dólares y la cervecera Modelo, vendida a Anheuser-Busch en 2013 por más de 21 mil millones de dólares. Así, ni el tequila Sauza, ni la cerveza Modelo, ni la Corona, ni los helados Santa Clara ni las pinturas Comex son más de capital mexicano.

Desarrollo manufacturero regionalmente desigual

La crisis del viejo patrón industrial y el nuevo patrón manufacturero exportador cambiaron el esquema de localización de la industria de transformación en el país y encontramos ahora tres tipos de

Ni el tequila Sauza, ni la cerveza Modelo, ni la Corona, ni los helados Santa Clara, ni las pinturas Comex son más de capital mexicano. Fotografía: Adolfo Valtierra



territorios industriales: desindustrialización que se sintetiza en la primera región industrializada conformada en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) y en las zonas impulsadas por la industria estatal como la de bienes de capital en Hidalgo o la petroquímica de Coatzacoalcos, Veracruz; zonas de reestructuración industrial hacia la exportación que encontramos en Querétaro, la zona metropolitana de Monterrey y la de Guadalajara; y las zonas de nueva industrialización bajo el modelo manufacturero exportador en los municipios maquiladores y en los que se establece la industria automotriz en las dos últimas décadas, como lo ilustra el caso de Guanajuato.⁷

Un fenómeno cualitativo es la formación de parques industriales que surgen con la industria maquiladora en los principales municipios de la frontera norte, como Juárez y Tijuana, y se multiplican a partir del TLCAN, que han propiciado, en algunos casos, la formación de clústers industriales, complejos territoriales donde se localizan actividades entrelazadas, que forman parte de una cadena de producción, como algunos de la industria automotriz en Puebla y el de la electrónica en Tijuana.

El patrón manufacturero exportador requiere de servicios especializados en logística que incluyen transporte, comunicaciones y servicios aduaneros, bancarios y financieros y de *software*, entre otros, así como de fuerza de trabajo especializada y de formación técnica y superior para sus técnicos que representan cerca de la quinta parte de su fuerza de trabajo.

Asimismo, una de las primeras causas para la relocalización del capital extranjero es bajar costos, principalmente en fuerza de trabajo, tener materias primas y mercados; elementos que en México han encontrado sin duda alguna. La maquila es una actividad que localizada inicialmente en las fronteras se realiza en condiciones

de excepcionalidad fiscal, laboral y ambiental; condiciones que con el TLCAN se han generalizado y con la reforma laboral se han profundizado y prácticamente dejan vía libre a la mayor precarización del trabajo, a la subcontratación y el *outsourcing*.

Una política industrial alternativa

El primer paso para el diseño de una política industrial alternativa es el reconocimiento de las profundas limitaciones del modelo actual que ha generado un crecimiento desigual y mediocre que depende del mercado estadounidense y ha abandonado el mercado interno, por lo que es indispensable impulsar una nueva política industrial. Particularmente estudiar las condicionantes que la renegociación del TLCAN dejaron al posible desarrollo nacional.

Una política industrial alternativa requiere la participación del Estado, los empresarios y los trabajadores. No es un diseño de gabinete, exige un acuerdo político nacional que defina los ejes estratégicos del desarrollo nacional y regional. Requiere tener una perspectiva de corto y mediano plazo para atender los problemas urgentes y crear condiciones para su futuro desarrollo.

En el diseño de los lineamientos de una política industrial se deben atender cinco aspectos fundamentales: a) La creación y consolidación de encadenamientos industriales, de cadenas de producción y valor que se realicen en el territorio nacional, ya sea para su exportación o para el mercado interno; b) nueva política de reinserción internacional; c) avanzar en la transformación de la producción y del proceso de trabajo con la incorporación, adaptación y creación de tecnologías, procesos, maquinaria y equipo de la revolución científico tecnológica en curso; d) buscar la sustentabilidad ambiental del proceso industrial, desde los insumos hasta los desechos contaminantes y la reducción del consumo energético de los procesos; y e) abrir la discusión nacional sobre los sectores y ramas de la industria necesarias para un desarrollo industrial alternativo.

La actividad industrial debe ser un motor del desarrollo, de un nuevo desarrollo urbano-regional-sustentable. La política industrial debe ser integral y abarcar, desde el diseño industrial, los insumos, la maquinaria y equipo, los procesos de producción y trabajo hasta la distribución y comercialización de su producción, y en seguida tomar en cuenta el necesario financiamiento para ello. Una nueva política industrial requiere retomar y actualizar medidas de la sustitución de importaciones en búsqueda de autosuficiencia en ramas estratégicas.

El ejemplo más dramático es el de las gasolinas, cuyo abasto nacional fue garantizado en el patrón anterior de sustitución de importaciones y perdido al convertirnos en exportadores del neoliberalismo dejando de lado la industrialización del crudo. Es preciso reconstruir la cadena petróleo-petroquímica-química, donde partimos de la ventaja comparativa del recurso para crear ventajas competitivas. Se requiere

⁷ Josefina Morales y Eva Saavedra, «Patrones territoriales de industrialización, 1980-2015», en Omar Moncada y Álvaro López (coords.), *Geografía de México. Una reflexión espacial contemporánea*, Instituto de Geografía-Universidad Nacional Autónoma de México, 2016, pp. 625-638.



avanzar en el sector hacia la generación de maquinaria y equipo, de patentes, de tecnología. Tenemos todo para hacerlo, siempre y cuando el Estado cambie de política y deje de ocuparse solamente de promover la inversión extranjera. Necesitamos detener, si no es que revertir, la contrarreforma petrolera.

Resulta crucial promover con efectividad la participación de la producción nacional de insumos, partes y equipo para los sectores exportadores. La agroindustria requiere políticas tanto agropecuarias como industriales y comerciales. La política del sector tiene que ser integral y debe recuperar las cadenas del cultivo e industria del azúcar, del maíz, del trigo, así como de los fertilizantes y la creación de semillas mejoradas, no las de los transgénicos de Monsanto. Los productores requieren apoyo para su distribución y comercialización para no quedar atrapados en manos de WalMart. La biotecnología desempeñará un papel estratégico en el desarrollo de este sector para garantizar la autosuficiencia alimentaria, aprovechando la potencialidad de la rica biodiversidad del país y del conocimiento de la medicina tradicional, que a la vez impulsaría una nueva industria farmacéutica.

La cadena textil-confección reclama una atención especial por el alto número de trabajadores que en ella labora. La reorientación maquiladora que sufrió en los primeros años del TLCAN provocó una grave crisis en el sector de producción nacional. Ahora enfrenta la competencia de China y otros países asiáticos que se agudizará con el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). En el sector, además, está una parte sustantiva de la producción artesanal nacional que demanda una política de promoción de mejor calidad y con mejores resultados.

Los trabajadores de la manufactura enfrentan hoy la acelerada y sistemática reorganización del proceso de producción y trabajo, donde la precarización se vuelve la norma y el *outsourcing* el pan de cada día. Los nuevos sistemas de evaluación del trabajo y de la productividad, componente cada vez más significativo del salario, tienden a la individualización de las relaciones laborales, dejando de lado la contratación colectiva. Es indispensable reconstruir las organizaciones de los trabajadores, no sólo para mejorar las condiciones de trabajo, sino los mismos procesos de producción que hoy demandan a un trabajador más capacitado, trabajando en equipo y con flexibilidad laboral.

La industria automotriz probablemente se encuentre en una encrucijada histórica, no sólo por los problemas financieros, técnicos y tecnológicos, sino en particular por el cambio de patrón energético en curso, la problemática de la crisis ambiental y el cambio climático; ello obliga a replantearnos el sentido y alcance del uso del automóvil.

La renegociación del TLCAN y la firma del TPP, exigen evaluar la inserción internacional del país. Con los 40 tratados firmados no se alcanzó la diversificación de las exportaciones nacionales que siguen concentradas en más de 80% con Estados Unidos; el origen de las importaciones sí está más diversificado y más de la mitad provienen de otros países, particularmente de los asiáticos con quienes se registró en 2017 un déficit de 124 mil 267 millones de dólares, poco más de la mitad con China, 10% con Japón y 10% con Corea.

Es necesario retomar la relación económica y comercial con América Latina, promover acuerdos productivos de complementariedad industrial, aprender y participar en los desarrollos tecnológicos y productivos de Cuba, Venezuela y Brasil, entre otros, a pesar de la crisis actual de los dos últimos. La estratégica innovación tecnológica en todo el proceso productivo, de la producción manufacturera a su comercialización, demanda un cambio cualitativo en la política industrial y de ciencia y tecnología, que tome en cuenta la experiencia internacional, los procesos internacionales en curso y la nueva división del trabajo. La nueva revolución científico-tecnológica no puede pasar inadvertida en uno de sus principales impactos sobre la fuerza de trabajo. Sin duda, es importante estrechar las relaciones entre los centros de investigación y las empresas; fortalecer el desarrollo de los institutos públicos nacionales, sectoriales y regionales existentes; promover la compra y adaptación de procesos y maquinaria tecnológicos, incluso el desarrollo de productos y procesos nacionales.

Asimismo, la crisis ambiental, con el cambio climático, exige tener en cuenta la dimensión ambiental de la producción manufacturera, históricamente ignorada. La búsqueda de minimizar los desechos industriales, la producción de contaminantes, la reducción en el consumo de energéticos y de agua, entre otros, es un campo para el trabajo conjunto entre la investigación básica y aplicada y la actividad industrial. La crisis multidimensional por la que atraviesa la humanidad a la que algunos autores le dan carácter civilizatorio, nos exige abrir el cuestionamiento del desarrollo industrial en el país.

Por su parte, la producción alimentaria requiere una profunda evaluación nacional participativa ante los problemas crecientes de salud pública. ¿Necesitamos producir comida chatarra y refrescos dañinos para la salud, en especial de los niños? ¿Necesitamos ser el primer consumidor de refrescos del mundo, tomar refresco en lugar de leche? ¿No es acaso necesario fortalecer y retomar la distribución pública de alimentos básicos que realizaba la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en lugar de permitir que Wal-Mart invada las colonias populares y acabe con los mercados públicos y que Oxxo invada barrios y pueblos? ¿No es posible gravar más a las ganancias de los empresarios de este sector y no sólo a su consumidor? ¿No es posible gravar su publicidad? ¿No es posible hacer publicidad pública sobre la comida natural, nacional, saludable?

La industria automotriz probablemente se encuentre en una encrucijada histórica, no sólo por los problemas financieros de las transnacionales que dominan el mercado, por sus problemas técnicos y tecnológicos, sino principalmente por el cambio de patrón energético en curso, por la problemática de la crisis ambiental y el cambio climático que lleva a replantearnos el sentido y alcance del patrón individual en el uso del automóvil que privilegia a éste y relega al transporte público.

En síntesis, una política industrial alternativa para el siglo XXI requiere un acuerdo nacional capaz de concretarse en actividades y regiones específicas. 🐦

Nuevo gobierno de AMLO

Hegemonía de Morena y neodesarrollismo

VÍCTOR LÓPEZ VILLAFÁÑE*

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018 reviste un significado histórico: el término de un ciclo de más de tres décadas de neoliberalismo caracterizado por la desnacionalización de la economía, el aumento de la pobreza y las desigualdades sociales, el trabajo precario e informal, y una violencia sin parangón desde la Revolución mexicana. Ahora se erige una nueva hegemonía con el ascenso de un representante del interés general de la nación y de una fracción dominante dentro de un nuevo bloque de poder que le dan consistencia a una nueva unidad intelectual y moral que agrupa a vastos intereses en aras de modificar el futuro del país. En el proyecto neodesarrollista, el Estado recupera su papel de promotor del crecimiento económico cuyos ejes serán la agricultura autóctona y la industria nacional. No obstante, el nuevo régimen capitalista en México contiene grandes contradicciones como parte de un entorno económico de dominio financiero y productivo de corte neoliberal.

La elección presidencial en México, celebrada el 1 de julio de 2018, otorgó un amplio triunfo al candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) bajo la coalición Juntos Haremos Historia,¹ con una votación superior a 53%, situación que no se había visto en el país desde los triunfos presidenciales de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la época del apogeo y dominio absoluto de ese partido entre 1929 y 1982. En 2000, como postulante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de la Ciudad de México, AMLO obtuvo una votación de 39.26% que le permitió obtener el triunfo sobre los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) y del PRI. Posteriormente, como candidato presidencial del PRD en las elecciones de 2006 alcanzó una votación de 35.31% y en la de 2012 de 31.59%.

Perdió ambas elecciones, la de 2006 frente al aspirante del PAN, mediante un fraude; y la de 2012, con una votación de 31.59%, en la que el PRI volvió al poder gracias al uso abusivo de los medios de comunicación y la compra masiva de votos.

Desde los comicios presidenciales de 1988, cuando el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, se confrontó a la instauración de un régimen neoliberal que pondría fin a los regímenes emanados de la Revolución mexicana, el patrón en las subsiguientes votaciones fue la de impedir por todos los medios el arribo al poder de una nueva coalición de fuerzas populares. Así, el triunfo de AMLO tiene un profundo sentido histórico, pues se trata de poner fin al ciclo de gobiernos neoliberales que por más de 30 años realizaron reformas para apuntalar la desnacionalización de la economía mexicana, aumentar la pobreza y la desigualdad social y generar un ciclo de violencia inusitado en México desde la Revolución.

*Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

¹ Esta coalición incluía al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Encuentro Social (PES).

¿Hacia un régimen morenista de hegemonía política?

Según Nicos Poulantzas, un autor al que he seguido desde mi época de estudiante, el concepto de hegemonía gramsciano debe superarse y otorgársele dos sentidos. El primero indica la constitución de los intereses políticos de las clases en su relación con el Estado capitalista, como representantes del «interés general» del cuerpo político que es el «pueblo-nación». En el segundo,

el Estado capitalista y las características especiales de la lucha de clases en una formación capitalista hacen posible el funcionamiento de «un bloque en el poder», compuesto de varias clases o fracciones políticamente dominantes. Entre esas clases y fracciones políticamente dominantes, una de ellas detenta un papel predominante particular que puede ser caracterizado como papel hegemónico.²

El triunfo de AMLO a escala nacional —solamente en el estado de Guanajuato perdió por muy poco margen frente al aspirante del PAN— puede enmarcarse bajo esos dos sentidos del nuevo poder hegemónico expuestos por Poulantzas; es decir, como representante del interés general de la nación y como la fracción dominante dentro de un nuevo bloque de poder. Lo notable de esta elección, en comparación con las anteriores, fue el voto de las entidades del norte que prácticamente doblaron o superaron esta línea. Fue un cambio significativo, pues estados como Nuevo León, bastión del conservadurismo político histórico en el país y

² Nicos Poulantzas, *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, México, Siglo XXI, 1973, pp. 169-175. Cursivas del autor.

En las elecciones de 2015, Morena obtuvo una votación total de **8.85%**, en la de 2016 de **13.5%** y en esta del 2 de julio de 2018 de **53.19%**. Lo anterior revela el gran poder político amasado por AMLO a través de Morena. Fotografía: Eneas de Troya

cuna de uno de los empresariados más destacados de México y de América Latina, decidió en esta ocasión elegir al candidato de Morena.

Además, si se examina el fenómeno de Morena en su propio entorno histórico puede decirse que se trató de una gesta nunca antes realizada en México. Este movimiento, apenas organizado en 2014, llevó a la presidencia a AMLO en sólo cuatro años. Cabe recordar que en el pasado otras organizaciones efímeras, como el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) en 1940 o la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) en 1952, llevaron a candidatos independientes a elecciones, pero una vez que no lograron su cometido desaparecieron del régimen de partidos de esa época.³ La primera prueba de Morena fueron las elecciones de 2016 en varias entidades y en la Ciudad de México, en las que

consiguieron ya excelentes resultados. De 12 gobiernos estatales en disputa, el PRI perdió en siete y Morena se convirtió en algunos estados en la segunda fuerza electoral. En la Ciudad de México, uno de sus lugares de mayor apoyo, desde 2015 empezó a desbancar al PRD con triunfos en cinco delegaciones y en 2016 fue el partido que obtuvo más votos. En las elecciones de 2015 alcanzó una votación total de 8.85%, en la de 2016 de 13.5% y en 2018 de 53.19%.

Lo anterior revela el gran poder político reunido por AMLO a través de Morena.

³ Elecciones con competidores frente al PRI-sistema que fueron derrotados mediante fraudes. Se trató del general Almazán, candidato del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, y del general Henríquez, candidato de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, respectivamente.



En la elección de 2018 Morena ganó también la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y 11 de las 16 delegaciones que integran su territorio, así como cinco gubernaturas de las nueve en disputa. En el Congreso obtuvo mayorías en las dos Cámaras, con casi 55% de representatividad en la de diputados y 62% en la de senadores. De ahí que al día siguiente de la elección numerosos titulares en los medios la catalogaran como una gran victoria, con dimensiones históricas, y como un registro del poder político logrado por AMLO a lo largo de su carrera política. Asimismo, es importante resaltar el hecho de que no se dieron intentos de fraude ni compra masiva de votos como en el pasado.⁴

La candidatura de AMLO tuvo gran fuerza en estas elecciones por varios factores que se conjuntaron. En primer lugar, la destrucción social causada por el ciclo neoliberal a lo largo de las tres últimas décadas, pero agudizada especialmente en los dos últimos sexenios presidenciales: con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y con la violencia acelerada, la impunidad y la pusilanimidad bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto que provocó un enorme fastidio en casi toda la población que de alguna manera se vio afectada. El país sufrió varios eventos traumáticos, como el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, la masacre de Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la muerte de dos estudiantes en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cientos de desaparecidos y decenas de fosas clandestinas encontradas a lo largo del territorio nacional. Los reclamos por estos hechos, más los registros por violaciones a los de-

⁴ El hecho de que la diferencia de votos que marcaban las encuestas siempre fue de más de 20 puntos sobre el más cercano contendiente de AMLO hacía muy difícil la posibilidad de un fraude. Tatiana Clouthier, jefa de campaña de AMLO, había advertido que un fraude sólo les alcanzaría para 5 o 6% de la votación (Alma E. Muñoz, «El PRI hará fraude, pero sólo le dará 5 o 6%»: Tatiana Clouthier», *La Jornada*, 24 de junio de 2018, p. 3). Como hipótesis planteo que los recursos que se iban a destinar para la compra de votos fueron finalmente distribuidos entre los jerarcas del PRI y ya no malgastados en una operación infructuosa por el gran margen de diferencia. Véase el caso de los 20 millones de pesos en efectivo que fueron descubiertos en un auto en la Ciudad de México y que serían entregados al Comité Ejecutivo Nacional del PRI en días previos a la elección (David Fuentes, «Caen dos con 20 millones de pesos en efectivo en Insurgentes», *El Universal*, 26 de junio de 2018).

rechos humanos, condujeron a infinidad de protestas que reflejaron el malestar y el enojo de una población ultrajada.⁵ Es decir, en el país el ciclo neoliberal produjo una catástrofe social que encontró una posible vía de solución en la búsqueda de una alternativa a lo que el propio AMLO llamó el PRIAN, un eslogan que sirvió de referencia a la propuesta del movimiento político encauzado por él desde 2014.

En segundo lugar, AMLO forjó una candidatura que podría catalogarse de independiente. Recuérdese que en las dos anteriores elecciones (2006 y 2012) lo hizo bajo el soporte del PRD. Sin embargo, cuando este partido fue dominado por la corriente conocida como los *Chuchos*, oportunista y proclive a negociar con los grupos neoliberales, AMLO decidió salir de ese partido después de la elección de 2012 y fundar Morena. Visto en retrospectiva, el PRD le hizo un favor, pues le quitó la mala imagen que el liderazgo de ese partido tenía, pero no sus bases de votantes que en la elección de 2018 permanecieron fieles a él. Así, se trató de una primera jugada maestra que tenía como finalidad construir un camino de mayor independencia y buscar nuevos aliados.⁶

Por último, en tercer lugar, AMLO buscó para esta elección la conformación de una coalición amplia dentro de grupos políticos de diversa procedencia. El hilo central sobre el que se tejió la nueva coalición de fuerzas fue enfrentar a la clase neoliberal en el poder representada por las élites financieras y extractivistas, junto a los empresarios ligados a las cadenas de exportación dominadas por el capital transnacional en el comercio internacional. Para ello se desarrolló una estrategia que uniera a los representantes de la izquierda que siguieron apoyando su proyecto, pero ahora con fuerzas del viejo nacionalismo revolucionario —como el propio AMLO— y lo nuevo, que fue la integración de intereses políticos representativos del empresariado, el cual busca apoyar el proyecto de un capitalismo endógeno como una alternativa a las décadas de neoliberalismo económico favorecedor de los intereses del gran capital mexicano y extranjero. Por eso, ya había advertido en un escrito anterior⁷ que el proyecto político de AMLO debería inscribirse como el de una burguesía nacionalista frente a una élite extractivista monopolista.⁸

⁵ Sólo en la Ciudad de México en 2017 se registraron 58 plantones y 2 mil 346 manifestaciones (Bertha Teresa Ramírez, «En 2017 hubo 58 plantones y 2 mil 436 manifestaciones», *La Jornada*, 4 de julio de 2018, p. 31). Como en la Ciudad de México se encuentran las sedes de los poderes federales, un gran porcentaje de las movilizaciones tenía como destinatario a un órgano o institución de carácter federal.

⁶ La decisión de encumbrar a la corriente de los *chuchos* provino, no de los militantes del PRD, sino de una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para colocar como su dirigente a Jesús Ortega. Esto aconteció en el sexenio de Felipe Calderón a fines de 2008, lo que seguramente tenía como finalidad debilitar el liderazgo de AMLO.

⁷ Víctor López Villafañe, «Elecciones de 2018. Oportunidad para poner fin al ciclo de la hegemonía neoliberal en México. ¡Es el modelo!», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, vol. 7, núm. 19, pp. 17-25.

⁸ Clase que controla el poder, restringe los derechos políticos de sus ciudadanos y usa las instituciones económicas en su beneficio. Véase Daron Acemoglu y James A. Robinson, *Why nations fail*, Nueva York, Crown Publishers, 2012.

La fuerza de la hegemonía priista, en la historia política del país, se había basado en el régimen corporativista, herencia de la Revolución mexicana que fue desapareciendo cuando se aplicaron las políticas neoliberales. Por su parte, los gobiernos del PAN —partido histórico de la derecha mexicana— entre 2000 y 2012 —que fueron presentados como de alternancia— en realidad sólo se acomodaron sobre las estructuras económicas y políticas del neoliberalismo en marcha. El viejo corporativismo, aunque muchos sindicatos y organizaciones campesinas siguieron fieles al viejo régimen, fue sustituido gradualmente por políticas asistencialistas. El neoliberalismo mexicano se sostuvo en gran medida por la gigantesca inversión en el lavado ideológico que realizaron los medios de información y comunicación para desacreditar a AMLO, como peligro para México, populista, y quien pondría en acción políticas al estilo de Hugo Chávez en Venezuela. Además, incrementaron el nivel de corrupción como instrumento de cooptación y forma directa para saquear los presupuestos en el país, y como retribuciones y pagos para el acceso a las obras públicas.

En un caso doméstico muy debatido, el presidente Peña Nieto construyó una casa de 7 millones de dólares con el apoyo de la constructora Higa, vinculada a él desde sus tiempos de gobernador en el Estado de México. En el ámbito internacional el ejemplo es la empresa Odebrecht, asociada a pagos ilícitos hechos a Pemex. Tales episodios son sólo una muestra de la enorme corrupción que ha imperado en México en los últimos años. Por eso nuestro país figura como uno de los más corruptos del mundo. En suma, el final de este ciclo neoliberal se produjo por la enorme descomposición social que un régimen de esa naturaleza provocó, junto a la violencia desatada por los cárteles de la droga y todos los grupos de delincuentes que se sumaron a la fiesta del saqueo y la destrucción del país.

Esta nueva hegemonía morenista puede tener una connotación histórica si permanece en el tiempo y existen muchas posibilidades de que esto suceda. En primer lugar, AMLO es el político con mayor experiencia en México, forjado en una gran cantidad de luchas políticas de todo tipo desde

sus inicios en su estado natal, Tabasco. No hay ningún otro con esta cauda de prestigio político logrado a base de sobreponerse a infinidad de obstáculos. Como se ha enunciado, AMLO es «un personaje profundamente carismático, poderoso y popular».⁹

En segundo lugar, el triunfo de AMLO y Morena en la práctica electoral de México ha llevado a una seria crisis de los partidos anteriormente hegemónicos en el ciclo neoliberal. El PRI ha perdido votos de manera significativa y en la elección de 2018 obtuvo la peor votación registrada desde su fundación en 1929. El PAN, el otro partido que tradicionalmente había sido la oposición conservadora y que como se ha indicado estuvo en el poder por dos sexenios continuos entre 2000 y 2012, también se encuentra en una crisis interna por la dirección de su futuro en este nuevo entorno. Es posible, como hipótesis, aventurar la idea de que Morena pueda acrecentar su poder político a escala nacional. Para ello bastaría una dosis de estabilidad y seguridad —bajar los índices delictivos en el país—, aumentar el crecimiento económico, así como la incidencia de las políticas sociales, y navegar con un nuevo liderazgo en el ámbito internacional. Este último punto también merece la atención, ya que bajo la presidencia de Donald Trump un nuevo proteccionismo y una escalada en la «guerra comercial» de Estados Unidos puede provocar una coyuntura muy favorable para el tipo de liderazgo surgido en México con el triunfo de AMLO.

Finalmente, cabe resaltar que el presidencialismo mexicano ha sido una figura dominante en el régimen político mexicano y con AMLO se han conjuntado todos los factores para un resurgimiento de dicho fenómeno. AMLO es una personalidad fuerte, con conocimiento pleno de todas las fuerzas políticas que operan en el país, y si Morena cumple su destino histórico, estaremos ante la presencia de un ciclo de hegemonía de largo plazo. Obviamente, ello coloca al país en una situación en la que el sistema, en lugar de transitar hacia una distribución del poder, podría volver a las estructuras históricas de un régimen de partido y presidente fuerte.¹⁰

Política económica neodesarrollista

Dentro del proyecto económico de AMLO se hace referencia explícita al caso de las economías de Asia como ejemplo de crecimiento y modelo que México debería adoptar. Por esa razón es que he querido abordar en ese contexto los rasgos que caracterizaron el desarrollo de tales economías y encontrar las opciones de imitación de la economía mexicana durante la presidencia de AMLO.¹¹

⁹ Álvaro Cueva, «La nueva imagen de AMLO», *Milenio*, 5 de agosto de 2018.

¹⁰ En México parece darse una predilección por organizar históricamente la hegemonía política bajo la forma de un régimen presidencialista. Para un debate sobre la hegemonía parlamentaria y la que se organiza en el ejecutivo, véase Nicos Poulantzas, *op. cit.*, pp. 406-415.

¹¹ Véase en especial la sección de política industrial del «Proyecto de Nación 2018-2024», documento que ha servido de guía en el diseño de los cambios propuestos por

El proyecto económico de AMLO al amparo de Morena, significa un giro a estas políticas neoliberales aplicadas desde 1982 en el país.

Por eso creemos que se trata de impulsar una serie de políticas económicas que hemos caracterizado bajo el concepto de neodesarrollistas y que, no obstante, se dan en un entorno económico de dominio financiero y productivo neoliberal.

En el periodo de la posguerra mundial, en especial después de 1950, la recuperación económica de países como Japón fue meteórica, con tasas de crecimiento que superaban en varios años un promedio de 10% anual. Luego, economías como Corea del Sur, Taiwán y Singapur emularon el modelo de alto crecimiento japonés y, más recientemente, China, que en las últimas décadas se ha convertido en la segunda potencia mundial. El concepto que se ha utilizado con el propósito de describir teóricamente a esos modelos ha sido el de «*developmental State*», que se ha traducido al español como «Estado desarrollista», el cual resalta el enorme papel que desempeñó el Estado para apoyar el desarrollo económico de estos países a través de políticas industriales.¹²

Así, en América Latina, y en México en particular, en esos años también se puso en práctica lo que se llamó la industrialización sustitutiva de importaciones, cuyo objetivo primordial era desarrollar una industria nacional. Este modelo dio lugar a una importante transformación económica en México, pues efectivamente surgió un empresariado nacional y el existente pudo fortalecerse al ampliarse el mercado interno. México tuvo como promedio una tasa de crecimiento entre 6 y 6.5% durante esos años, pero menor en intensidad y profundidad con respecto a las economías asiáticas. Las tasas de industrialización no pudieron atender a todo el mercado de trabajo existente, la productividad no avanzó por las limitaciones tecnológicas y la industria en general no consiguió transitar hacia formas más sofisticadas de manufactura. Todos esos factores establecieron diferencias relevantes con los casos asiáticos, provocaron el agotamiento del modelo y significaron el principio de una serie

AMLO para la transformación del país. La parte correspondiente a economía es muy amplia, pues cubre una gran cantidad de temas. Sin embargo, en la elaboración de esta sección me he concentrado en el análisis de la política industrial, el alma del desarrollismo.

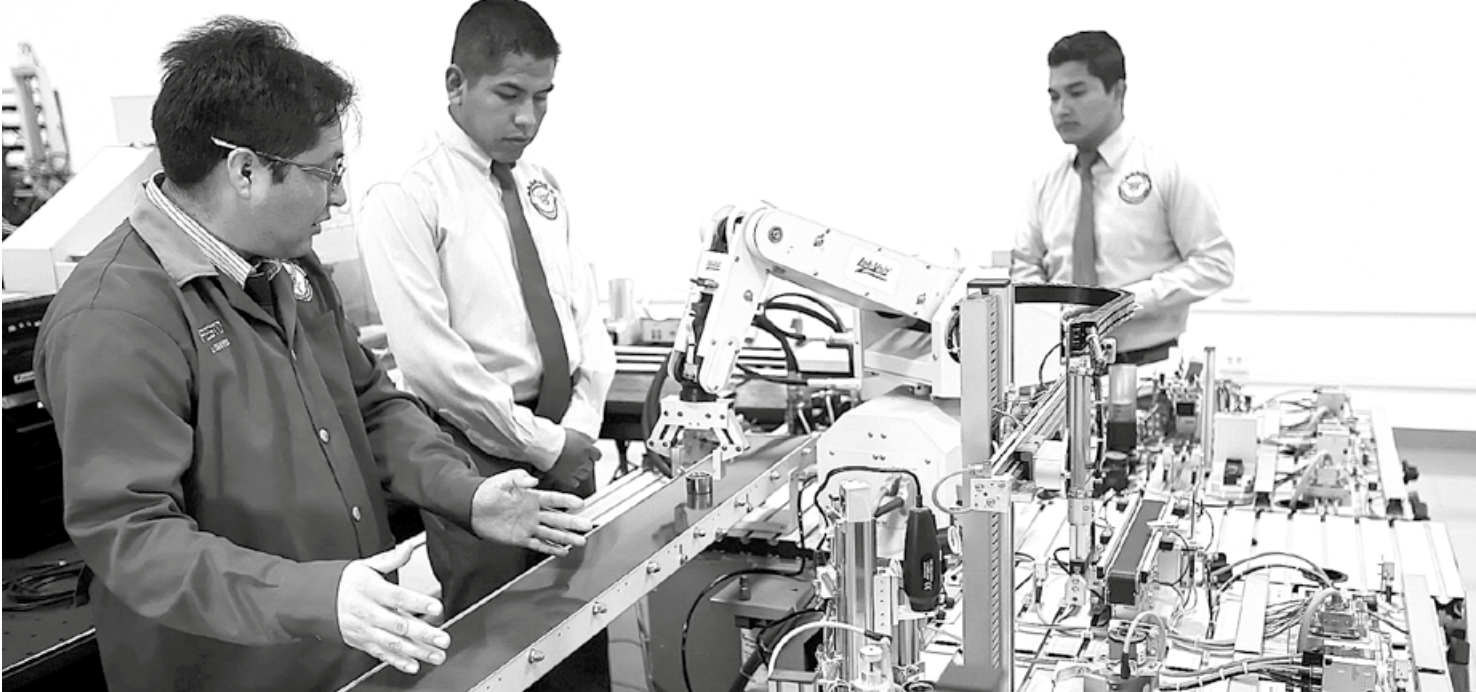
¹² El profesor Chalmers Johnson fue el pionero en describir este modelo. Véase su trabajo seminal sobre la economía japonesa: Chalmers Johnson, *MITI and the Japanese miracle. The growth of industrial policy*, Tokyo, Charles E. Tuttle Co. Publishers, 1982.

de crisis económicas y financieras del país. Sin embargo, la respuesta a las crisis no fue la de introducir los correctivos del modelo anterior, sino la de instaurar uno nuevo basado en la apertura indiscriminada de la economía, para dejar en manos del capital productivo y financiero extranjero la dirección del país.

El modelo neoliberal se estableció en México desde 1982, con políticas para privatizar a las empresas estatales y de ajuste monetario que provocaron la «década perdida», y más tarde con reformas que abarataron la mano de obra; continuaron con la apertura comercial y la venta de la mayoría de los bancos mexicanos a extranjeros después de la crisis de 1995. Las reformas neoliberales continuaron en los siguientes sexenios y abarcaron nuevos campos, como la reforma energética, en aras de permitir la participación del capital extranjero en una materia que constitucionalmente le pertenecía al Estado mexicano. No obstante, dichas reformas no hicieron a la economía mexicana mejor y más grande. El promedio de crecimiento en las décadas aludidas no ha podido superar 2.5%, pero el costo social ha sido enorme por las tasas de pobreza, la marginación económica y la violencia desatada por los cárteles de la droga a lo largo del país.

Al respecto, el proyecto económico de AMLO al amparo de Morena significa un giro a dichas políticas neoliberales aplicadas desde 1982. Se trata de impulsar una serie de políticas económicas que he caracterizado bajo el concepto de neodesarrollistas y que, sin embargo, se dan en un entorno económico de dominio financiero y productivo neoliberal. De nueva cuenta ha crecido el endeudamiento del país desde 2000 y en particular durante la presidencia de Peña Nieto. En 2018 la deuda del país representa casi 50% del producto interno bruto (PIB) y los pagos por intereses anuales son cercanos a los 35 mil millones de dólares. Si el endeudamiento se ha elevado, pero no hay mayores tasas de crecimiento, y se han efectuado pagos de intereses, eso significa que el saqueo y la corrupción se han incrementado. Por otro lado, el sistema de comercio exterior del país es enorme, representa casi más de 70% del PIB, aunque

Otro importante objetivo de esta política industrial será el de atrapar más espacios en las cadenas de la producción para los mercados internacionales, en especial en la industria automotriz y en la electrónica donde el contenido producido a escala nacional es de sólo **26%** y **0.7%** respectivamente.



la mayoría de sus sectores están dominados por capital productivo extranjero y se ha reducido la aportación del capital nacional.

AMLO ha declarado que México debe ser una potencia económica, de ahí que su programa económico, caracterizado por el impulso de lo que se definiría como capitalismo nacional, sería el detonante para lograr tasas mayores del producto nacional.¹³ El debate es si existen condiciones que puedan encauzar al país bajo una nueva ruta de mayor crecimiento o si las limitaciones de carácter financiero harán naufragar el proyecto. En cuanto a las economías asiáticas, altas inversiones —en ocasiones de más de 40% con respecto al PIB— fueron un factor fundamental.¹⁴ Dicha inversión

¹³ «Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, afirmó ayer que existe el ánimo de los empresarios para colaborar con el nuevo gobierno y se alcance, juntos, el propósito de convertir al país en una potencia económica y ya no tengamos un crecimiento de 2% anual, sino del 4%». Susana Guzmán, «México, potencia económica: AMLO y empresarios», *El Financiero*, 16 de agosto de 2018.

¹⁴ Carlos Urzúa, secretario de Hacienda en el gobierno de AMLO, declaró que el Consejo Coordinador Empresarial le planteó destinar 30% del PIB de inversión productiva. Verónica Gascón, «Pasa IP del desánimo a la confianza», *Reforma*, 5 de julio de 2018.

se logró a base del alto nivel de ahorro doméstico y a que su sistema bancario funcionó casi en su totalidad como banca de desarrollo. Solamente en el caso de Corea del Sur se dieron procesos de endeudamiento externo, con la singularidad de que esos recursos fueron canalizados a su sistema productivo y, en especial, a su sector exportador, muy diferente al uso dado en México y otros países de América Latina. En México, la banca de desarrollo prácticamente fue desmantelada durante el ciclo neoliberal y la banca comercial está estructurada para obtener negocios rápidos y rentables derivados, sobre todo, de las cuentas de ahorradores, las comisiones de tarjeta de crédito y los préstamos para el consumo.

En ese sentido, las vías iniciales para aumentar la inversión pública deberán provenir del Estado; por lo que el programa de austeridad del gobierno de AMLO es una medida pequeña, aunque muy importante desde el punto de vista simbólico. El camino hacia una mayor participación del Estado en la economía estará vinculado al aumento de la recaudación fiscal. Como se ha expuesto, en el proyecto de AMLO México tiene uno de los regímenes fiscales de menor captación —no sólo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sino de América Latina y el Caribe—, apenas 17% del PIB. Además, la cantidad de recursos que desembolsa el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de devoluciones, compensaciones y estímulos fiscales, representó una cantidad superior a los 50 mil millones de dólares


en 2017. En consecuencia —como se expresa en el lenguaje de los negocios— hay una ventana de oportunidad para obtener recursos y canalizarlos a la economía productiva del país. Es posible que una reforma fiscal profunda con este nuevo giro sólo podrá darse luego de un primer impulso al desarrollo en los dos primeros años de gobierno de AMLO, pues ello limitaría la protesta y la inconformidad que un aumento en la recaudación fiscal traería casi de manera natural, en particular de los grandes capitales, siempre renuentes a pagar sus obligaciones fiscales.¹⁵

Dentro del proyecto económico de AMLO la política industrial a seguir es una verdadera innovación en los programas de gobierno. Durante el ciclo neoliberal el crecimiento industrial fue dejado a la suerte de la «mano invisible» del mercado, con el resultado de la conversión de la economía mexicana en una gran maquiladora, en la que las industrias más dinámicas están dominadas por las empresas transnacionales. Uno de los objetivos principales de dicha política industrial se dirige a la creación de nuevos productos para la exportación. En las economías asiáticas, las reestructuraciones industriales y tecnológicas fueron la base que mantuvo el dinamismo económico y que permitió salir de la trampa de los salarios bajos al aumentar la productividad y el valor de los productos a exportar. Otro objetivo importante de la aludida política industrial será el de conseguir más espacios en las cadenas de la producción para los mercados internacionales. En específico, en la industria automotriz y en la electrónica, en las que el contenido producido a escala nacional es de sólo 26 y 0.7%, respectivamente.

Asimismo, se declaran 11 sectores estratégicos que realizaban 53% de las importaciones como áreas que deberán ser apoyadas con el fin de incrementar los contenidos hechos por las empresas mexicanas en las cadenas de valor y de ese modo elevar la producción, el empleo y el crecimiento del país. Sobra decir que, con variantes y diferencias en cada caso, es lo que hicieron y siguen haciendo las economías asiáticas. En la actualidad, China se encuentra embarcada en un gigantesco proyecto de producir con sus propias empresas lo que antes producían las empresas extranjeras; esto ha sido uno de los detonantes de la actual guerra comercial entre ese país y Estados Unidos.

Conclusiones

El triunfo de AMLO, bajo la amplia representación social y política de Morena y la alianza Juntos Haremos Historia en las elecciones de 2018, tiene un gran significado en la historia política reciente del país, porque da por terminado un ciclo de más de tres décadas de neoliberalismo en el país caracterizado por la desnacionalización de la economía, el aumento de la pobreza y las desigualdades sociales, el trabajo precario e informal y por una violencia nunca antes vista desde el periodo de la Revolución mexicana —entre sus efectos más perversos y lastimosos. Entonces, el 1 de julio pareciera un levantamiento de la sociedad para establecer un nuevo rumbo del país.

Esta nueva hegemonía que se erige es la de una nueva unidad intelectual y moral que agrupa a vastos intereses con la consigna de modificar el futuro del país. Se trata de una constelación de fuerzas que se unen en favor de un desarrollo económico en el que el Estado recupere su papel de promotor del crecimiento de la agricultura autóctona y la industria nacional, como los grandes ejes del progreso. Sin embargo, a diferencia del desarrollismo pasado, el neoliberalismo ha dejado estructuras legales y reales de amplio dominio financiero, industrial y comercial, sobre las que deberá asentarse el nuevo desarrollismo. Eso marcará los rasgos y las características del nuevo régimen capitalista en México, como una ventana particular de las grandes contradicciones de nuestro tiempo a escala planetaria. 

¹⁵ Cuando AMLO gobernó en la Ciudad de México su estrategia fue similar: austeridad del gobierno, combate a la inseguridad y la corrupción, más programas sociales; posteriormente, se implementaron las políticas fiscales para atraer mayores recursos.

El retorno al futuro y la delirante (re)construcción del proyecto de nación: **las estrategias de desarrollo para el México 2018-2024 en un escenario de crisis de Estado**

ISAAC ENRÍQUEZ PÉREZ*

La pérdida de fe en el Estado y el vaciamiento de la política como praxis emancipadora y creadora de vínculos sociales y solidarios subyacen en el fondo de una crisis civilizatoria contemporánea que imposibilita a las élites políticas y a la academia para imaginar y construir proyectos alternativos de sociedad. Sin embargo, la crisis de Estado y la depredación institucional padecidas en México demandan reivindicar el ejercicio del pensamiento utópico en aras de (re)construir un proyecto de nación que aleje al país del estancamiento económico, la violencia, la corrupción, la desigualdad, la pobreza y el desencanto. ¿Estará a la altura de ese desafío la élite política triunfadora en el proceso electoral de 2018?

Los acontecimientos son el efímero polvo de la historia: cruzan su escenario como pavesas voladoras; brillan un momento, para, inmediatamente, volver a la oscuridad y tal vez al olvido. Bien es cierto que cada uno de ellos, por muy breve que sea, aporta un testimonio, ilumina algún oscuro rincón de la escena o, incluso, una vasta panorámica de la historia. Y no solamente de la historia política, pues todo paisaje histórico —político, económico, social, cultural y hasta geográfico— se ve iluminado por el súbito resplandor del acontecimiento.

Fernand Braudel

La depredación y vaciamiento de la política, el suicidio del liberalismo y el Estado capturado

Una de las tendencias acentuadas en las sociedades contemporáneas —y de la cual México no escapa, sino que recrudece sus manifestaciones al ser una sociedad subdesarrollada y asediada por la violencia— es la pérdida de la fe en el Estado como estructura capaz de emprender transformaciones sociales. En particular, en las naciones subdesarrolladas este desvanecimien-

to se traduce en una erosión de la convicción en torno de la idea y de la noción de desarrollo —y de modo más amplio del ideal ilustrado del progreso. Esta crisis ideológica no sólo tiene su génesis en la propagación del *fundamentalismo de mercado*, sino que hunde también sus raíces en la pérdida de sentido de la praxis política y en la incapacidad de las élites gobernantes para dirigir —en condiciones de mínima legitimidad y relativo consenso— a la sociedad. Más aún, a *el malestar en la política y con la política*, se

*Posdoctorante,
Unidad Académica
en Estudios
del Desarrollo,
Universidad
Autónoma
de Zacatecas

Trabajo realizado con
el apoyo del Conacyt

suma la incapacidad —tanto de las élites políticas y de la comunidad intelectual— de imaginar y construir el futuro a partir de fundamentos alternativos que disten de la gestión de los problemas públicos a través de acciones paliativas y cortoplacistas.

Esta *crisis de sentido*¹ tiene como una de sus manifestaciones el agotamiento y la ausencia de narrativas, discursos y lenguajes para construir escenarios alternativos a futuro. Se trata de un *desierto de las utopías* y de un *crepúsculo de los ídolos* en los cuales la política es sepultada por el delirio posmoderno y la lógica desbocada del mercado. La retirada de la libertad, del progreso y de la democracia, como narrativas y valores etnocéntricos, articuladores y cohesionadores del capitalismo, está en el trasfondo del ocaso de la política y su suplantación en manos del pragmatismo y el social-conformismo. De tal manera que la praxis política fue vaciada de la palabra, de la esperanza y de la esencia propia del pensamiento utópico, así como de su proximidad con la realidad y los lacerantes problemas públicos.

A partir de ese dislocamiento, las élites políticas hacen de la realidad una ficción fantasmagórica ante la cual crean un discurso encubridor y regido por la mentira y la posverdad. Esta depredación de la política es, a su vez, atizada por el individualismo y la atomización de la comunidad, la retirada de los partidos políticos como mecanismos mediadores entre el Estado y la sociedad —ello conlleva el repliegue hacia identidades primarias (religión, raza, orientación sexual)— y por la desconfianza ciudadana en torno de los discursos y acciones de dirigentes políticos que —con la trivialización de las problemáticas— se erigen en parodia de sí mismos. Como en la obra *Saturno devorando a su hijo*, llevada a la excelsitud por Francisco de Goya, el futuro y las utopías son tragados por la misma sociedad contemporánea que se apresta —desorientada— al abismo de la orfandad.

Además, la praxis política perdió todo referente ideológico y fue vaciada de significado histórico en buena medida por el ultraje y raptó de la palabra como mecanismo de construcción y transformación de lo social, y por la imposición desmedida de la imagen, el cinismo y el cortoplacismo. En medio del vértigo de *la sociedad del espectáculo*, la política es subsumida hasta vaciarse de sentido y

¹Para mayores detalles consúltese Frank Furedi, *Culture of fear. Risk-taking and the morality of low expectation*, London, Continuum, 2003 (1997); y sobre sus expresiones en la dialéctica desarrollo/subdesarrollo véase Isaac Enríquez Pérez, *La construcción social de las teorías del desarrollo: un estudio histórico/crítico para incidir en el diseño de las políticas públicas*, México, Miguel Ángel Porrúa/H. Cámara de Diputados, 2010; y «El subdesarrollo como contradicción consustancial del capitalismo: notas introductorias para la (re)construcción de un concepto», *Estudios Críticos del Desarrollo*, vol. VI, núm. 10, primer semestre de 2016, pp. 13-48; «Variaciones en torno a la noción del concepto de desarrollo: notas introductorias para la definición de un constructo con implicaciones teóricas y políticas», *Filosofía de la Economía*, vol. 6, núm. 1, pp. 23-41.



Como en la obra *Saturno devorando a su hijo* llevada a la excelsitud por Francisco de Goya, el futuro y las utopías son tragados por la misma sociedad contemporánea que se apresta —desorientada— al abismo de la orfandad.

contenido a través de la denostación de «el otro», la trivialización, el cinismo y el negacionismo. La puerilidad de que «una imagen vale más que mil palabras», se impone frente al argumento y la propuesta razonada.

Sintomático del ocaso de las narrativas es el agotamiento del liberalismo como ideología cohesionadora y legitimadora del capitalismo a lo largo de más de dos siglos. Este agotamiento de la ideología liberal sitúa en las promesas incumplidas de la modernidad europea y en la crisis de la razón ilustrada que —en la actualidad— pierde la partida ante los prejuicios, el negacionismo,

el desvanecimiento de la cultura política y la entronización de la posverdad y el odio.

A mediados de septiembre de 2018, el semanario *The Economist* —una publicación liberal por antonomasia— conmemoró su 175 aniversario con la difusión de un documento titulado *A manifesto for renewing liberalism*. En él se argumenta que las autocentradas y cerradas élites políticas liberales —al sentirse en pleno confort en el poder, al perder el hambre por las reformas y al hacer de la meritocracia un régimen de privilegios— se muestran incapaces e indispuestas a resolver los problemas de las mayorías. Se reconoce que los pretendidos valores universales del liberalismo (dignidad individual, mercados abiertos, gobierno limitado y la fe en el progreso humano a partir del debate y la reforma racional de las instituciones) están en duda y cuestionamiento, pese a los avances en materia de bienestar. Es comprensible entonces que el semanario propugne por *un liberalismo para el pueblo* y sentencie que esta ideología, con la caída del muro de Berlín, perdió sus valores esenciales (libertad e interés común), necesarios hoy para su reinención o renovación.² En esa percepción se critica la renuncia del liberalismo al cambio y a la adaptabilidad, así como su carácter conservador de las últimas décadas y la distancia respecto a las masas precarizadas y depauperadas. De ahí su proclividad al suicidio ideológico y a la negación de sus orígenes reformistas.

Si los mismos liberales llaman a una autocrítica profunda es porque reconocen el agotamiento de su ideología como metarrelato que pretende explicar el mundo e implantarse como modelo de sociedad y pauta de comportamiento político. Con ello, la praxis política fue despojada de la

² «1843-2018: A manifesto for renewing liberalism», *The Economist*, vol. 428, núm. 9109, septiembre de 2018.



El semanario *The Economist* —una publicación liberal por antonomasia— difundió un documento titulado «1843-2018: A manifesto for renewing liberalism», donde se critica la renuncia del liberalismo al cambio y a la adaptabilidad, así como su carácter conservador de las últimas décadas y la distancia respecto a las masas precarizadas y depauperadas. De ahí su proclividad al suicidio ideológico y a la negación de sus orígenes reformistas.

tradición del cambio instaurada por la modernidad europea y su noción ilustrada de progreso.

Tras su predominio como ideología hegemónica en el periodo 1789-1989, y que pretendió otorgarle estabilidad política al capitalismo con la integración y sumisión de la clase trabajadora al sistema político de las regiones centrales por la vía del sufragio universal y el estado de bienestar (tal integración, hacia 1945, pretendió la sumisión del Sur del mundo a través del Estado desarrollista), se considera —desde una perspectiva teórica de larga duración y, por tanto, distinta a la enunciada por *The Economist*— que el derrumbe del consenso liberal comenzó

en 1968 con el cuestionamiento —emprendido por una frustrada clase media— de las promesas incumplidas, y se desmoronó en 1989 con el colapso del régimen soviético.³ Perdida la fe en las promesas del liberalismo y tras el brote del desencanto masivo, el capitalismo entró en una crisis de legitimidad.

Paralelamente, con la intensificación de los procesos de globalización y la emergencia de un *Estado capturado* por los poderes fácticos que deambulan en las escalas transnacionales, lo político pierde su capacidad para construir comunidad y crear vínculos sociales y procesos de solidaridad; se soslaya también su sentido emancipador. De esa forma, vaciada de principios como la solidaridad y la emancipación, despojada del *pensamiento utópico* y de su capacidad para procurar certidumbre, la praxis política adopta una desbocada racionalidad instrumental que privilegia la gestión por encima del cambio. A

³ Immanuel Wallerstein, «El derrumbe del liberalismo», *Secuencia*, núm. 28, enero-abril de 1994, pp. 137-154; *Después del liberalismo*, México, Siglo XXI/Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México, 1995 (1998).

partir de lo anterior se cierne una especie de resignación fatalista y de profunda convicción acerca de la idea de que el individuo atomizado está impedido para organizarse en comunidad en aras de intentar siquiera transformar la realidad y su devenir. Subvertida la noción de lo común y el sentido de pertenencia a una clase social, triunfa el individualismo y la responsabilidad del individuo para resolver —desde el mecanismo de mercado— problemas públicos (acceso a derechos, empleo, educación, servicios sanitarios, seguridad pública) antaño atendidos por el Estado. Se trata de un declive y una erosión de la vida pública, en tanto espacio para la mediación entre el individuo y la colectividad.

Más aún, el Estado no es plenamente autónomo en la configuración de lo social, pues se encuentra asediado por poderes y contrapoderes fácticos que —desde afuera y desde adentro, desde arriba y desde abajo— desafían su autoridad, legalidad e institucionalidad. Los flujos globales y transfronterizos de capitales, mercancías, simbolismos, información, conocimiento, ideas y personas, así como la reivindicación de las identidades y lealtades locales/regionales, ponen en predicamento la noción clásica de soberanía y la capacidad de las élites políticas para vertebrar soluciones de cara a los problemas públicos. En consecuencia, uno de los principales condicio-

namientos que enfrenta el Estado en sus procesos de planeación del desarrollo y de diseño y ejercicio de políticas públicas es la gravitación que despliegan *espacios globales para la toma de decisiones* y redes de poder desancladas de lo nacional, mismas que ejercen una capacidad de *teledirección* en torno del tratamiento de los problemas públicos.

Sin embargo, el dislocamiento entre el poder y la política no es el único fenómeno contemporáneo que asedia al Estado y a su legitimidad. Durante las últimas décadas ha cobrado relevancia —a escala planetaria— el síndrome de la desconfianza en las élites políticas. No sólo la crisis fiscal padecida por los Estados desde los 1970-obstruyó sus alcances con la intención de responder a las demandas y necesidades de la sociedad, sino que es la concatenación de un maremágnum de acontecimientos y problemas públicos que hicieron ostensible y generalizado el lema «¡Que se vayan todos!», enunciado espontáneamente en Argentina durante la crisis económico/financiera de 2001-2002 para exigir la renuncia de toda la clase dirigente por el generalizado y masivo descontento y rechazo. En una *era de incertidumbre* entre esos fenómenos destacan el desempleo masivo y el trabajo precarizado, la devaluación de la seguridad social, las violencias y sus distintas manifestaciones, los predicamentos de la



Los flujos globales y transfronterizos de capitales, mercancías, simbolismos, información, conocimiento, ideas y personas (...) ponen en predicamento la noción clásica de soberanía y la capacidad de las élites políticas para vertebrar soluciones de frente a los problemas públicos.
Fotografía: Jorge Vázquez

identidad nacional ante las oleadas migratorias, la enajenación tecnológica y los medios masivos de difusión dedicados a la denostación y a lucrar con la violencia y las miserias, la ineficiencia de las burocracias y los escándalos de corrupción, la concentración de decisiones en el poder Ejecutivo y en sus élites tecnocráticas, las crisis bancario/financieras y la consecuente pérdida de ahorros y patrimonio familiares.

La ansiedad y el desconcierto generados en los ciudadanos se fusionan con el déficit propio del sistema político fundamentado en la representación popular. La inoculación del miedo y el paroxismo marchan a la par, ya que los electores se repliegan cada vez más hacia posturas y opciones de gobierno en las que los líderes políticos explotan ese miedo al «otro», que ataca las entrañas y emociones de una ciudadanía en orfandad. Los lemas «Make America great again!» de Donald Trump, «Take back control; vote to leave the EU» en el caso del *brexit*, «Au nom du peuple» de Marine Le Pen, «Brasil acima de tudo. Deus acima de todos» de Jair Bolsonaro, encierran campañas de odio, intolerancia, sectarismo, clasismo, racismo, discriminación, xenofobia, misoginia, homofobia, persecución e ira fundamentalista, que no son exclusivas de ese tipo de élites políticas, sino que subyacen en el imaginario subterráneo y a flor de piel de las mismas sociedades que les postulan y eligen. Esto en un escenario que invocaría a la barbarie, la injusticia, la corrupción y el sacrificio sin compasión que se precipitan cual tempestad incesante en *El hombre en llamas* trazado por José Clemente Orozco.

Cabe agregar además la pronunciación de una tendencia signada por la privatización del Estado o, en particular, del poder Ejecutivo a través de una segmentación de ciertos ámbitos del aparato estatal que se expanden y se privatizan al responder —aún con un discurso nacionalista y progresista— a proyectos orientados a la expansión e integración global del capitalismo y a sus procesos de acumulación, regalando al poder Legislativo.⁴

⁴ Véase Saskia Sassen, *Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales*, Buenos Aires, Katz, 2010 (2006).

Esbozadas tales tendencias mundiales y al focalizar la mirada a lo acontecido en México durante el proceso electoral de 2017-2018 y en concreto a partir del 1 de julio de 2018 pasado es pertinente esbozar varias preguntas, a saber: ¿Hacia dónde se encamina un Estado —como el mexicano— fragmentado, frágil en su institucionalidad, capturado por poderes fácticos y transnacionalizado en sus decisiones estratégicas? ¿Es factible y viable la (re)construcción de un proyecto de nación en tales circunstancias? ¿Qué modalidad de proyecto de nación es pertinente para una sociedad convulsionada, violentada y confrontada como la mexicana? ¿Qué tipo de funciones necesita reivindicar y ejercer el Estado —en especial en el mundo subdesarrollado— para mediar entre la irradiación de flujos globales y las urgencias locales? ¿Cómo enfrentar la *era del desencanto* y la generalizada desconfianza que se cierne sobre la praxis política y el Estado?

México 2018-2024: los poderes fácticos como grillete que condiciona la (re)construcción de un proyecto de nación

Pasada la efervescencia electoral signada una vez más por el ataque, la denostación, el ninguneo, los lugares comunes y la ausencia de propuestas razonadas e informadas, la sociedad mexicana despertó el 2 de julio con la urgencia no siempre reconocida de (re)construir un proyecto de nación sobre bases firmes, duraderas y consensuadas, que coloque los cimientos de una nueva institucionalidad más allá de la retórica de circunstancia. Parodia, comedia, melodrama y cinismo en las distintas facciones políticas se entremezclaron con la radicalización de la *crisis de Estado*, cuyas instituciones naufragan en un mar de ausencia de cultura ciudadana y de élites políticas incapaces de imaginar y esbozar escenarios alternativos. Dicha incapacidad no es fruto de un retraso mental o de algún déficit en el coeficiente intelectual de los actores que ocupan la escena pública, sino que se inscribe en un fenómeno más amplio vinculado con la crisis (des)civilizatoria contemporánea que desdeña todo compromiso político para imaginar y construir escenarios alternativos y dotar a las sociedades de una brújula que las conduzca por un sendero iluminado desde el faro de las utopías y las metanarrativas. Sin la proyección histórica del *pensamiento utópico* y sin su incursión en la praxis política, las élites que pretenden conducir al Estado mexicano se mueven en medio del desamparo ideológico y la ausencia de ideas para pensar más allá del *statu quo* y los intereses creados.

Si 53.19% de los electores que asistió a la jornada electoral del pasado 1 de julio se decantó (con 30 millones 113 mil 483 votos) por la opción de los *grupos políticos aparentemente progresistas y nacionalistas*, fue por el ímpetu del hartazgo, la desesperanza, el agravio y la decepción ante un régimen político de corrupción, impunidad y privilegio, condensado en el Partido Revolucionario

Institucional (PRI) y en el Partido Acción Nacional (PAN), y que apuntaló una *élite tecnocrática de raigambre transnacional*. Desde hace tres décadas dicho régimen está en función de un modelo económico excluyente, extractivista, rentista, especulador y depredador de lo público, que al transnacionalizar los sectores estratégicos de la economía y al desmontar la política industrial, instauró la flexibilización y la precarización de las condiciones laborales, ensanchó las brechas de la desigualdad, reforzó las asimetrías y desequilibrios interregionales e intrarregionales, aumentó la población en condiciones de pobreza y —asfixiado por la miopía de sus élites políticas ávidas de legitimación— precipitó la ola de violencia durante los últimos lustros. Desde una visión de conjunto, se generó descrédito e ilegitimidad en el sistema político mexicano, refundado durante la década de 1980 tras la erosión sistemática —emprendida desde el gobierno federal— del entonces partido hegemónico y tras la correlación de fuerzas que entronizó a una élite tecnocrática en detrimento de las élites políticas nacionalistas que gobernaron hasta 1982.


Lo anterior no completa el cuadro, pues el descontento popular —que cristalizó el 1 de julio— coincidió con las oportunidades perdidas y frustradas de una burguesía nacionalista que no fue beneficiaria del actual patrón de acumulación, sino que quedó a la deriva en un proceso económico segmentado y cada vez más entrelazado a los sistemas internacionales de producción integrada, a los encadenamientos mercantiles mundiales y a las redes financieras globales, en el contexto de una renovada división internacional del trabajo. En buena medida, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, el alejamiento de la tentación de un nuevo fraude electoral y el reconocimiento de su victoria, responden a la necesidad urgente del sistema político mexicano y de sus principales beneficiarios de ventilar, refrescar y limpiar las entrañas y la superficie



de un Estado esclerotizado, capturado por poderes fácticos y falta de legitimidad e ideología cohesionadora, así como de un patrón de acumulación que privilegia la inserción desventajosa de México en la economía mundial y que no contribuye a resolver las necesidades imperiosas de la población excluida. Ello logró pactarse en condiciones de estabilidad sociopolítica por la ausencia de un gran movimiento social, construido desde abajo, que demandara e impulsara reformas profundas y cambios radicales en la dirección del país.

La gran alianza tejida con diversos grupos socioeconómicos y políticos —varios de ellos adversarios acérrimos en ciertas coyunturas pasadas— de distinto perfil, ideología, procedencia y honorabilidad, junto con el cambio de discurso y de la plataforma electoral de López Obrador hacia cauces moderados y hasta conservadores (es el caso de la política económica) que lo alejaron de la noción prejuiciada de que es «un peligro para México», coincidieron en el concierto de una aparente *disputa convergente* con el propósito de allanar el camino y el reconocimiento hacia el candidato y la élite política ganadores.

En el documento llamado *Proyecto de Nación 2018-2024*, presentado por López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como plataforma electoral a finales de 2017, se aprecian varios matices en el cambio de discurso. Aunque continúa usando



La ansiedad y desconcierto en los ciudadanos se fusiona con el déficit propio del sistema político (...) La inoculación del miedo y el paroxismo marchan a la par de lo anterior, pues los electores se repliegan cada vez más hacia posturas y opciones de gobierno donde los líderes políticos explotan ese miedo al «otro» que ataca las entrañas y emociones de una ciudadanía en orfandad (...) Ello en un escenario que invocaría la barbarie, la injusticia, la corrupción y el sacrificio sin compasión que se precipitan cual tempestad incesante en *El hombre en llamas* trazado por José Clemente Orozco.

ante los medios y en la plaza pública un lenguaje polarizante y ambiguo, el cual resulta accesible y didáctico para las masas agraviadas e indignadas («mafia del poder», «minoría rapaz», «traficantes de influencias», entre otros calificativos dirigidos a las élites empresariales y a las políticas beneficiarias de la corrupción), las posibles estrategias de política pública no prefiguran —pese a su ambigüedad y contradicciones discursivas— un profundo cambio de rumbo de la sociedad mexicana ni el tratamiento de los problemas públicos acuciantes.

En principio, del lema «¡Por el bien de todos, primero los pobres!» (proceso electoral de 2006), de la urgencia por cambiar el modelo económico neoliberal que produce cada vez más pobres y de criticar abiertamente las estrategias del Consenso de Washington (procesos electorales de 2006 y 2012), el discurso de 2018 transitó al eje articulador de la corrupción y el dispendio de las élites político/tecnocráticas como causantes de la desigualdad, la ingente pobreza y el precario crecimiento económico. Sin embargo, aquí se presenta el primer problema de concepción y de diagnóstico, gestado con las declaraciones contradictorias: si la corrupción es la causa de buena cantidad de flagelos sociales, ¿por qué renunciar a la posibilidad de castigar penalmente a aquellos grupos políticos que promovieron una corrupción rampante, se enriquecieron al amparo de su poder político e hicieron un uso patrimonialista de lo público? ¿El «borrón y cuenta nueva» y el olvidarse de lo que pasó antes del 1 de julio —en aras de evitar una «cacería de brujas»— no es una forma más de contribuir al régimen de impunidad que se pretende desterrar? ¿Será posible terminar con la corrupción sólo con el ejemplo del

presidente («Vamos a gobernar con el ejemplo, si el presidente es corrupto, los demás lo serán también»)?

Al girar el discurso desde el modelo económico hacia la corrupción, termina por evadirse la causalidad de los problemas públicos y de aquellos relacionados con la desigualdad en la distribución de la riqueza. Más aún, al ubicar a la clase política como principal protagonista de la corrupción —en una maniobra discursiva que es condescendiente y complaciente con las masas («Nuestro pueblo tiene mucha cultura, es bueno, es trabajador y es honesto») — se niega la responsabilidad y el aparente beneficio obtenido por amplios sectores de la sociedad mexicana que en sus pautas de conducta y comportamiento, en su día a día, tienen arraigadas esas prácticas de desdén por lo público y por el cumplimiento de la ley.

Con relación a la política económica, la prioridad es la estabilidad macroeconómica a partir de la disciplina fiscal. Al igual que lo observado en sus años como jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando promovió las alianzas público/privadas con el objeto de atraer inversión privada nacional y extranjera en grandes proyectos de infraestructura (los segundos pisos del periférico, por ejemplo) y dio la pauta para la expansión de proyectos inmobiliarios y de centros comerciales, en la plataforma de López Obrador no existe un distanciamiento radical referente a la política económica de las últimas décadas.

En su antiguo cargo no aumentó el gasto público; al contrario, su gobierno adoptó medidas para reducir la deuda pública, lograr la eficiencia recaudatoria de los impuestos y generar ahorros con un plan de austeridad. La pretensión de reducir el gasto corriente mediante el ahorro y la idea de no aumentar ni crear nuevos impuestos —lo cual se incluye en la llamada «austeridad republicana»— es una forma más de denominar a la disciplina fiscal que tanto obsesiona a las élites tecnocráticas, a los que les será garantizada la autonomía del Banco de México y no se dará marcha atrás a su estrategia de privatizaciones con la expropiación. Cabe destacar que la progresividad impositiva está ausente en declaraciones y

discursos y con ello se abona a la extrema riqueza y se abandona —a pesar de los esfuerzos por recuperar los salarios reales— toda posibilidad de atacar frontalmente la desigualdad ancestral que padece México.

Relativo a la política comercial y la estrategia industrial, por lo expuesto en el documento aludido⁵ y por las declaraciones y el interés mostrado en torno de las renegociaciones de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se da a entender que será privilegiada la estrategia de apertura irrestricta de la economía nacional y que la inversión extranjera directa continuará fungiendo como la palanca del crecimiento económico. No menos importante es el hecho de que con la nueva versión del tratado comercial México se distancia de las posibilidades de diversificación comercial y responde a las exigencias del gobierno estadounidense en sus pretensiones de evitar —o al menos contrarrestar— que las empresas chinas lleguen al país como una plataforma de exportación y de ingreso al mercado de Estados Unidos. En suma, cualquier probabilidad de vertebrar una política industrial sobre bases nacionales se supedita al sistema de la manufactura flexible arraigado en América del Norte y fundamentado en los bajos salarios de la fuerza de trabajo mexicana; con ello se agravan las condiciones de dependencia y la inserción desventajosa de México en los mercados internacionales.

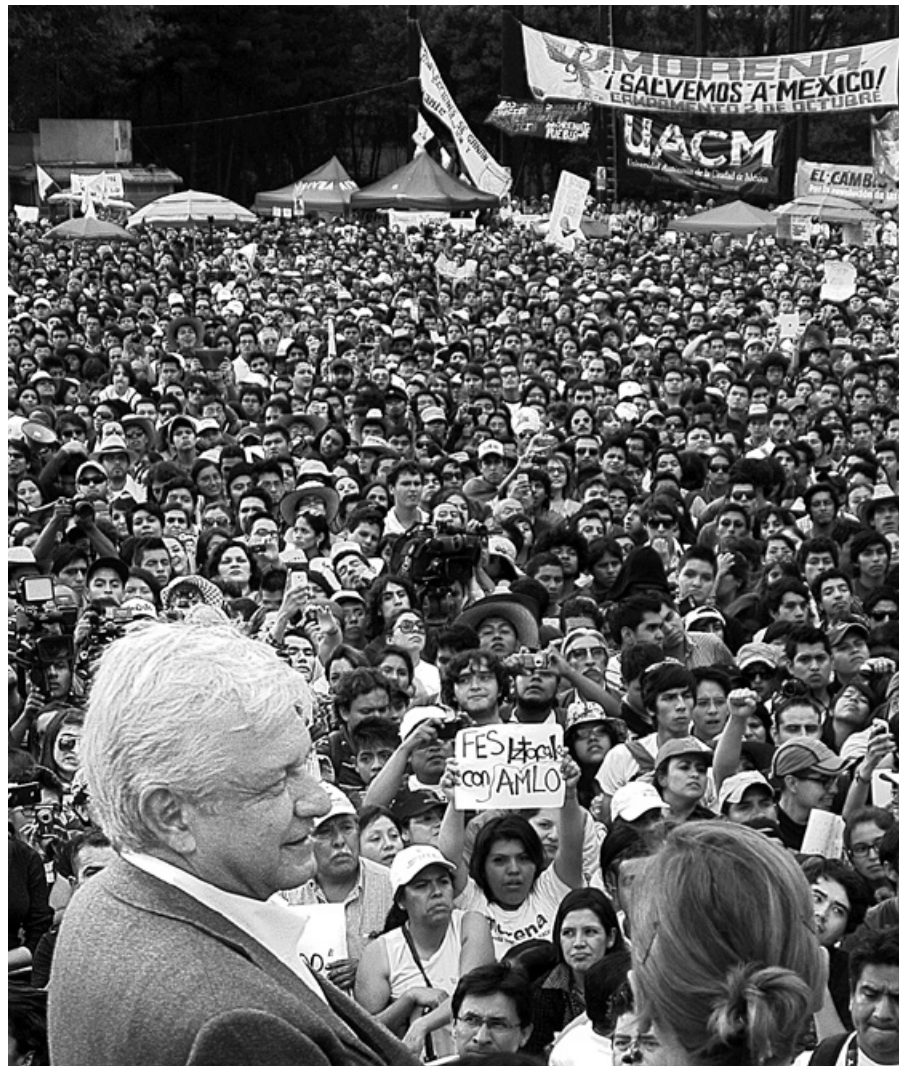
En cuanto a la agenda social, se muestra un talante más progresista y se pretende incidir en la (re)distribución de la riqueza: desde duplicar las pensiones para adultos mayores hasta atender —mediante transferencias monetarias— a los jóvenes sin acceso a estudios y empleo. Destaca también el énfasis que se pretende brindar a la economía social, solidaria y cooperativa en el ámbito del desarrollo territorial.⁶ En el rubro de la seguridad pública es donde mayores suspicacias, dudas y contradicciones despiertan las estrategias propuestas por el presidente electo. Aunque

⁵ Andrés Manuel López Obrador, *Proyecto de Nación 2018–2024*, México, Movimiento Regeneración Nacional, 2017.

⁶ *Idem*.

se parte del reconocimiento de que la violencia no se combate con la militarización y con mayor violencia, la realidad es que la amnistía y la pacificación son nociones escasamente sustentadas. Las respuestas ante el tema de la violencia generalizada no son contundentes, ese problema público remite a una vorágine de odio y dolor humano que sacude las entrañas de una sociedad convulsionada y lacerada por la indefensión y el maremágnum de miedo y sangre derramada en miles de homicidios, desapariciones, asaltos, secuestros y ejecuciones masivas. Estaría por verse si la estrategia de «Becarios sí, sicarios no» (programa «Jóvenes construyendo el futuro») se despoja de su carácter retórico y se hace operativa, de manera que consiga disuadir a cientos de miles o millones de jóvenes que en los últimos lustros hicieron del crimen un estilo de vida, una razón de identidad cultural y un *modus vivendi*.

Estos mínimos tópicos abordados son algunos de los más expuestos a la gravitación de los poderes y contrapoderes fácticos que —desde afuera y desde adentro, desde arriba y desde abajo— harán valer su voz, intereses y control territorial en la correlación de fuerzas que despunte en la eventual configuración de un proyecto de nación sobre fundamentos nacionales; incluyendo, por supuesto, a la gran alianza electoral que en su momento cobrará facturas a la nueva élite política.



Notas finales: mínimas bases para la (re)construcción de un proyecto de nación como respuesta a la crisis de Estado

Si bien el gobierno progresista elegido no representa del todo una posibilidad de transformación profunda para la sociedad mexicana —al no trastocar el vigente patrón de acumulación y los intereses facciosos que se reproducen al amparo del Estado—, podría abrirse una ventana de oportunidad que trazara mínimas bases que permitan redefinir el rumbo del país. En principio, la pacificación es una urgencia impostergable; de no lograrse comprometerá en el mediano plazo la misma acumulación de capital (en 2018 se calculan pérdidas equivalentes a 21% del PIB por la violencia y la inseguridad pública) y ahondará la *crisis de Estado* acarreada desde hace dos décadas. Explorar los cómo supone consensos y acciones que no sean erráticas; al tiempo que se atiende desde el Estado a los niños a temprana edad y se generan las condiciones para que existan empleos dignos que hagan creer a amplios sectores de la población en las actividades legales. Otra herencia factible —más allá de la reducción de la burocracia y de la arrogancia que estriba en declarar «No hago milagros, pero sólo yo acabaré con la corrupción»— sería materializar una reforma de la administración pública con la intención de superar su incompetencia, mejorar su capacidad de respuesta y ejecución ante los problemas públicos y simplifi-

car sus procedimientos y trámites. Al margen de la reconstrucción de una industria petrolera que privilegia la exportación sin valor agregado, el retorno a una política industrial que enfatice el avance tecnológico y regenere los encadenamientos productivos intra e interregionales es también factible y fundamental para contar con márgenes de maniobra que propicien un crecimiento económico sobre bases endógenas. Otra alternativa ocurriría con la transición de una política social neosistencialista, que da prioridad a las transferencias monetarias hacia los grupos sociales depauperados, a una agenda social orientada a construir un sentido de comunidad.

No obstante, gestar cierto viraje en la conducción del país en aras de caminar por el sendero de la (re)construcción de un proyecto de nación supone alejarse del voluntarismo y comenzar a transitar de la promesa hacia la narrativa de lo factible. Por ende, es fundamental dejar atrás la retórica y llenar de sustancia y contenido las frases dirigidas a las grandes masas: «No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre», «La mejor política exterior es la buena política interior», «Becarios sí, sicarios no» y «Abrazos, no balazos», son algunas de las frases que es necesario colocar en la ruta de lo posible y operativo y, con ello, transitar de la polarización y las emociones de las masas a una etapa de reconciliación que reposicione al Estado mexicano en la senda de la regeneración de sus instituciones y que a su vez lo aleje de la depredación de la política y de la fragmentación de la sociedad. Si no se caminan esos mínimos pasos, *L'adoration du veau* pintado por Francis Picabia será, de nueva cuenta, una realidad en México al tratar de suavizar y hacer funcionales el ejercicio del control social, el autoritarismo y la violencia. 🐔



Estaría por verse si la estrategia de «Becarios sí, sicarios no» se despoja de su carácter retórico y se hace operativa para disuadir a cientos de miles o millones de jóvenes que en los últimos lustros hicieron del crimen un estilo de vida, una razón de identidad cultural y un *modus vivendi*.
Fotografía: Eneas de Troya

México, desafíos políticos y... no desaprender de la experiencia regional

OSCAR MAÑÁN*

La experiencia latinoamericana reciente aporta varias lecciones para impulsar proyectos de cambio social. Desde ese mirador, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador puede considerar varios desafíos: conciliar el crecimiento electoral con una agenda de cambios más o menos radicales, replantear la inserción internacional y tejer alianzas con gobiernos afines al cambio social, vincularse al mercado mundial y afrontar las políticas comerciales asimétricas, asumir el control de la producción y los recursos naturales en un ámbito de convivencia diversa y multicultural, reorganizar la economía nacional y extender los derechos sociales, imprimir una connotación positiva a la lucha anticorrupción mediante la reconstrucción de una institucionalidad que genere una economía que incluya a los pobres, construir un Estado garante de la estabilidad política y desmantelar los soporte del antiguo régimen, y reconocer las diferentes nacionalidades y sus autonomías para construir un «mundo donde quepan todos los mundos».

De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo:
de la derecha cuando es diestra,
de la izquierda cuando es siniestra.

Mario Benedetti

México tuvo elecciones nacionales históricas para que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la alianza Juntos Haremos Historia conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) llegaran al gobierno con 52.9% de los votos. La diferencia fue inusual frente a las dos coaliciones que disputaban mayoritariamente la contienda: la alianza Por México al Frente con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC) que cosecharon 22.5%; y la coalición Todos por México conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México

(PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal) con un magro 16.4% de los votos.

Este país conformó su Estado moderno tardíamente, luego de la revolución nacionalista que comenzara en 1910 y después del largo periodo de inestabilidad política de los 1920, cuando Lázaro Cárdenas articularía un pacto social donde diferentes sectores sociales se incorporarían al consumo de masas. Dicho Estado corporativo fue hegemónico y, bajo el gobierno ininterrumpido del PRI (desde 1946), mantendría una estabilidad política sin igual hasta 2000. Esa estabilidad política se sostuvo con fuertes dosis de autoritarismo y represión (del que son ejemplos las masacres de Tlatelolco en 1968 y Corpus Christi en 1971), pero

*Profesor, Centro Regional de Profesores y de la Universidad de la República, Uruguay

siempre con una institucionalidad literalmente a prueba de balas. Precisamente, el aludido autoritarismo político, bajo un manto de legalidad sospechada, condujo a Vargas Llosa a definir a México como la «dictadura perfecta», lo que le significó la expulsión del país, con fundamento en la aplicación del artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Empero, entre los 1980 y 1990, el neoliberalismo económico y su inserción subordinada a los intereses de Estados Unidos, lejos incluso de la independencia formal de años anteriores, el régimen político comienza a desintegrarse tráguándose a los líderes que prometían transformaciones dentro del mismo partido de Estado (Colosio Murrieta, Ruiz Massieu, entre otros). Lo envidiado por otros países fue la capacidad de «producción simbólica» que tuvo el Estado mexicano y que mantuvo un velo impenetrable a pesar de los desmanes de la política. En 2000, el PAN ganaría las elecciones para fechar un periodo de alternancia con el PRI, pero que no obstaría para que siguiera avanzando ese proceso constante de desvanecimiento del pacto social que explicara la estabilidad política anterior.

Actualmente, parece que cayeron todos los velos posibles y se deja traslucir un Estado en desintegración,¹ aparte de los siempre violentos coletazos de los añejos pactos sociales que se terminan o pujan por rearticularse. Esto puede verse en los empujes de la violencia institucionalizada en los diferentes niveles del Estado (federal, estatal, municipal) que explican matanzas crueles, de Acteal a Ayotzinapa, además de los asesinatos de periodistas críticos y políticos del presente. Sin olvidar las luchas intestinas de grupos del «crimen organizado» o no tanto, los intentos de fraude electoral, las redes de extorsión, el intercambio de favores, los grupos paramilitares y las «autodefensas» que buscan llenar los vacíos que ese Estado que se desintegra deja.

El dilema de la coalición de gobierno estará en pacificar al país, lo que exige justicia, derechos,

desarticular la violencia institucionalizada, es decir, restablecer la esencia de la política y enterrar ese «poder corrupto» que se aleja de sus bases colectivas soberanas. Estas notas apuntan temas inminentes para un cambio social necesario en México, alguno esbozado de manera general en el Programa de Gobierno de Morena, con el objetivo de discutir la experiencia regional y tomar aprendizajes de la misma.

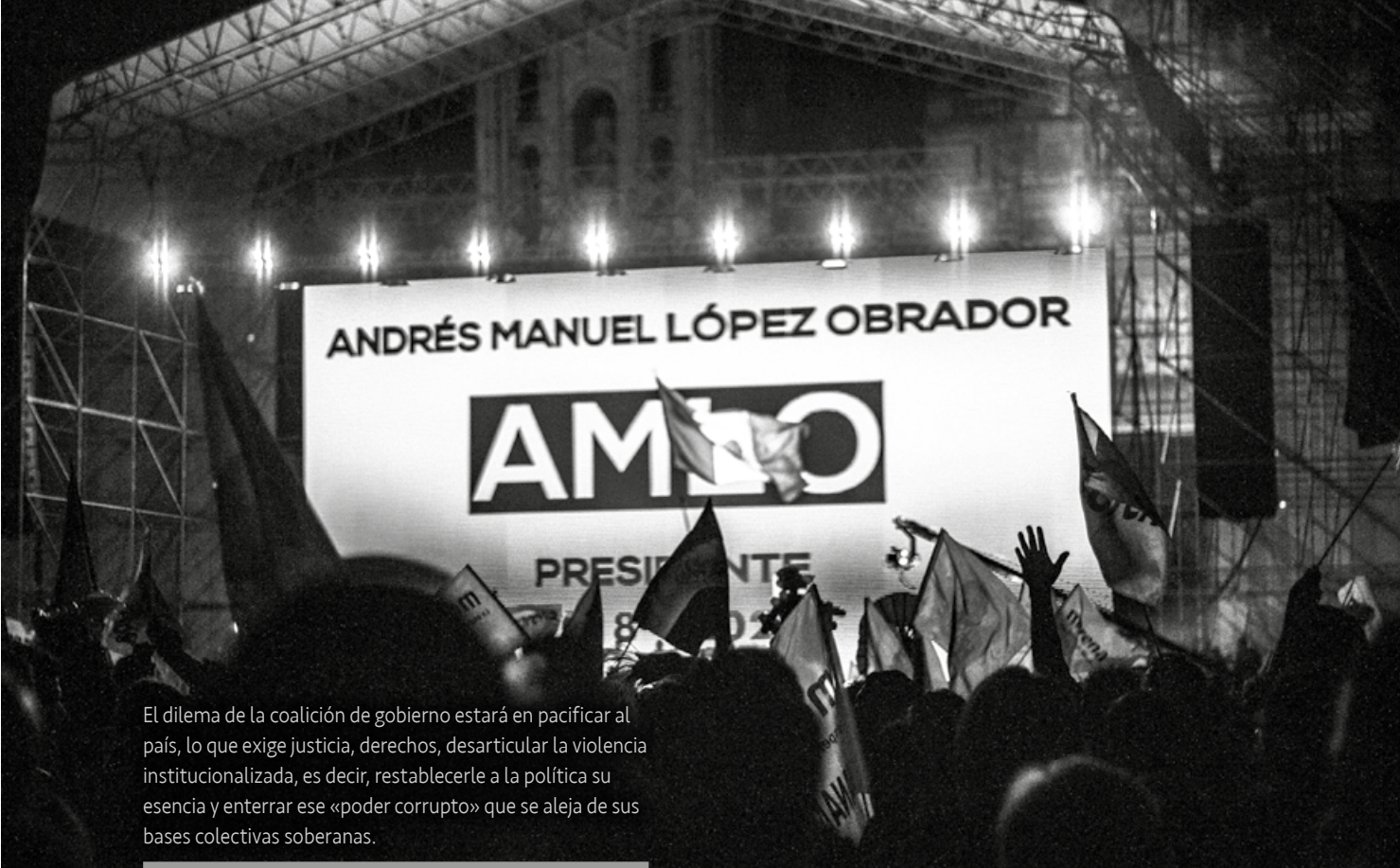
Los desafíos de no desaprender de la región

El cambio social y político siempre trae consigo conflictos, y para construir algo diferente es necesario en cualquier realidad romper, sin concesiones, con lo anterior. Como reza la frase que se le atribuye a Einstein, sería una «locura hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes». Vale decir que el momento esencial para los cambios, o por lo menos para «marcar la cancha» (el rumbo), son los primeros 100 días de gobierno, si se desperdicia «la luna de miel» inicial, la historia muestra que las dificultades se acrecientan.

1. Uno de los aprendizajes sobresalientes de la región es la dificultad planteada para lidiar con las contradicciones entre el crecimiento electoral de un movimiento o partido y su esencia, si éste propone cambios más o menos radicales. La política de alianzas llevó a desdibujar las propuestas programáticas de los movimientos políticos, en especial de aquellos pertenecientes al espectro ideológico de las izquierdas. De aquí que en aras de constituir fuerzas electorales imbatibles se abandonaron cambios sociales perseguidos históricamente por tales movimientos o partidos, por lo que perdieron la confianza y el respeto de la comunidad política. A pesar de la popularidad que el expresidente José Mujica de Uruguay ha cosechado a escala internacional, en el ámbito nacional se recuerda su célebre frase de que «para ganar hay que abrazarse con las culebras», tal fue el sello de la política de alianzas de su campaña electoral. Las culebras terminaron mordiendo el proyecto de la izquierda, porque el morder está en su naturaleza, con un costo demasiado alto para el país y las frustraciones para el proyecto de la izquierda. Las experiencias de Dilma Rousseff en Brasil o el presidente Fernando Lugo en Paraguay atestiguan igualmente cómo las alianzas electorales que no sustentan proyectos políticos de base y programáticos de mediano plazo terminan naufragando con procesos dolorosos para los países.

2. Otro desafío no resuelto es la inserción internacional de los países, decisión política fundamental de los Estados si las hay, además de elegir los amigos, aquellos socios con quienes compartir un proyecto político más allá del comercial. México tuvo una tradición histórica de diplomacia internacional que hizo escuela en América Latina, basado en una política de no intervención y de solidaridad internacional que abandonó en la década de los 1990; hoy toda la

¹ Jesús Castillo y Oscar Mañán, «México un Estado en desintegración: violencia institucionalizada como degradación extrema de la política», *Revista Mexicana de Ciencias Agrarias*, vol.1, 2015, pp.81-86.



El dilema de la coalición de gobierno estará en pacificar al país, lo que exige justicia, derechos, desarticular la violencia institucionalizada, es decir, restablecerle a la política su esencia y enterrar ese «poder corrupto» que se aleja de sus bases colectivas soberanas.

región la extraña. Enfrentar las políticas imperiales actuales exige construir confianza y alianzas estratégicas fuertes, máxime con líderes como Donald Trump que, parafraseando a Tomás Eloy Martínez, «a menudo tienen un coeficiente intelectual menor al promedio de la población». En efecto: para construir apoyos internacionales estratégicos es imprescindible construir una institucionalidad supranacional, que en el caso de los países mayores de la región deberían además financiarla. Por ejemplo, un banco de desarrollo regional que apunte procesos productivos estratégicos, ya sea en energía o infraestructura, puede ser un camino para el fortalecimiento de una visión antiimperialista. El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela destinó ingentes recursos para fortalecer organismos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). De otro modo éste y otros proyectos que enfrentaron al imperialismo no hubieran subsistido.²

² Una mirada miope, a menudo presente en la misma Venezuela, le reclamaba a Chávez el gasto excesivo en solidaridad

3. Las políticas comerciales son también una parte fundamental de dicha inserción internacional. México desempeña un papel en cuanto país de dimensiones continentales, y no cabe duda que es tiempo que comience a mirar hacia el Sur. Las políticas estrictamente comerciales o aquellas «más políticas» denominadas de integración, requieren de Estados fuertes, so pena de permanecer como rehén de lo que las empresas transnacionales y la institucionalidad jurídica internacional que opera por sobre los Estados nacionales (tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones [Ciadi], las calificadoras de riesgo que santifican la inversión, etcétera). Asimismo, una política mirando al Sur es posible, al sur de América, África, Asia; «una integración de productores y no de consumidores»³ pensadas con el objetivo de potenciar la capacidad productiva y no solamente de ampliar mercados de posibles consumidores. Este es *el desafío de romper la lógica de los tratados de libre comercio nacidos bajo los designios del neoconservadurismo estadounidense*. Popularmente se sostiene que a los vecinos no se les puede elegir, y la inserción internacional de México está

internacional o en dicha institucionalidad para la unión de los pueblos vinculado al sueño idealizado de Bolívar; sin embargo, no se repara lo suficiente en la consideración sobre lo fugaz que hubiera sido el gobierno de Chávez sin esta coraza internacional que lo defendiera.

³ Oscar Mañán, «Inserción internacional de América Latina: retos para un cambio de rumbo», ponencia presentada en la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales, Guadalajara, julio de 2012, en <https://www.researchgate.net/publication/281066572>

estrechamente atada a Estados Unidos; eso no cambiará por razones geográficas o por la comunidad binacional que comparten. Empero, es menester articular un conjunto de alianzas Sur-Sur que lo posicione más allá del lugar de mero patio trasero del gigante del norte.

4. Los cambios económicos que se realicen deben pensarse para construir un control nacional de la actividad productiva y de los principales recursos naturales, que pueden ser conceptualizados como «bienes comunes» de toda la población; asimismo, rescatar y *aggiornar* viejos valores de la revolución nacionalista de principio de siglo XX para articularlos con nuevos desafíos de una convivencia diversa y multicultural emergente. No debe desaprenderse la experiencia de los progresismos latinoamericanos, basados en el extractivismo, en la inversión extranjera directa que busca grandes subsidios impositivos bajo el blindaje del derecho transnacional privado, el cual defiende sus intereses subordinando la soberanía de dichos países. Uruguay, el país más pequeño del sur, enfrentó un juicio millonario de la tabacalera Phillip Morris⁴ que pretendió impedir una política antitabaco pensada como política de promoción de la salud. La confrontación pudo ganarse porque se enfrentó y se buscaron respaldos económicos y políticos con el fin de solventar la soberanía nacional. El mismo país aprobó en 2013 una ley⁵ para regular la producción, distribución y venta del *cannabis*, como parte de una política orientada a minimizar riesgos y reducir daños, promoviendo la información, educación y prevención sobre el uso problemático de drogas. Con la intención de implementar el control de la distribución y aislarlo del tráfico ilegal, la venta se realizó en farmacias —hecho que debió enfrentar a la banca transnacional—, misma que a su vez procedió a cerrar las cuentas de las empresas que expendían la marihuana producida bajo regulación estatal. Otra perla del orden capitalista vigente.

5. Las tareas de largo aliento deben abordarse sin demoras, entre otras, la reorganización económica, la extensión de derechos y la lucha anticorrupción que implica, asimismo, una política positiva de construcción de institucionalidad para hacer una economía más amigable con los más de 50 millones de pobres. En adición, fortalecer los controles estatales de las fronteras para desalentar los negocios ilegales y tráfico diversos (ya sea de drogas, armas o personas), para lo que será menester también emprender un desmontaje de todos los niveles del Estado permisivos en esos aspectos. Sin embargo, los frentes de lucha deberán elegirse con cuidado para lidiar con posi-

⁴ Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Laudo, Philip Morris Brands SárI, Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. (las demandantes) y República Oriental del Uruguay (la demandada) (Caso CIADIN.° ARB/10/7), 2016, en https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2016/noticias/NO_U130/laudo_spa1.pdf

⁵ Poder Legislativo, «Ley 19.172 Marihuana y sus Derivados», 7 de enero de 2014, en <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp169350.htm>

bles contradicciones entre la estabilidad política y la profundidad de los cambios. El desafío es de dimensiones gigantescas, tanto en la desarticulación del tráfico de estupefacientes, la ocupación de los territorios y el desmantelamiento de las organizaciones dedicadas a la extorsión que generan inestabilidades de todo tipo. Enfrentar ese poder corrupto, apartado de la comunidad soberana en el sentido de Dussel,⁶ que se ejerce en los diferentes estados de la república, no será fácil y deben primero desarticularse las redes institucionales que lo hacen posible. La contradicción es monumental, fortalecer al Estado regulador de la economía y árbitro de los desmanes de la política, a la vez que se cercenan los tentáculos de dicho Estado que sostienen la red de corrupción o del negocio *non sancto*. Este quizá es el desafío donde se deberá poner énfasis, para ello la experiencia contemporánea de Brasil es fundamental, donde el financiamiento de los partidos y la actividad de la principal empresa público-privada puso a temblar la estabilidad democrática. El país sudamericano vio tambalear el sistema político entero con acusaciones varias de corrupción que apuntaban a un financiamiento de los partidos políticos (oscurecido y aceptado por varios años), a la vez que la clase política con frecuencia recibía «dádivas» de grandes empresas. En Perú, de igual modo, su expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, debió renunciar por sobornos recibidos de dicha empresa brasileña. Ecuador no fue la excepción y su vicepresidente fue acusado de tomar incentivos de esa empresa. El caso de México podría tener dimensiones aún mayores a las imaginables para el caso Brasil, lidiar con esa ética política no será el mejor escenario, mientras que enfrentarlo parcialmente puede cuestionar todo el castillo de naipes que sostuvo 90 años de estabilidad política.

6. El desafío de construir un nuevo Estado tendrá éxito si se corroen los apoyos del actual y se enfrentan decididamente a aquellos sectores que resistirán la pérdida de privilegios: la estabilidad política deberá responder a nuevas bases. Puede

⁶ Enrique Dussel, *20 tesis de política*, México, Siglo XXI, 2006.



Fortalecer los controles estatales de las fronteras para desalentar los negocios ilegales y tráficos diversos (ya sea de drogas, armas o personas), para lo que será menester también emprender un desguace de todos los niveles del Estado permisivos en tales aspectos.

tipificarse al Estado mexicano como «en desintegración», cuestión que agrava la reconstrucción de los aspectos esenciales de la institucionalidad que se necesita. Los apoyos del nuevo pacto hegemónico deberán ser los sectores hasta ahora al margen: sectores populares, trabajadores sedientos de justicia, campesinos, indígenas, productores nacionales, pequeños comerciantes formales e informales, empresarios con vocación nacional entre otros, quienes deberán conquistar las calles y ser la línea de defensa del cambio. No obstante, la dificultad estará en desarrollar un proyecto capaz de seducir a todas estas clases, sectores y actores sociales para direccionarlos hacia la posibilidad cierta de los cambios estructurales que se propongan; porque la paciencia no es una virtud latinoamericana (por ejemplo, los gobiernos que intentaron cambios en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros).

7. Parte del anterior desafío es el lugar de las diferentes nacionalidades y sus autonomías para la construcción de un «mundo donde quepan todos los mundos». El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) exponía el 1 de enero 1996:

El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La Patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la ríen, que la amanezcan todos.⁷

⁷ Ana Esther Ceceña, «El zapatismo. De la inclusión en la nación al mundo en el que quepan todos los mundos», 2004, en <http://www.geopolitica.ws/articulo/el-zapatismo-de-la-inclusion-en-la-nacion-al-mundo/>

En el programa que guía la lucha de Morena se plantea una «nación pluricultural» y «el respeto a los pueblos indígenas»; no obstante, debería trabajar en construir múltiples naciones que hagan de la pluriculturalidad un México habitable por todas y cada uno de sus riquísimas tradiciones y las nuevas construcciones que aparezcan. Bolivia y Ecuador avanzaron en las definiciones conceptuales que vienen de las tradiciones indígenas del Buen Vivir o el Vivir Bien, propias de las culturas Quechua y Aymara, empero no están exentos de contradicciones. Ambos países avanzaron hacia una crítica a las ideas tradicionales de desarrollo y expusieron los «límites políticos, económicos, sociales y ambientales» del crecimiento económico capitalista contemporáneo basado en la explotación de los recursos naturales. Ecuador incluso elevó a rango constitucional «los derechos de la naturaleza» (artículos 71-74)⁸ y avanzó en la construcción de indicadores para medir ese concepto cultural de Buen Vivir. Bolivia tiene un proceso conceptual interesante que cuestiona la vertiente productivista del desarrollo, pero muchas veces acepta más extractivismo en aras de avanzar en esas alternativas. De lo que se trata es de avanzar en alternativas al desarrollo en sus vertientes clásicas, más allá de las alternativas del mismo desarrollismo en vertientes renovadas.⁹

En cualquier caso, el nuevo gobierno mexicano deberá más temprano que tarde enfrentar estos desafíos. No desestimar que la experiencia regional será fundamental para emprender un camino de cambios y construir la viabilidad política de ese nuevo país en el que por fin «quepan todos los mundos». 🐦

⁸ Constitución Política de la República de Ecuador, en <http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf>

⁹ Eduardo Gudynas, 2011, «Debates sobre el Desarrollo y sus alternativas en América Latina. Una breve guía heterodoxa», en M. Lang y D. Mokrani (eds.), *Más allá del desarrollo*, Quito, Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo y AbyaYala, pp. 21-53.

Morena

y la «cuarta transformación» histórica de México

GERARDO OTERO*

Ante el triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador, quien encabezará el nuevo gobierno mexicano para el periodo 2018-2024, un grupo notable de intelectuales, académicos y políticos se dio cita para discutir una serie de temas cruciales que habrá de afrontar el nuevo gobierno cuya insignia es la llamada «cuarta transformación», en alusión a un ciclo histórico de larga duración que incluye la Independencia, la Reforma, la Revolución —tres episodios que tuvieron como factor común la violencia política— y ahora la referida «cuarta transformación». Ésta deviene de un proceso electoral realizado de manera pacífica, el tercer intento, a la postre exitoso, luego de dos incursiones fallidas, marcadas por la presunción de fraude electoral. En el foro de análisis se pasó revista a los grandes desafíos de este gobierno y en este texto se hace una reseña de los grandes ejes temáticos del debate: derechos humanos, corrupción e impunidad y el tránsito de Morena, de movimiento social a partido político triunfante.

*Profesor de Estudios Internacionales y Sociología, Universidad Simon Fraser, Canadá

Traducido del inglés por Humberto Márquez Covarrubias

El 1 de julio de 2018, México eligió a un presidente de centroizquierda por primera vez desde que Lázaro Cárdenas fue elegido en 1934. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganaron las elecciones de manera aplastante: 53.2% de los votos con 64.3% de la participación ciudadana,

obtuvieron además la mayoría en ambas cámaras del Congreso. El mandato es, por lo tanto, bastante fuerte. Significativamente, tanto el Congreso como el gabinete de gobierno tienen paridad de género, una primicia para cualquier país latinoamericano. Dada la importancia de estas elecciones, Diálogos por la Democracia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organizó una conferencia de tres días en noviembre de 2018 con la intención de analizar los desafíos del nuevo gobierno que prometió una «cuarta transformación» para México.

La primera transformación histórica fue considerada como la Independencia de México de España en 1821; la segunda fue la lucha de Reforma liberal por un Estado secular, que llevó a la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1857; y la tercera fue la Revolución de 1910, que culminó con una nueva constitución en 1917, una reforma agraria progresista y la legislación laboral. La violencia política fue un factor clave en la producción de cada una de las transformaciones. La «cuarta transformación», de suceder, se llevaría a cabo a través de un proceso electoral pacífico. Y, sin embargo, las dificultades de lograr algo suficientemente significativo como para ser considerada una «cuarta transformación» son enormes.

En este artículo describo los principales problemas y desafíos discutidos en la conferencia aludida.

Derechos humanos

México llegó a 2018 convertido en un cementerio con alrededor de 200 mil personas asesinadas desde 2006 y más de 40 mil personas desaparecidas. El nuevo gobierno debe respetar y promover los derechos humanos, comentó el padre Miguel Concha. Él postuló la indivisibilidad de tres aspectos de los derechos humanos. Primero, la justicia transicional debe ser accesible para todos a fin de evitar la revictimización, a la vez que los espacios de abajo hacia arriba deben estar



disponibles. Segundo, necesitamos un cambio de paradigma en la seguridad y mantenernos alejados de la militarización. Tercero, el Estado neoliberal debe ser desarticulado y crear uno que garantice los derechos humanos. La sociedad civil exige el establecimiento de una comisión de la verdad sobre los derechos humanos en el nivel federal. Estos derechos deben considerarse como un instrumento para reparar su dignidad y legitimidad como derechos de las personas, al tiempo que sugieren respuestas concretas y soluciones a la explotación y la opresión como causas fundamentales.

Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan del estado de Guerrero, expresó que desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 ha habido un mar de sangre, un mar de lágrimas, pero también un mar de esperanza. Sin embargo, advirtió que en las lenguas indígenas de su región no existe la pala-

bra «desaparecido» y se opuso a la proposición de que «la lucha por los derechos humanos es el eje de toda lucha» porque su violación es simplemente un síntoma. La raíz del problema son las estructuras de explotación, opresión y desigualdad que hacen que la clase dominante recurra a la represión. Esas estructuras deben cambiar. Para empezar, pidió la inmediata derogación de la Ley de Seguridad Interior y la desmilitarización.

En opinión de Alejandro Encinas, ahora subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población en el gobierno de AMLO, la alternancia en el gobierno de diferentes partidos políticos no garantiza un cambio de régimen. Lo que se requiere son nuevos paradigmas para la reconstrucción del Estado. La dignidad humana y los derechos humanos deben convertirse en el centro de atención en aras de recuperar el ser colectivo. México ha atravesado una profunda crisis humanitaria debido al debilitamiento del Estado y al empoderamiento de otros poderes fácticos como

El Estado neoliberal debe ser desarticulado y crear uno que garantice los derechos humanos. Estos derechos deben considerarse como un instrumento para reparar su dignidad y legitimidad como derechos de las personas, al tiempo que sugieren respuestas concretas y soluciones a la explotación y la opresión como causas fundamentales.

el crimen organizado. México se ha convertido en una gigantesca tumba clandestina con 26 mil personas muertas no identificadas. Por otro lado, los migrantes no serán criminalizados. A los extranjeros que Estados Unidos considera extraños y apátridas, el Estado mexicano tendrá que hacerlos sujetos de derechos. Además, el nuevo gobierno promoverá la libertad sindical, mediante votación secreta, directa y universal por parte de los trabajadores. Este será el final del «charrismo» (palabra que designa a los representantes sindicales corruptos impuestos por las empresas o el gobierno, no por los trabajadores).

Los derechos de los pueblos indígenas tienen requerimientos especiales. Involucran el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, al territorio y a la autonomía mandados por convenios que México ha firmado con las Naciones Unidas. Neil Harvey argumentó que, pese a que las elecciones demostraron un descontento popular generalizado, el nuevo gobierno de Morena corre el riesgo de repetir las prácticas pasadas con respecto a los pueblos indígenas. Si observamos críticamente los periodos posteriores a la Independencia, la Reforma liberal y la Revolución, queda claro que, si bien los pueblos indígenas participaron en cada una de esas transformaciones, luego se vieron subordinados a nuevos regímenes que los despojaron de sus tierras en nombre del progreso o se promovió la reforma agraria como medio para obtener el apoyo político a un régimen centralizado y autoritario. Por lo tanto, debemos tener cuidado con los efectos potencialmente negativos de la «cuarta transformación» histórica proclamada por AMLO y Morena, en particular con respecto a los impactos de megaproyectos como el Tren Maya y la creación de nuevas plantaciones agrícolas en el sur de México. Dichas propuestas han generado críticas por parte de los zapatistas, del Congreso Nacional Indígena y de varias organizaciones locales que, en opinión de Harvey, temen con razón que AMLO pueda simplemente continuar con las mismas políticas de desarrollo rural de sus predecesores. Un enfoque alternativo sería que AMLO y sus asesores escuchen y aprendan de las

comunidades que han resistido de manera activa a tales políticas y han desarrollado formas de desarrollo ecológicamente sostenibles y socialmente justas. En la medida en que se acepte o rechace tal alternativa se determinará si la «cuarta transformación» histórica es un caso de *déjà vu* o no para los pueblos indígenas de México.

Corrupción e impunidad

María de la Luz Mijangos, excontadora mayor de Hacienda de la Ciudad de México, abordó los desafíos de combatir la corrupción y la impunidad con eficacia, en un contexto en el que los poderes fácticos como el crimen organizado son a menudo más poderosos que las autoridades. La eficacia en el combate a la corrupción y la impunidad nunca se ha logrado. Mijangos planteó una serie de preguntas conceptuales y metodológicas con el propósito de abordar la eficacia, que incluyen: ¿Qué se puede hacer para una lucha eficaz contra la corrupción? ¿Cómo se puede medir una reducción de la corrupción y la impunidad? Sobre la percepción del público, hay índices tales como denuncias o quejas, pero, ¿cuál es el concepto de corrupción? ¿De cuál concepto debemos hablar? ¿Qué entiende la gente por dicho fenómeno? Este es un amplio campo de estudio que incluye lo que la sociedad espera de esta lucha. Hay varios agujeros en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero hay también un modelo con algunos avances. Necesitamos inteligencia financiera, y su unidad no ha participado con un trabajo sistemático. La corrupción política ha progresado y, de modo estratégico, sustituye a todas las decisiones del poder político. También se requiere generar un seguimiento de todos los candidatos. Debe haber sinergias y coordinación entre todos los que combaten la corrupción, incluidos los comités de ciudadanos. Las pruebas deben reforzarse para que sean contundentes. Por ejemplo, en investigaciones de la sociedad civil sobre casos de corrupción como el de Odebrecht, las pruebas deben ser convincentes para que la Fiscalía General pueda construir un caso sólido. A fin de perfeccionar o mejorar las pruebas, debe haber acceso directo a bases de datos, como las de los notarios. El poder judicial requiere desarrollar una actitud responsable para alcanzar un estándar de prueba adecuado, traducir la política anticorrupción en acciones concretas y lograr sus objetivos.

Santiago Nieto, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que México ocupa uno de los peores rangos en cuanto a la corrupción y a su sistema penal en el mundo. Sólo 2% de los delitos recibe una sentencia. Existen otras vías a través de las cuales se realizan condenas o reparaciones para 8% de los casos. Preguntó: ¿en qué momento nos encontramos con respecto al Estado de derecho? AMLO no busca la venganza sino la justicia como el nuevo *modus operandi* del Estado. En el pasado, existían los «diezmos priistas», los pagos de 10% que



Stephen Morris sugiere que uno de los objetivos principales de la nueva administración debe encaminarse a transformar la cultura de la corrupción, al tiempo que inicia la participación ciudadana en su lucha.

los funcionarios públicos exigían para otorgar un permiso o alguna otra concesión gubernamental en el momento en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaba en el poder; o los «moches panistas», es decir, cuotas entregadas a los trabajadores públicos en tiempos del gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN). Luego, durante la administración del PRI encabezada por Enrique Peña Nieto (EPN), estaban las empresas fantasmas, que recibieron enormes pagos del gobierno por ningún trabajo realizado. Lo anterior crea una competencia desleal o perversa con firmas legítimas e impide su desarrollo en el sector privado: esas firmas fantasmas ya no se conformarán con 10% sino con 100% de los recursos públicos. El desafío, por ende, incluye tanto la voluntad política como los cambios institucionales. Existe voluntad política en el nuevo gobierno y su desafío es eliminar la protección de las «empresas» ilícitas o fantasmas.

Es un derecho humano vivir sin corrupción, declaró Nieto. El Estado debe ejercer la acción penal sobre el lavado de dinero y la corrupción. Debe haber comunicación y cooperación entre la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República (órgano autónomo federal de reciente creación). ¿Cómo pueden mejorarse los mensajes sobre corrupción hacia el público?

La Fiscalía debe ser una entidad autónoma del poder político en el procesamiento público y la ejecución de la ley. Si vamos a cumplir la Constitución, las fiscalías deben ser autónomas y las estrategias jurídicas deben estar coordinadas. La Constitución es la suma de todos los proyectos de la nación; tiene elementos neoliberales, pero también sociales. Necesitamos pensar más en los derechos colectivos que en los derechos individuales. El poder judicial debe darse cuenta de que este es un sistema: la ley debe ser coordinada. La acción penal debe ser central, también para recuperar los bienes públicos robados y aplicar de inmediato la inteligencia financiera.

Abordar la impunidad ha sido un objetivo oficial desde la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988). Su eslogan de campaña fue «Renovación moral». Pero no hubo organizaciones populares que lo ayudaran en la lucha contra la impunidad, según José Agustín Ortiz Pinchetti. AMLO propone la democratización del país y la lucha contra la corrupción y la impunidad; posee la voluntad política y la valentía para abordar dichos problemas. La valentía es, por supuesto, un tema emocional, pero será fundamental para avanzar en la lucha contra la corrupción. AMLO tiene un muy buen historial en la lucha contra la impunidad en el gobierno de la Ciudad de México

(2003-2006). No obstante, en 2018 la clase empresarial es mucho más fuerte. Quizá unos pocos casos emblemáticos de castigo ayuden a afirmar el Estado de derecho.

Los escándalos de corrupción fueron la raíz de la debacle de EPN y el PRI, de acuerdo con Stephen Morris, y en esa medida contribuyeron al deterioro de su imagen. Después de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron, EPN intentó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero ya era demasiado tarde. En contraste, esos escándalos contribuyeron a mejorar la imagen de AMLO y Morena. Morris es escéptico, sin embargo, de que la corrupción y la impunidad puedan ser eliminadas en tan sólo seis años. Sugiere que uno de los objetivos principales de la nueva administración debería ser comenzar a cambiar la cultura de la corrupción e incorporar la participación ciudadana en su lucha.

Morena: del movimiento social al partido político

Héctor Díaz Polanco expone que al tratar de explicar los resultados electorales de 2018 se destacaron dos posiciones: una afirma que simplemente hay una sociedad polarizada que quería un cambio y la otra posición es sostenida por expertos políticos simpatizantes del PRI. Argumentaron que la población mexicana se había hartado del *prianismo* (el gobierno del PRI y el PAN). Si esta fuera la explicación correcta, entonces los resultados del 1 de julio serían frágiles y podrían desaparecer. No obstante, esta es la explicación equivocada; o bien, la situación no es muy conocida o es una explicación interesada. El hecho es que, según Díaz Polanco, Morena resultó un instrumento clave para explicar el triunfo electoral. Es una construcción hegemónica, una estructura poderosa, la más poderosa de América Latina. Pero Morena tuvo que bloquear la llave de acceso a su membresía de 2017, cuando en ese momento tenía 3 millones de los 120 millones de votantes registrados. Hubo un proceso de transformación en el que militantes y simpatizantes se involucraron en las elecciones con acciones concretas. En 68 mil casillas electorales Morena tenía entre 8 y 10 observadores con el objeto de asegurarse de que no se cometería el fraude. En total, había 650 mil miembros en casillas electorales y en Chiapas 100% atendidas por militantes o simpatizantes de Morena.

Morena representa un punto intermedio en la política latinoamericana. Ha habido movimientos sin partidos y partidos sin movimientos. Morena es un partido de movimientos. La política redistributiva ha tenido un efecto ambivalente en la política latinoamericana. Por ejemplo, en Bolivia, 3 millones de una población de 10 millones han salido de la pobreza y se obtuvieron resultados similares en Brasil, Ecuador y Venezuela. Pero el enfoque exclusivo en esos países sobre la política de asistencia social tuvo un efecto

boomerang: los antiguos pobres se convirtieron en votantes conservadores, ya que eran meros objetos de la política pública. Transformaron su visión colectiva en una individualista y reaparecieron votando por la derecha en el proceso sociopolítico. Lo que se necesita para evitar ese resultado es crear una clase de votantes con formación política. La política pública debe convertir a las clases subordinadas en sujetos de su propio desarrollo.

Este es un viejo dilema: reforma o revolución. Entonces, ¿de qué se trata la «cuarta transformación»? Las últimas tres transformaciones fueron también revoluciones; la cuarta también debe serlo, pero debe dar un salto moral, económico y político. Sólo se están dando los primeros pasos: reformas profundamente arraigadas; esa es la condición para la revolución. La estructura política de Morena debe construirse con la intención de evitar el fracaso, y ello incluye los siguientes puntos: *a)* democracia de género, igualdad entre hombres y mujeres, comenzando con el Congreso y el gabinete; *b)* cualificación de liderazgo para su papel; *c)* la estructura de la formación política debe fortalecerse, comenzando con el apoyo de la mitad de todos los ingresos estatales recibidos por Morena, en proporción a sus votos electorales, que ascienden a 800 millones de pesos; *d)* debe haber una profundización de la ética en el partido y en el gobierno para ganar; y *e)* combatir la corrupción dentro del partido.

Enrique Dussel, filósofo de la UNAM, nos recordó la undécima tesis de Karl Marx sobre Ludwig Feuerbach: «Los filósofos han sólo interpretado (*interpretiert*) el mundo de diferentes maneras; de lo que se trata es de transformarlo (*verändern*)». Entonces, ¿qué pasa con la «cuarta transformación»? Es una transformación, no una revolución, pero tampoco es una reforma. En política no puede haber un sistema perfecto. La planificación no se puede hacer a la perfección. Pero la planificación imperfecta se puede hacer. La imperfección implica un error posible e inevitable. En política nada es seguro porque es muy compleja. Nunca se puede dar una solución definitiva a nada. Se puede hacer una reforma para



Gerardo Otero propuso que Morena, como partido, tiene la responsabilidad principal de contribuir al fortalecimiento de los movimientos sociales.

que el sistema sobreviva y continúe de la misma manera. La transformación sería un cambio más profundo en el futuro. La transformación debe tocar estructuras neurálgicas que sean reformas aunque no revolución. Para los anarquistas, lo que no es revolución es reformista: esto es lo que sostiene la extrema izquierda. Las transformaciones radicales ni siquiera se lograron en el socialismo realmente existente hasta la década de 1990, ni siquiera en teoría.

Una revolución radical implica una nueva subjetividad, dice Enrique Dussel. El capitalismo conduce a la catástrofe ecológica. Se tiene que cambiar la lógica de maximizar la ganancia. La modernidad está debajo del capitalismo y del socialismo teórico. Uno espera, entonces, que la «cuarta transformación» sea una reforma, pero no una revolución. La primera transformación fue la conquista que arrancó a las civilizaciones milenarias. Los pueblos indígenas nos enseñaron a vivir respetando la naturaleza. Walter Benjamin denuncia que hay que romper con la modernidad. Y Naomi Klein advierte que el capital no puede ser ecológico. La esencia de la «cuarta transformación» es la organización desde abajo, de abajo hacia arriba, comunidad por comunidad, con

sus fuerzas policiales comunitarias. El realismo crítico trata de hacer lo posible con criterios éticos. «No soy optimista, pero tengo esperanza», concluyó Dussel.

Gerardo Otero presentó una visión general de los partidos políticos de izquierda y los movimientos sociales en América Latina, propuso una teoría de la formación político-cultural de las clases subalternas y derivó los principales desafíos para el gobierno de Morena. Observó que los movimientos sociales que apoyaban las transiciones electorales y los gobiernos se desmovilizaron o fueron cooptados por las políticas emergentes de asistencia social del Estado, mientras que los movimientos autonomistas que se negaron a comprometerse con el Estado, como los zapatistas en México, quedaron en su mayoría marginados. Por sí mismas, ambas estrategias de transformación han fallado en lo general a sus bases populares. La dinámica de la formación de clases hacia una sociedad popular-democrática debe basarse desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, desde movimientos sociales arraigados en la sociedad civil y desde las instituciones del Estado. Propuso que Morena, como partido, tiene la responsabilidad

principal de contribuir al fortalecimiento de los movimientos sociales. Debe alentar sus capacidades de movilización y ejercer presión desde abajo en su compromiso con el Estado para promover la alternativa popular-democrática. La combinación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo es la única alternativa para profundizar el proyecto popular-democrático dentro del capitalismo con miras a trascenderlo en el futuro.

México es hoy la capital del pensamiento crítico, según lo expresó Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense de Madrid y representante de Podemos de España. Los derechos civiles son reversibles, y podemos pensarlos en los términos propuestos por Baruch Spinoza: el miedo se asocia con el monólogo, mientras que la esperanza se asocia con el diálogo. La derecha, argumenta Monedero, siempre apuesta por el miedo en el que sólo puede haber monólogo. El consumismo es lo que el neoliberalismo ofrece a los individuos. El fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) representó el fin de la guerra armada como una posibilidad de transformación social: «Cuando creíamos que teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas». En América Latina, las sectas evangélicas han sido enviadas para detener a la teología de la liberación, mientras que en Europa están ganando los que han apostado por el miedo. Todo se ha convertido en una mercancía. El capital financiero hace imposible que el Estado nación opere. Recordemos que el capitalismo se ubica en el eslabón más débil, o donde hay menos protestas: mujeres, pueblos indígenas, países subalternos. Las luchas de las mujeres y los pueblos indígenas son, por lo tanto, anticapitalistas. En todo momento, el plan B o plan C del capitalismo ha sido el fascismo.

Debemos asumir que venimos de las derrotas, pero la agenda para la búsqueda de la libertad, la fraternidad y la igualdad sigue vigente. Los intelectuales pesimistas son conservadores: debemos ser pesimistas optimistas u optimistas trágicos. Los malos análisis de la izquierda pueden ser muy perjudiciales. Por ejemplo, el movimiento autónomo español Indignados era un mosquito molesto para los poderosos; podemos, sin embargo, un partido simbiótico que está dispuesto a participar en el proceso electoral, los asusta mucho.

En la oposición, la derecha puede ser devastadora. Puede participar en la desinformación, desacreditar con noticias falsas y con presión económica o financiera. ¿Qué se puede hacer? La policía debe proteger a los pobres, ya que la violencia los golpea. Debe haber diálogo para la integración social con los migrantes. México ha dado una lección al mundo en su tratamiento de los migrantes centroamericanos en caravana hacia Estados Unidos. México debe entender el Estado desde el punto de vista de los municipios. Al mismo tiempo, la magia de México será volver a vincularse con el Sur. No se puede vaciar al partido. Debe haber una clara diferenciación de las fraccio-

nes: en el Congreso, los movimientos sociales, el gobierno, etcétera. El partido debe ir más allá del gobierno y presionar a la fracción parlamentaria para que continúe con su programa. Las personas deben politizarse y crear su propia narrativa. Las leyes que podemos hacer fueron hechas por el pueblo; de manera que debemos ser generosos y darle crédito. Si no confiamos en la gente, no vamos a ningún lado; la derecha les tiene miedo: «Que todos los David nos unamos con la esperanza».

John Ackerman, director de Diálogos por la Democracia de la UNAM, sostuvo que AMLO debe ser el presidente de todos, pero también puede ser un gobierno de oposición al poder económico. Su objetivo, de hecho, es separar el poder económico del poder político. Morena votó para reformar sus estatutos, de modo que 50% de sus recursos provenientes del Estado se dedique a la formación política, para capacitar a nuevos líderes. Hay un ala de izquierda que vive de su fe, su doctrina y su maximalismo. Pero necesitamos medir las causas y consecuencias. Marx advirtió a la Comuna de París que sería masacrada; hay problemas que no tienen una solución teórica, como lo expresó Boaventura de Sousa Santos. Los memes, por otro lado, producen alivio, mas son conservadores y desmovilizadores. Está bien generar ironía, risa y tensión, pero debemos mantener el enfoque. No podemos bajar la guardia. Los liderazgos son indispensables. En paralelo, debemos promover círculos o grupos deliberativos con el propósito de que generen nuevos liderazgos. En Podemos, por ejemplo, todos los cargos de liderazgo se deciden en las elecciones primarias. Cuando los individuos le deben el puesto a la gente, entonces no son tan leales al partido como lo son hacia la gente. Dicha dinámica ayuda a evitar que los partidos se conviertan en burocracias independientes, y se torna en una condición para avanzar en una dirección popular-democrática. 🐾

El vértigo transformista

Antinomias del lopezobradorismo en México

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS*

Dilucidar en qué forma de gobierno y en qué proyecto de desarrollo se traducirá el poder social de más de 30 millones de votantes representa un enigma en los primeros días en que Andrés Manuel López Obrador ha asumido la presidencia de la República mexicana. Sin embargo, los primeros pasos registrados en los pactos políticos para la formación de la coalición electoral y la formación del gobierno, aunado a los discursos y decisiones iniciales, la integración del gabinete y las prácticas parlamentarias, anticipan un gobierno ambiguo y contradictorio que eventualmente promoverá cambios en el entramado institucional pero sin alterar el orden social establecido. Analizar los componentes ideológicos y políticos del movimiento lopezobradorista y sus repercusiones en el proyecto de desarrollo nacional es el cometido de este texto.

Preámbulo

Ubicada en el imaginario del nacionalismo revolucionario, la llamada «cuarta transformación» describe una secuencia básica de la historia patria que va de la Independencia (1810-1821), la Reforma (1857-1861) y la Revolución (1910-1917) para dar paso a una siguiente etapa idealizada, que se atreve a autonombrarse sin haber comenzado ni definido con precisión su contenido, que pretende superar al neoliberalismo (1982-2018), la última gran transformación del capitalismo mexicano, pero desde una vía reformista dentro del capitalismo subdesarrollado, y en modo alguno vislumbra un horizonte poscapitalista (palabras como socialismo o comunismo no entran en el vocabulario del «cambio»¹).

*Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

¹ Entre los referentes inmediatos, a los cuales sin embargo no se alude, se encuentran los proyectos posneoliberales latinoamericanos: el llamado giro progresista, populista y neodesarrollista;

Con certeza, antes que en una «cuarta transformación», estamos en un interregno, un momento de transición, que aún no define con claridad su derrotero. Hay signos de todo tipo, contradictorios los más, que anticipan múltiples líneas de continuidad dentro del modelo económico-político, antes que verdaderos intentos de cambio. No obstante, también está latente la conformación de una fuerza social que empuje hacia cambios progresivos, aunque lentos y reformistas. La agenda de una gran transformación está apenas por esbozarse, y no necesariamente estará escrita por el gobierno. La pregunta crucial es ¿cuál es el sentido de la transformación que alentará el nuevo gobierno?, ¿se inscribe dentro del capitalismo o abre opciones fuera de ese ámbito?, ¿se pugnará por un cambio

además con el atenuante de que no se adopta ningún pronunciamiento antiimperialista, al contrario, se asume comedidamente la subordinación histórica a la égida estadounidense.

profundo en el régimen político y en el modelo económico, es decir, en el patrón de acumulación?

Para un gobierno emergente, implementar un proyecto de transformación significa un gran reto, porque, sin contar sus debilidades propias, enfrente tiene el contrapeso del poder de la oligarquía y sus adversarios, y a su lado el de sus aliados entre quienes se cuentan a sectores que forman parte del *establishment* y no están dispuestos a promover cambios genuinos, y otros más que han sido opositores permanentes pero son condescendientes y están prestos a pactar con los adversarios para mantener una supuesta estabilidad del sistema en su conjunto, por lo cual se ejecutarían políticas y acciones que no apuntan necesariamente a un cambio verdadero sino a un *gatopardismo* («Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie»).^2

Bosquejo del lopezobradorismo

Habemus presidente legítimo

La candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo un éxito arrollador en el proceso electoral federal al sumar más de 30 millones de votos que le confieren

²Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *El gatopardo*, Barcelona, Vergara, 1980.

una gran legitimidad. El triunfo de la coalición *lopezobradorista* responde a diversos factores: a) la crisis del proyecto neoliberal, la deslegitimación del sistema político y el conflicto interburgués, que ocasionaron una fractura del bloque dominante y la incapacidad de consolidar una candidatura ganadora y, al propio tiempo, la desarticulación de la izquierda más genuina y radical para postular una candidatura; b) la formación de una fuerza electoral pragmática de izquierda-centro-derecha apuntalada por un discurso elusivo que no permite detectar los intereses que entraña el proyecto y lo suficientemente ambiguo y contradictorio para captar votantes de todas las clases y sectores; c) la acumulación de indignaciones y agravios entre las clases populares que se volcó en contra de los partidos que han gobernado en los dos últimos sexenios y en consecuencia respaldaron la candidatura lopezobradorista; y d) la conformación de una subjetividad reformista y conciliadora que troqueló un sentido común para capitalizar el malestar social y, al mismo tiempo, ofrece amnistía a empresarios, políticos y delincuentes.

A la vieja usanza

AMLO es un político emanado de la vieja escuela priista y fogueado por la izquierda electoral; más que un izquierdista consumado es un nacionalista a la usanza del priismo tardío que mezcla el liberalismo, el populismo, la socialdemocracia y el reformismo. En el rejuego del simbolismo palaciego se aviene como un caudillo posrevolucionario que quiere estar a la altura de sus ídolos liberales, sobre todo Benito Juárez, forjador de la república burguesa mexicana. Si algo

Para conectar eficazmente con la masa electoral en la plaza pública, el discurso populista se propala sin importar su carácter machón. El broche de oro de esa fraseología se sintetiza en el acto de unción del Zócalo capitalino: «Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes, soy del pueblo de México».

distingue al candidato triunfante es su voluntad de poder, su determinación de ascender a la cúspide del poder político estatal sin importar principios y pactos, ante la sublime pretensión de figurar en la historia. En lugar de sentar las bases de una transformación social sustantiva, hacia otra organización social y económica, su proyecto de nación se conforma con afinar la maquinaria estatal, depurarla de la corrupción e instaurar la austeridad, para con ello, supuestamente, reanimar el desarrollo capitalista nacional.³

El oráculo mayor es el pragmatismo político y las «señales del mercado». Así lo entiende quien se destaca como un operador calculador, voluntarioso y acomodaticio, pero no por ello un estadista o visionario. Para conciliar el carrusel político de izquierda-centro-derecha, recurre al juego del equilibrista, donde es posible gobernar «para ricos y para pobres», aunque, cada vez con más desparpajo, inclina la balanza hacia los grandes empresarios e inversionistas extranjeros, pero si la ocasión lo amerita, aunque con menor frecuencia y menos convicción que en el pasado reciente, suelta la arenga: «Por el bien de todos, primero los pobres».⁴

La vena populista es muy persuasiva y se basa en los atributos de un solo hombre, no en la construcción de poder popular orgánico. Según los adeptos, él es el más capacitado, acaso el único, para gobernar, pues le atribuyen el don de la terquedad, la osadía de haber recorrido el país dos o más veces y en ese periplo haber convivido con el común de la gente, además de haberse postulado a la presidencia en tres ocasiones ostentando una personalidad inmaculada de honestidad, dotado de la valentía para enfrentar a los poderes fácticos y soportar sendos fraudes electorales en 2006 y 2012, sin olvidar que es autor de libros sobre historia nacional, política y planes de gobierno. En la era del internet y las telecomunicaciones, la itinerancia del candidato perpetuo lo habría dotado de un bagaje que difícilmente otro ilustre mexicano exhibiría para gobernar. En el extremo, algunos seguidores fieles le atribuyen facultades divinas, no en balde su personalidad ha sido largamente troquelada como la de un mesías y un iluminado.⁵

Para conectar eficazmente con la masa electoral en la plaza pública, el discurso populista se propala sin importar su carácter machón. El broche de oro de esa fraseología se sintetiza en el acto de unción en el Zócalo capitalino: «Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes,

soy del pueblo de México».⁶ No obstante, pese a pronunciar innumerables discursos en mítines, foros y medios de comunicación, es notable que AMLO ha perdido capacidad oratoria y debilitado sus facultades como debatiente, pues más que un ideólogo, un estratega o estadista, se ha tornado en un orador mediano que recurre a un discurso aletargado y una retórica contrahecha y extremadamente repetitiva. Como buen político profesional, el discurso obradorista es demagógico, en el sentido de que a la menor provocación profiere promesas que al instante son populares, que se repiten incesantemente para mayor efectismo en los más diversos foros, aunque de antemano se sabe que los ofrecimientos no habrán de cumplirse o se simulará hacerlo, pues las verdaderas intenciones no se enuncian, como si se tratara de cosas que el pueblo no necesariamente tiene que saber. De manera contrafactual, es improbable que, siendo realistas, si se hubiera dicho, por ejemplo, que se reemplazaría a la policía federal con una policía militarizada, que se tejería una alianza estratégica con los grandes empresarios y que se perdonaría a los políticos corruptos,⁷ hubiera obtenido la avalancha de votos que le permitieron ganar de manera inobjetable. Es cuestión de emitir determinadas palabras según el cálculo político en el momento oportuno, según el perfil del auditorio.

Ideocracia

La ideología obradorista abreva de varias fuentes: populismo, nacionalismo burgués, democracia liberal y moralismo cristiano, todo dentro de los márgenes del capitalismo, y en buena medida dentro del «neoliberalismo con rostro humano» o liberalismo social. Pero es la crisis del régimen político (crisis del Estado mexicano, fractura en la élite, resquebrajamiento del esquema

³ El combate a la corrupción ha sido una bandera de la derecha para dismantelar al Estado y la austeridad que pregona es un dispositivo neoliberal.

⁴ Andrés Manuel López Obrador, *Un proyecto alternativo de nación*, México, Grijalbo, 2004.

⁵ Rodrigo Vera, «López Obrador, el candidato de Dios», *Proceso*, 14 de junio de 2018, en <https://www.proceso.com.mx/538377/lopez-obrador-el-candidato-de-dios>; Redacción, «Muñoz Ledo califica a AMLO como «un iluminado» y un «hijo laico de Dios»; pide a los mexicanos cuidarlo», *Sin Embargo*, 2 de diciembre de 2018, en <https://www.sinembargo.mx/02-12-2018/3505781>

⁶ Andrés Manuel López Obrador, «Andrés Manuel López Obrador Zócalo CDMX», 1 de diciembre de 2018, en <https://www.youtube.com/watch?v=EqY0knVsglo>

⁷ Por ejemplo, ante los dueños de Televisa, dijo que esa es una empresa «extraordinaria» y un «orgullo para el país» (Andrés Manuel López Obrador, «Televisa es extraordinaria y un orgullo para el país: AMLO», 29 de octubre de 2018, en <https://www.youtube.com/watch?v=8jxgs1MjiLo>).

de representación partidario, hartazgo social) lo que posibilita el ascenso del proyecto nacionalista, que ideológicamente se impregna de populismo, mediante un discurso que divide a la sociedad en dos grandes bloques homogéneos y antagónicos: por una parte, el pueblo bueno y sabio, sin divisiones de clases ni conflictos internos, donde caben ricos y pobres, al cual se dice representar, y, por otra parte, una élite corrupta y rapaz, de la cual hay que defenderse y destruir, pues está forma una «mafia del poder»,⁸ un sector empresarial y político que se ha enriquecido a costillas del patrimonio público. De ello se desprende que el principal problema nacional es la corrupción; no el capitalismo, al cual si acaso hay que humanizar, hacerlo viable. Entonces, la principal política consiste en combatir la corrupción, reconstruir las instituciones y canalizar los recursos que se liberen de ese flagelo, los cuales supuestamente serán suficientes para detonar el desarrollo, sin necesidad de hacer una reforma hacendaria progresiva, expropiar terratenientes o monopolios que depredan la naturaleza y sobreexplotan el trabajo ni tampoco gravar las altas ganancias, revalorizar la fuerza de trabajo, reconstruir la economía pública y social, etcétera.

En su oda al buen burgués nacionalista, AMLO advierte que, en México, como si fuésemos una excepción dentro del capitalismo mundial, no opera la explotación, aquí los empresarios son gente buena, cuando mucho cometen el pecado de la corrupción.⁹ En México, el régimen político ha propiciado que el trabajo se regale desmedidamente, una situación rayana en la superexplotación. En el polo opuesto, los magnates empresarios han

acumulado fortunas inconmensurables, no obstante, AMLO dice que en el país no hay explotación, que esa teoría no opera. El imperativo categórico de los burgueses, las utilidades, a costa de lo que sea, es *peccata minuta*.¹⁰ No sorprende, entonces que el consejo asesor del presidente en materia económica estará integrado por los plutócratas que antes eran «mafiosos».

Simbología laico-cristiana

En el discurso político nacionalista y laico del obradorismo se ventilan ráfagas de proselitismo religioso que proyectan su lado derechista, conservador, moralista y proempresarial. Sin tapujos, AMLO se declara cristiano-evangélico, inclusive algunos de sus nuevos funcionarios se dicen «marxistas guadalupanos». La coalición política lopezobradorista incluyó a sectores de la ultraderecha evangélica (PES) y del panismo, incluyendo al Yunque. El propio acrónimo de Morena, como lo ha admitido AMLO, tiene una alusión a la pigmentocracia del pueblo mestizo y a la virgen de Guadalupe, la «morenita», imagen que se refuerza con su lema de «la esperanza de México».¹¹

El manejo estratégico y confuso de símbolos religiosos y políticos genera amplificados réditos electorales, pero es muestra de que la mezcla de las morales liberal y cristiana no es más que expresión de la moral de la sociedad burguesa que campea. Una moralidad criptocristiana que ha sido larvada por el lopezobradorismo con ideas como la «república amorosa», la «constitución moral», la «cartilla moral» o «código del bien» y el mandato de «no robar, no mentir y no traicionar». Cada vez más, el sello distintivo de la retórica de AMLO es confundir o mezclar preceptos republicanos con sentencias religiosas.¹² Ni siquiera los cristeros panistas, que ocuparon la presidencia, se atrevían a hacer esos desplantes.

En esa lógica, el gobierno se apresta a difundir masivamente *La cartilla moral*, no así la *Constitución política*. Inusitadamente, el

⁸ Andrés Manuel López Obrador, *La mafia que se adueñó de México... y el 2012*, México, Grijalbo, 2010.

⁹ Asevera: «La corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica (...) Los académicos más clásicos se quedaron con la idea de que la desigualdad se produce por la explotación que se hace de los trabajadores, que el burgués explota al proletariado, que se va acumulando ganancias y que éstas se las apropia el dueño de los medios de producción y que por eso es la desigualdad y la pobreza. Pero en México no aplica esa teoría del todo. Aquí las grandes fortunas se han acumulado mediante la corrupción al amparo del poder público» (Andrés Manuel López Obrador, «AMLO en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México», 20 de junio de 2018, en <https://www.youtube.com/watch?v=04zqGpsr-is>).

¹⁰ En términos del valor, en sólo nueve minutos el obrero que percibe un salario mínimo en ocho horas de trabajo genera el valor equivalente a su sueldo, el resto del tiempo de trabajo (7 horas 51 minutos) significa trabajo gratuito para el empleador, en esa medida tiene que trabajar alrededor de 20 horas para poder comprar una canasta básica de alimentos, según se estimaba para 2012 (Juan Carlos Miranda, «Un trabajador con salario mínimo genera el valor de su sueldo en sólo 9 minutos», *La Jornada*, 7 de mayo de 2012, en <https://www.jornada.com.mx/2012/05/07/economia/023nieco>). Esta situación se ha venido agravando con la espiral inflacionaria y la política de contención salarial.

¹¹ Quien fungirá como jefe de gabinete, una suerte de vicepresidente, Alfonso Romo, también cuenta con un origen ultraconservador. Además de su membresía en la alta burguesía mexicana, ha pertenecido a grupos ultraconservadores, como el Opus Dei y Legionarios de Cristo, además de haber tenido vínculos con Pinochet y Salinas. El propio AMLO lo señaló como parte de la «mafia del poder» (Andrés Manuel López Obrador, *La mafia que se adueñó de México...*).

¹² Un botón de muestra: «No pagar a los maestros es anticonstitucional y antibíblico: «No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente» (Levítico)» (Andrés Manuel López Obrador, 31 de julio de 2016, en https://twitter.com/lopezobrador_/status/759966256896233476?lang=es). «Nosotros somos respetuosos y veneramos a la Virgen de Guadalupe y a Benito Juárez».

Estado pretende aleccionar a la ciudadanía sobre moral desde nociones como alma y espíritu, como si el orden metafísico, más allá de la realidad material, explicara los problemas sociales. La «Constitución moral» se basa en la *Cartilla moral* de Alfonso Reyes,¹³ un texto originalmente redactado en la década de 1940 por el gobierno de Manuel Ávila Camacho para contraponerse a la educación socialista impulsada por el cardenismo,¹⁴ pero que fue desechado y no incluido en la campaña de alfabetización, aunque pervivió en las sombras como suerte de credo laico de la comisión de ideología del priismo, para luego salir de nuevo a la luz cuando fue impreso por el priista Miguel de la Madrid como parte de su campaña de «renovación moral», precisamente como preámbulo a la implantación del modelo neoliberal, y ahora intenta ser rescatado y convertido en una suerte de manual de conducta o código de preceptos metaconstitucionales no obligatorios de una ilusoria república amorosa.¹⁵

Desde la temperancia cristiana, el diagnóstico es simplista: los grandes problemas nacionales se explican por la falta de valores y la desintegración familiar, es decir, se enarbola el reclamo recurrente del conservadurismo religioso. A fin de verter la moral cristiana al civismo, el Estado aparece dictando normas de comportamiento. Desde el púlpito laico, el discurso público asume tintes clericales y se pronuncia como una liturgia laica («El hombre se educa para el bien» o «no robar, no mentir y no traicionar») dirigida a millones de personas despojadas, explotadas, violentadas e indignadas, que pese a todo aún conservan una esperanza de cambio, encarnada en este caso por un personaje mesiánico, constructor de la tal república amorosa.¹⁶

No es una novedad que las clases dominantes y la religión exalten la moral, y que la necesidad

material de las clases populares escape a esa presunción.¹⁷ Pero en la construcción ideológica, la moral capitalista, donde prima el Dios dinero, confiere el triunfo a la burguesía que subyuga a las clases subalternas para desposeerlas, explotarlas y dominarlas a fin de acaparar, acumular y derrochar. Pero esa no puede ser la moral de las clases populares y de un proyecto de transformación social. En vez de una moral cristiana y de una moralidad burguesa se precisa de una ética política crítica para identificar los principios del cambio social, los cuales responden a las necesidades materiales de existencia, que desde una perspectiva popular emanan de una economía moral¹⁸ y de una ética crítica,¹⁹ no de un moralismo idealista burgués y clerical.

Restauración del presidencialismo

La formación del gobierno triunfante asume el perfil del cesarismo o el bonapartismo democrático a la mexicana.²⁰ El gobierno lopezobradorista surge de una profunda crisis del régimen económico-político con un fuerte e inusitado respaldo popular electoral que confiere al presidente grandes atribuciones políticas para gobernar los aparatos del Estado (salvo el judicial) y eventualmente cambiar las leyes y la propia Constitución. Las atribuciones de un hombre fuerte pueden ser ventajosas si está comprometido con la gran causa de la transformación social y para ello promueve la concientización, organización y participación de las clases populares; pero también pueden ser contraproducentes si el poder se fetichiza en la figura de un líder máximo y, peor aún, incuba tendencias autoritarias (las convicciones personales del líder como el camino a seguir), justifica sus proyectos con el apoyo plebiscitario del pueblo sabio (consultas a modo que buscan convalidar decisiones tomadas previamente), pretende pacificar el país profundizando la militarización (formación de guardia nacional o policía militarizada), reafirma los grandes intereses corporativos (consejería de los plutócratas que seguirán detentando la propiedad de los grandes medios de producción y comunicación) y simula obedecer al pueblo (pacificado con políticas asistencialistas en aras de preservar los niveles de popularidad plasmados en las encuestas).

Sobre el pretendido gobierno democrático representativo, derivado del postulado «el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», se yergue el poder personalizado de un caudillo político peculiar y carismático que supone la unidad abstracta de todos haciendo tabula rasa de conflictos, contradicciones y desigualdades. Es el liderazgo

¹³ Alfonso Reyes, *Cartilla moral. Conciencia del entorno*, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2005.

¹⁴ Alejandro Ortiz, *Laicidad y reformas educativas en México: 1917-1992*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.

¹⁵ Andrés Manuel, «Fundamentos para una república amorosa», *La Jornada*, 6 de diciembre de 2011.

¹⁶ Andrés Manuel López Obrador, *No decir adiós a la esperanza*, México, Grijalbo, 2012.

¹⁷ «El gran empresario, con su moral burguesa, vive del trabajo de la clase obrera, oprimiéndola, y utiliza la caridad para glorificarse» (Marx).

¹⁸ Edward Thompson, *Tradición, revuelta y conciencia de clase*, Barcelona, Crítica, 1984.

¹⁹ Enrique Dussel, *14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico*, México, Trotta, 2016.

²⁰ David Pantoja, «¿Cesarismo en México? Algunas notas para su esclarecimiento», *Este País*, núm. 182, 2006.



Aunque AMLO abarrotó las plazas públicas y su organización política se considera un partido-movimiento, Morena es un partido sin masas: en mayo de 2018 disponía de **319 mil 449 afiliados**, el **sexto lugar** entre ocho partidos con registro INE.

reconcentrado en un hombre poderoso, que sin embargo obstruye la formación de otros liderazgos sucesorios dentro del partido gobernante y que supedita a los otros poderes a la figura presidencial, al menos los diputados, senadores, congresos locales y gobernadores, por lo cual concentra una capacidad política que le permitiría hacer los cambios constitucionales que convengan al presidente. En la restauración del presidencialismo mexicano se otorga preponderancia al hombre fuerte, el jefe máximo, ante las instituciones políticas, aun cuando poder no deja de estar acotado por el poder del gran dinero, y eventualmente puede ser doblegado por la oligarquía, los barones del dinero y el imperio, que ejerce su predominio continental. El contrapeso no está en los organismos autónomos y los partidos de oposición sino en el poder popular, el cual es irreconciliable con los intereses materiales de la burguesía.

Concentrar las facultades presidenciales en la personalidad carismática y las convicciones ideológicas del presidente, más que democra-

tizar el poder —en vías de configurar un poder popular— lo fetichiza, pues procura encarnarlo, al extremo de asumirse el mismo como el sujeto de la historia, por encima de la masa social a la que dice representar.

En tal sentido, no tiene un perfil semejante a los gobiernos progresistas del giro latinoamericano posneoliberal, al menos en su vertiente más radical, pero sí del reformismo de tipo neodesarrollista y populista, con la peculiaridad geopolítica de que pervive el entreguismo o sumisión a los poderes estadounidenses. Más aún, renuncia a ejercer un liderazgo en la región latinoamericana, donde los gobiernos progresistas han sido minados por el imperialismo y las oligarquías. Prefiere recluirse en una ahora anacrónica doctrina Estrada, otrora progresista, de «no intervención» y en el aserto nacionalista de que «la mejor política exterior es la política interior», cuando el mundo actual está perfectamente globalizado y los llamados intereses nacionales son horadados por intereses multinacionales, los del capital global.

Políticamente ya es inviable, resulta conservador, recluírse en los asuntos de un solo país.

El príncipe ungido

Más que un partido de la transformación social, Morena es un partido convencional, electorero, sumergido en los meandros de la democracia liberal. Un partido organizado para votar, como ha sido la mística de la izquierda electoral de corte socialdemócrata y nacionalista en México, no abocado al cambio estructural sustantivo. Con persistencia, después de padecer dos fraudes electorales recientes, logra su propósito con creces: alcanzó 53% de los votos —una mayoría que no requeriría segunda vuelta, en el caso hipotético de que se implementara esa disposición—, la mitad de los cuales provienen de su reserva histórica y la otra mitad se compone de sufragantes noveles y de ciudadanos que otorgan el voto útil dado que ya no soportan los agravios de los gobiernos derechistas neoliberales.

Morena no es el príncipe moderno en el sentido gramsciano (el partido que conforma la voluntad colectiva nacional popular), el nuevo príncipe es AMLO; ni la vanguardia revolucionaria en el sentido leninista (partido clasista del proletariado), apenas es un partido pragmático que teje alianzas con partidos de ultraderecha (PES) y centro-izquierda (PT) y que capta a personajes disímbolos de la clase política tradicional de todas las orientaciones ideológicas. Resueltamente es un partido subsumido a la lógica electoral: una maquinaria organizada para ganar elecciones y una agencia de distribución de funcionarios en las esferas del poder público y la burocracia gubernamental. AMLO ha definido a Morena como «una fuerza política y moral», pero en los hechos, de conformidad a sus alianzas, se ha decantado como una fuerza política proempresarial, nacionalista y moralista, además de retocarse con un dejo confesional y derechista, muy lejos está de ser una fuerza clasista, internacionalista, materialista, mucho menos socialista o comunista, como para impulsar una profunda transformación social.

Aunque AMLO abarrota las plazas públicas y su organización política se considera un parti-

do-movimiento, Morena es un partido sin masas que cuenta con una exigua militancia de ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales.²¹ No obstante, desde arriba se fueron registrando afiliaciones y adhesiones de personajes conspicuos de diversos partidos políticos, los llamados «chapulines», que buscan ocupar puestos públicos. De ello se deduce que los movimientos sociales o los grandes sectores de masas no respaldaban abiertamente o de manera militante el «proyecto alternativo de nación», pero tampoco existía una preocupación fidedigna del partido para articularse con la variopinta sociedad civil, especialmente con las clases subalternas, en aras de una «cuarta transformación».

Lejos está Morena de ser, por ejemplo, un partido de los trabajadores y campesinos que se proponga organizar, concientizar y movilizar a las clases subalternas en pos de un proyecto orientado por el propósito de un «cambio verdadero», en una pauta de transformación social que emule y actualice a la vertiente social de la Revolución mexicana («interrumpida», «traicionada» o «aniquilada», según sea interpretada) sino que es un partido tradicional, seducido por las elecciones, con la peculiaridad de que postula a un candidato de corte entre caudillista y mesiánico (quien dice basarse más en sus «convicciones personales» que en un programa político claramente expuesto) para impulsar un proyecto nacionalista burgués.

Por más que su registro reciente bajo el acrónimo de Morena lo aparente, no se trata de partido nuevo, es una transmutación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) —en vías de extinción—, que, a su vez, proviene de deyecciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la izquierda nacionalista (Partido Mexicano Socialista [PMS], finado), incluso sus personeros ya han ocupado puestos gubernamentales y legislativos con resultados contrastantes, sin profundizar en una agenda de transformación, más bien impulsando modestas reformas o sumándose a las contrarreformas neoliberales. Funciona como una poderosa agencia de colocación y reciclaje de diputados y senadores (la nueva aplanadora en funciones), secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales y una exuberante burocracia estatal. Existen elementos de valoración previos, como el desempeño del gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), que han detentado en cuatro administraciones sucesivas y varias gubernaturas. En ningún caso se destaca una administración de cambio político significativo, lo que refulge es una forma convencional de gestión vinculada con los poderes económicos y políticos. Aunado al hecho de que, para lavarse el rostro, quienes destacan negativamente por cometer actos

²¹ En mayo de 2018 disponía de 319 mil 449 afiliados, el sexto lugar entre ocho partidos con registro en el Instituto Nacional Electoral (INE), según el «Padrón de afiliados a partidos políticos», en <https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/>

de corrupción o cambiar de partido son acusados por el líder como «traidores», de esta forma se mantiene impoluto.

Su matriz ideológica ha sido el nacionalismo revolucionario, es decir, el nacionalismo burgués del viejo PRI. No puede asegurarse que sea un partido de izquierda —movido por el objetivo de la igualdad, la democracia, la emancipación—, puesto que está inmerso en el terreno ambiguo de alianzas oportunistas de centro-izquierda, tejidas por el consenso neoliberal de las élites o, a lo sumo, por el reformismo que quisiera conferirle un «rostro humano» al capitalismo. Carece de una ideología definida, en el sentido de sistema de ideas que le confiera claridad programática, articulación de ideas fuerza y vínculos con la praxis transformadora; entonces se adapta a las condiciones y coyunturas electorales; y en lugar de una militancia concientizada y cuadros políticamente formados, depende de la voluntad política de un solo hombre, el líder, quien toma las grandes decisiones, desde las candidaturas y discursos, hasta los proyectos y acuerdos.

Bueno y sabio

Para AMLO, el «pueblo bueno» debe ser guiado por un líder honesto, como se autodefine, y un gobierno austero, como el que encabeza.²² Por ello aspira a configurar una «república amorosa» regida por una cartilla moral y dirigida por un paternalismo austero, donde se considera que los gobernantes y grandes empresarios, la clase dirigente, deben acompañarse de las clases populares. En este esquema, la noción de pueblo resulta una idea premarxista, cuando no idílica, que prescinde del concepto de lucha de clases y de revolución, para mejor hablar de amor y regeneración. El pueblo sería, entonces, una unidad armónica, incluso una comunidad religiosa, cristiana, que más que una utopía poscapitalista puede ser considerada como una utopía conservadora.²³

²² Andrés Manuel López Obrador, 2018. *La salida. Decadencia y renacimiento de México*, México, Planeta, 2017.

²³ Jules Michelet, *El pueblo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

Sin embargo, el pueblo contiene múltiples contradicciones de clase, género, etnia y subjetividad. Pero en la trama electoral, el partido ha cumplido eficazmente la labor de organizar a los desorganizados para votar, quienes luego serán desmovilizados para poder gobernar sin restricciones. Ejemplo de ello es el uso de discursos demagógicos a la usanza del nacionalismo-revolucionario priista de viejo cuño y la liturgia laica que apelan al «pueblo bueno y sabio» que habrá de avalar mediante «consultas» los megaproyectos, muchos de los cuales obran en contra del interés popular; o la reiteración de la frase «por el bien de todos, primero los pobres», cuando llevan mano las cúpulas empresariales en los grandes proyectos y programas de expansión de espacios de inversión privada.

Hay un énfasis en la unidad nacional a partir del papel del Estado, la subordinación del partido como un apéndice, el pueblo como una base social pasiva y el empresariado como el agente de desarrollo. Pero la unidad en abstracto alrededor de un proyecto de nación es inviable ante la realidad de una sociedad contradictoria, desigual, dividida.

Un peligro societal se cierne en el país dado los brotes de (neo) fascismo entre sectores sociales que están siempre al amparo del poder para agredir a sectores subalternos convertidos en antagonistas. El fascismo es un sistema totalitario que alienta el nacionalismo, la xenofobia y el racismo. En su fase económica, suele ser corporativo, poniendo al servicio de la burguesía nacional la industria y la economía en general.

Con todo, es menester construir un sujeto de la transformación social frente a una sociedad civil aburguesada: partidos (conservadores, derechizados, oportunistas, pragmáticos), movimientos (posmodernos, identitarios, esporádicos, fragmentarios, monotématicos) y sindicatos (organismos corporativos de control obrero) desde esferas autónomas e independientes, no corporativizadas o usadas como soportes electorales de gobiernos de turno. El desafío mayor es organizar y concientizar a las clases populares, a los trabajadores y los sectores adyacentes. No sólo para actuar de manera independiente frente al gobierno lopezobradorista sino para replantear un proyecto político de genuina transformación social, una tarea que todavía no se han planteado las organizaciones, movimientos y partidos políticos.

¿Quién es el sujeto de la transformación?

Ante la tentativa de configurar un nuevo bloque de poder, se ha apostado por tejer alianzas políticas a nivel de las élites con líderes empresariales, políticos y sindicales, además de medios de comunicación, sin importar intereses e ideologías dispares. Es decir, desde sus orígenes, la pretendida «cuarta transformación» se ha orquestado como un proyecto de cambio sin sujeto. El sujeto de la transformación no es el pueblo sino acaso un sujeto amalgamado

desde arriba, inoculado en el gobierno, y dentro de esta esfera de poder, el presidente en turno, con ese peculiar «estilo personal de gobernar», está interesado en reeditar el presidencialismo de la vieja escuela nacionalista para rearticular a la burguesía nacional y a la masa informe del pueblo con objeto de troquelar el movimiento sociopolítico que puede ser designado como *lopezobradorismo*, pero entonces surge la paradoja de que se presenta un sujeto embrionario sin proyecto de transformación.

La inexistente burguesía nacionalista

En el discurso neoliberal, al cual se pliega AMLO, el empresario mexicano se presenta como el principal agente del desarrollo porque, se argumenta, genera empleos, riqueza y crecimiento, por tanto, hay que facilitarle las mejores condiciones de inversión y garantizar su rentabilidad. Sin embargo, los magnates han sido prohijados por el Estado, viven a expensas de los favores gubernamentales expresados en contratos, adjudicaciones, concesiones, exenciones y... corrupción. La burguesía nacional no tiene sentido nacionalista, como supone la ideología morenista, sino meros intereses capitalistas. En todo caso, es una *lumpenburguesía*.²⁴ No existe esa idealizada burguesía nacionalista; existen burgueses mexicanos dependientes del Estado y supeditados a las burguesías multinacionales que comandan los mercados mundializados y detentan la propiedad de los grandes medios de producción e información globales. Resulta inviable un desarrollo «nacional» basado en la agencia de la burguesía «nacionalista» y la restauración del mercado interno por ese empresariado para convertirlo en el motor del crecimiento.

En el sentido capitalista, no son empresarios innovadores sino agentes rentistas: pagan *royalties* (regalías) y capturan sobreganancias monopólicas. Contrariamente a su ideología neoliberal antiestatal, en la práctica son estatistas: no pagan impuestos, pero se desarrollan bajo la tutela del Estado (concesiones, rescates, exenciones). Sus inversiones orientadas por la especulación y la codicia son apalancadas con créditos otorgados o respaldados por agencias estatales y son además garantizados por las propias concesiones estatales. No reconocen que el trabajo es la fuente generadora de valor,²⁵ cosa que se atribuyen, y desvalorizan el mundo del trabajo imponiendo un régimen laboral basado en empleos mal pagados,

²⁴ Es decir, «en las cumbres de la sociedad burguesa se propagó el desenfreno por la satisfacción de los apetitos malsanos y desordenados, que a cada paso chocaban con las mismas leyes de la burguesía (...), desenfreno por el que el placer se convierte en crápula y en que confluye el dinero, el lodo y la sangre» (Carlos Marx, «Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850», en Carlos Marx-Federico Engels, *Obras escogidas*, tomo I, pp. 128-129, Moscú, Progreso, 1966).

²⁵ En términos del valor, no crean empleos sino que el producto del trabajo social, la plusvalía, genera el fondo dinerario con el cual se podrán hacer los adelantos subsiguientes para la contratación de fuerza laboral, donde sea requerida.

promovido por el Estado con legislaciones anti-laborales y el control político de los sindicatos. En términos del desarrollo, no existe el mítico «efecto derrame»: según la teoría convencional la inversión y ganancias empresariales gotean sus beneficios al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la oligarquía mexicana es un craso ejemplo de la lumpenburguesía, es decir, forma el último eslabón de cadenas globales de valorización y están subordinadas política e ideológicamente a los centros del capitalismo mundial.

A diferencia de un pueblo desclasado, de movimientos multclasistas y coaliciones políticas contranatura, la burguesía, pese a ser numéricamente inferior, sí tiene conciencia de clase y está muy bien organizada, además de que dispone de los medios de producción y comunicación, y ejerce su poder para doblegar a los gobiernos de turno para que administren sus intereses de clase.

Gobierno bicéfalo.

¿Un gobierno nuevo o hereditario?

Desde una perspectiva maquiavélica, AMLO parecería seguir un gobierno de tipo hereditario,²⁶ en el sentido de que considera aplicar políticas de continuidad (neoliberales) y no alterar el orden establecido (capitalismo), en lugar de cambios radicales, como corresponde a un gobierno nuevo, donde tendría que afectar intereses (los de la «mafia del poder»),²⁷ pero en vez de ello se alía con la oligarquía y atiende disciplinadamente las «señales del mercado». Los trabajadores, sindicatos y movimientos sociales, pasan a segundo plano, acaso como entidades pasivas de apoyo guarecidas bajo el término genérico del «pueblo bueno y sabio».

Figurativamente, es un gobierno bicéfalo, que recuerda a Jano, de la mitología romana, con un rostro mirando al pasado (el idílico priismo

²⁶ «Es más fácil conservar un Estado hereditario, acostumbrado a una dinastía, que uno nuevo, ya que basta con no alterar el orden establecido por los príncipes anteriores, y contemporizar después con los cambios que puedan producirse» (Nicolás Maquiavelo, *El príncipe*, Elaleph.com, 1999, p. 7).

²⁷ Andrés Manuel López Obrador, *La mafia nos robó la presidencia*, México, Grijalbo, 2007.

estatalista y nacionalista del «desarrollo estabilizador» o «milagro mexicano» [1954-1970] con crecimiento promedio de 6.8%, crecimiento industrial de 8% e inflación de 2.5%) y otro mirando el futuro (la presunta «cuarta transformación» de la república que no termina de negar su esencia neoliberal capitalista). Pero también es un gobierno de doble cara: con un rostro mirando a la derecha (empresarial) y la otra a la izquierda (asistencialismo).

No obstante el caudal de votos y la legitimidad de su gobierno, AMLO no detenta realmente el poder, pues éste radica en el gran capital, la banca y las corporaciones, la gran burguesía que concentra el dinero y acapara la riqueza procreada, evidentemente, por el trabajador, no por los empresarios ni por el gobierno. Sin duda, el poder lo tiene la burguesía no el presidente en turno.²⁸

Bajo el mantra de la austeridad, una premisa central del neoliberalismo,²⁹ el Estado se desmantela y se desvaloriza la función pública, para ceder, una vez más, la iniciativa al sector privado, esto es, el gran capital.

²⁸ AMLO argumenta: «Se va a separar el poder económico del poder político. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz, el gobierno va a representar a todo el pueblo, a ricos y a pobres, va a ser un gobierno democrático, el poder lo va a tener el pueblo, ninguna minoría va a seguir dominando, el único que va a dominar en México va a ser el pueblo de México».

²⁹ David Stuckler y Sanjay Basu, *El costo humano de las políticas de recorte. Por qué la austeridad mata*, México, Taurus, 2013.

La nueva aplanadora acotada

La tentativa de transformación pasa por desencadenar el poder popular, un poder a la vez destituyente (desmontaje del viejo régimen) y constituyente (construcción de una nueva institucionalidad). Sin embargo, dentro del esquema republicano pasa por el parlamento, que es copado por los partidos políticos y sus esquemas de mayorías, cuya toma de decisiones se articula por negociaciones entre los líderes políticos y los grupos de interés empresarial, militar y clerical, además de la injerencia de los centros de pensamiento (*think tanks*) y las determinaciones de organismos internacionales. Además, el parlamento se supedita al Ejecutivo dada la pervivencia del presidencialismo mexicano que concentra las facultades de jefe de Estado y jefe de gobierno en una sola persona.

La mayoría morenista toma la estafeta de la mayoría priista y se apresta a implementar la práctica parlamentaria de la «aplanadora» a efecto de imponer las determinaciones del grupo político dominante independientemente de los debates y fundamentaciones, puesto que en el ejercicio del poder, sobre la razón, gana la fuerza.

Figurativamente, el nuevo gobierno es bicéfalo, con un rostro mirando al pasado (el idílico priismo estatalista y nacionalista del «desarrollo estabilizador» o «milagro mexicano» —1954-1970—) y otro mirando al futuro (la presunta «cuarta transformación» de la república que no termina de negar su esencia neoliberal capitalista). Aunque también es un gobierno de doble cara: con un rostro mirando a la derecha (empresarial) y la otra a la izquierda (asistencialismo).





Recambio en la intelectualidad y la vocería

Como corresponde a un gobierno de la alternancia, en el terreno del debate de las ideas se apresta a hacer acto de presencia un nuevo núcleo de voceros ilustrados y comentaristas en medios impresos, audiovisuales y digitales, que competirá o reemplazará a los comentaristas del anterior régimen.

A la caterva de opinantes, periodistas e intelectuales del periodo neoliberal priista y panista, cercanos a los grandes concesionarios de los medios de comunicación, empecinados en modelar la versión oficial de los hechos y mantener a buen resguardo los intereses del poder económico y político, le sucederán los opinantes lopezobradoristas y eventualmente los reemplazarán —o competirán entre sí— en los puestos centrales del megáfono mediático, que incluye la caja de resonancia de las redes digitales (*twitter, facebook*).

Aquí el desafío estriba en que las nuevas voces sepan ir más allá de la defensa a ultranza del nuevo gobierno y esgriman el ejercicio crítico, al servicio de las causas populares, que no siempre son las del gobierno en turno. Más aún, la creación de

nuevos medios de comunicación, públicos y comunitarios, en contraposición al núcleo duro del capital privado que detenta los grandes medios de comunicación, y que eventualmente serán la cabeza de playa de la restauración neoliberal de derechas, como ha sucedido en América Latina, para cerrar el incierto ciclo progresista.

El desperdigado movimiento popular

El único cauce de participación ciudadana —ni siquiera de poder popular— que imagina el lopezobradorismo es el que le confiere la democracia liberal: el voto. A lo cual se agrega eventualmente la consulta popular sobre proyectos ya decididos con antelación entre las élites, para simplemente convalidar, o, peor a un, simular la consulta en mítines con votación a mano alzada para «aprobar» lo que el líder plantea. El voto siendo masivo y legitimador, además de conferir a su líder el mayor cúmulo de sufragios en la historia, no deja de ser un fenómeno espontaneista, pues procede de una masa desorganizada, fragmentada y, a la postre, inmovilizada.

El voto, siendo masivo y legitimador, además de conferir a su líder el mayor caudal de votos en la historia, no deja de ser un fenómeno espontaneista, pues procede de una masa desorganizada, fragmentada, y a la postre inmovilizada. A lo cual se agrega la consulta popular sobre proyectos ya decididos, para simplemente convalidar lo que el líder plantea.

Frente a la organización de la burguesía nacional y su injerencia en el nuevo gobierno, se echa de menos el activismo popular, a no ser que salga a defender temas inmediatos, sectoriales y temporales, como el salario, el empleo, el acceso al presupuesto y programas públicos y las propias elecciones. La multiplicidad de expresiones de organización social y movimientos han generado una energía social en la antesala del triunfo electoral del lopezobradorismo, pero se corre el riesgo de la desmovilización y, en algunos casos, de la cooptación. El desafío es que no existe un agente colectivo del sector popular, una fuerza social que respalde críticamente, pero también que haga contrapeso al nuevo gobierno, que se atribuye la representación del pueblo y en su nombre dice gobernar.

(Neo)desarrollismo

Por los acuerdos, declaraciones y primeras intenciones, el proyecto de gobierno tiene tintes de neodesarrollismo,³⁰ es decir, el proyecto de nación se articula por el neoliberalismo + el desarrollismo + el asistencialismo (liberalismo social). Más precisamente, consiste en un proyecto de clase que responde al interés de la burguesía multinacional y nacional, un modelo de gestión estatal que tiene más líneas de continuidad con el neoliberalismo que puntos de ruptura, más una formulación tecnocrática siempre atenta a «las señales del mercado» (la rentabilidad del capital) que una emanación del pensamiento crítico, una mirada endogenista que atribuye el subdesarrollo a causas internas (corrupción, violencia) y magnifica la voluntad nacional sin hacer una análisis del marco objetivo del capitalismo contemporáneo.

En añoranza al desarrollo estabilizador (1954-1970), parten de reconocer parcialmente una crisis de la economía, identificada simplemente como falta de crecimiento económico, sin hacer una crítica al patrón de acumulación capitalista, para buscar políticas que impulsen la inversión, el crecimiento y el empleo, como corresponde al dis-

curso desarrollista.³¹ La respuesta está en un programa de expansión del capital mediante la prolongación del TLCAN (renombrado como USMCA/T-MEC según las exigencias de Donald Trump) y diversos programas que amplifican los megaproyectos, la demarcación de zonas francas o zonas económicas especiales, el tendido de «cortinas de desarrollo» como contendores de la migración forzada, en un marco de negociaciones cupulares con el sector empresarial que ofrece la garantía de la inversión preferente para grandes empresarios y becas para subsidiar la nómina de las empresas, además de que se preservan las reformas neoliberales y se niega la posibilidad de modificar el marco constitucional en los primeros tres años de gobierno. Como ha hecho el neoliberalismo con su «nueva política social», se promueven programas de «inclusión social», de corte asistencialista y clientelar, lo cual será el puntal del populismo lopezobradorista, pero sin hacer verdaderos cambios estructurales favorables a las clases trabajadoras y campesinas.

Dejando atrás la idea de un «proyecto alternativo de nación» filoizquierdista, el equipo de AMLO presentó el *Pejenomics*,³² el ideario neodesarrollista que traza el sendero empresarial filoderechista para congraciarse con «los mercados» donde primero es la macroeconomía y el recetario capitalista. Prendado del nacionalismo burgués, el Estado mexicano establece una alianza con la oligarquía nacional y multinacional para organizar y expandir los mercados, garantizar la propiedad privada y la rentabilidad de los planes de negocios. Establece como primacía el interés de los mercados y sus capitales, emparentándolos con el interés de la nación. La vena proempresarial salta a la vista: «La intención del abanderado presidencial es hacer funcionar un gobierno de la mano con los empresarios».³³ La proclama de «separar el poder político del poder económico» es una declaración efectista, mediática, que no se implementa en la práctica.³⁴ En todo caso, el pronunciamiento es claridoso: «Los empresarios piden responsabilidad financiera y se les va a cumplir más de lo que creen».³⁵

³¹ Jesús Ramírez (coord.), *Nuevo proyecto de nación. Por el renacimiento de México*, México, Grijalbo, 2011; Andrés Manuel López Obrador, 2018. *La salida. Decadencia y renacimiento de México*, México, Planeta, 2017.

³² Abre más los ojos, *Pejenomics: hacia una economía para todos*, s.f., en <https://drive.google.com/file/d/1GQgu7iT-fGn-HTFNJY9WyAXgeBuAu0jo/view>

³³ Tatiana Clouthier, «Sembrar la paz», en <https://twitter.com/sembrarlapaz/status/994235211746492423>

³⁴ El jefe de la oficina de la Presidencia estará en manos del multimillonario Alfonso Romo. El Consejo Asesor Empresarial de magnates (Ricardo Salinas, TVAzteca; Carlos Hank, Banorte; Olegario Vázquez, Grupo Ángeles; Bernardo Gómez, Televisa; Daniel Chávez, Grupo Vidanta; Miguel Rincón, Bio-papel; Sergio Gutiérrez, DeAcero y Miguel Alemán, Interjet) inversión público-privada, preponderancia al sector empresarial.

³⁵ Arturo Solís, «México tendrá que ser un paraíso de inversión: Romo», *Forbes México*, 1 de julio de 2018, en <https://www.forbes.com.mx/mexico-tendra-que-ser-un-paraíso-de-inversion-alfonso-romo/>

³⁰ Francisco Suárez, *Crecer o no crecer. Del estancamiento estabilizador al nuevo desarrollo*, México, Taurus, 2013.

Aires de gatopardismo

¿Cuál es el sentido de la «cuarta transformación» cuando el «cambio verdadero» en realidad no significa un proyecto antagónico a la clase dominante? En la plataforma de lanzamiento se establece una supuesta contradicción básica (la corrupción como fuente de todos los males) pero sin antagonismo (la «mafia del poder» forma parte del proyecto), y la ilusoria reconciliación se proyecta a partir de valores morales, postulados nacionalistas y premisas económicas neoliberales («estamos a favor del libre mercado»).

Ubicar la corrupción en el gobierno y el Estado como el problema central entra en sintonía con un discurso que ya había sido elaborado por la derecha panista, los organismos internacionales y las organizaciones civiles empresariales. Se aleja de los estudios críticos sobre la explotación y las contradicciones del capitalismo, que en realidad nunca han formado parte del repertorio lopezobradorista. En esa línea, plantea que el gobierno del Estado sea el factor de conciliación de intereses entre ricos y pobres.

El discurso de lucha contra la «mafia del poder»³⁶ contrasta con la adopción de personeros «mafiosos» en los puestos clave de toma de decisiones. A diferencia de las dos contiendas anteriores, cuando AMLO fue motejado como «un peligro para México», en 2018 la estrategia ganadora se basó en asumirse como el factor del consenso y la reconciliación, y en términos prácticos estableció pactos inconfesables con la clase política y logró dividir a la oligarquía, una parte de la cual se sumó a su proyecto (aunque los barones del dinero siempre apuestan a todas las opciones). El mensaje fue otorgar amnistía a los corruptos y «borrón y cuenta nueva», cuando lo que se quiso decir es que no se afectarían intereses y se continuaría con el modelo económico-político. Además de abrir espacios en candidaturas y ga-

³⁶ Cristóbal Martínez, «AMLO expresa su apoyo al libre mercado», *Expansión*, 4 de diciembre de 2018, en <https://expansion.mx/economia/2018/12/04/amlo-expresa-su-apoyo-al-libre-mercado>

³⁷ Andrés Manuel López Obrador, *La mafia que se adueñó de México...*



binete a personeros de las más disímolas ideologías e intereses y ofrecer políticas asistencialistas a los menesterosos.

Colofón

Inscrito en los parámetros de la democracia liberal dentro de un país capitalista subdesarrollado, el triunfo electoral lopezobradorista no es producto de un genuino proyecto de izquierda y de una reconversión ideológica de la mayoría del pueblo sino primordialmente de un estrepitoso colapso del bloque hegemónico y la consecuente reemergencia de una amplia coalición de centro-izquierda-derecha, con una clara inclinación hacia el flanco derecho, nutrida por una pléyade de políticos tránsfugas del panismo, el priismo y perredismo, que abandonaron su barco antes del hundimiento, y de empresarios, la mayoría procedentes de la anquilosada clase política mexicana que ha venido avalando las reformas neoliberales sexenio tras sexenio, muchos de los cuales fueron señalados como partícipes de la «mafia del poder».

Las críticas al obradorismo y su «cuarta transformación», un proyecto de regeneración capitalista, provendrán desde las antípodas políticas: la derecha (procapitalista) y la izquierda (anticapitalista) y sus puntos intermedios, pero por distintas razones, no porque «los extremos se juntan». El juego del equilibrista («gobernar para todos, ricos y pobres») no es sustentable, estará expuesto al



Prendado del nacionalismo burgués, el Estado mexicano establece una alianza con la oligarquía nacional y multinacional para organizar y expandir los mercados, garantizar la propiedad privada y la rentabilidad de los planes de negocios. Fotografía: *Cuartoscuro*

desgaste y a la decantación de determinados intereses, puesto que las desigualdades y contradicciones sociales no se diluyen por un liderazgo político.

Algunos antecedentes siembran dudas fundadas. Los antecedentes de Morena y AMLO se remiten a los 20 años del gobierno del PRD en la Ciudad de México. Esta experiencia se ha mitificado, para alejarla de la crítica y fortalecer a la izquierda electoral; sin embargo, la realidad es que esta gestión de gobierno perredista ha sido controvertida hasta llegar a un estrepitoso colapso, que fue superado con la emergencia misma de Morena. Entonces, ¿qué garantiza que el virus de la descomposición del PRD no está inoculado en Morena?

Ante la eventual construcción de un nuevo régimen de gobierno, ¿cuáles son las garantías de que lo que ha pasado con los gobiernos progresista latinoamericanos no le suceda al gobierno lopezobradorista? Más aún cuando el contexto internacional no ofrece una bonanza en los precios de las materias primas y además se afronta una gran violencia. La experiencia reciente muestra que los procesos de transición son prontamente reversibles. Por si fuera poco, el proyecto lopezobradorista contiene más líneas de continuidad con el neoliberalismo que puntos de ruptura y mucho menos intenciones de cambio verdadero. De manera timorata se niega la posibilidad de emprender un cambio de régimen político, para dejarlo en un imberbe cambio de gobierno. No se admite la necesidad de emprender una

auténtica reforma del Estado, para que deje de ser un mero aparato de administración oligárquica y un instrumento de dominación y coerción, con objeto de convertirlo en un entramado instituido e instituyente del poder popular, razón por la cual necesariamente se tendrían que afectar grandes intereses y realizar cambios más profundos en el patrón de acumulación de capital, actualmente supeditados a los capitales monopolistas, los tratados de libre comercio, la sobreexplotación del trabajo y la depredación de la naturaleza.

Pese al triunfo, el mayor riesgo que corre esta formación gubernamental es decepcionar a sus votantes y enterrar las aspiraciones de cambio estructural, lo cual puede degenerar en un mero oportunismo político que capitaliza una apremiante necesidad social de transformación para satisfacer la ambición de un sector de la clase política empecinado en ocupar los principales puestos ejecutivos y parlamentarios con objeto de ejercer su voluntad de poder, pero sin representar los intereses reales de las clases populares, a quienes dicen representar. 🐦

Trazos y retazos

en las nuevas políticas públicas culturales en México

DANIEL HERNÁNDEZ PALESTINO*



*Docente investigador, Unidad de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas

Una versión del presente texto fue leída en la V sesión del Seminario de Pensamiento Crítico: «Crítica a la cultura como política pública», realizada en el Patio de Rectoría de la UAZ, el 24 de octubre de 2018

Detrás de los discursos desarrollistas, se encuentra una sociedad sabotada por los intereses privatizadores del capital y las ideologías decadentes que han contribuido a la destrucción del tejido social, educativo y cultural del país. El soporte estructural de las políticas culturales y educativas ha sido un punto débil de las políticas públicas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está empeñado en un proyecto neodesarrollista, que tiene entre sus metas abatir los niveles de pobreza y de violencia, pero donde el proyecto cultural nuevamente da visos de la desarticulación de la educación y la cultura. En la perspectiva de integración nacional de la «cuarta transformación», como sucedió en el período posrevolucionario y en el México moderno, la cultura juega un papel funcional a la integración política de corte nacionalista, en esta ocasión para contrarrestar la violencia y pacificar el país; sin embargo, se enfrenta al hiperconsumo de una sociedad mediatizada por el capitalismo neoliberal desinteresado en promover la cultura.

Introducción

En un pasaje de *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Daniel Bell resaltaba que el modo más indicado de analizar a la sociedad moderna era comprender la compleja trama de tres ámbitos diferenciados: la estructura social (que representa el orden tecnoeconómico), el orden político y la cultura.¹ Según esta óptica, las tres esferas se mantienen unidas por el cemento social que da cuerpo al Leviatán, aunque las propiedades del capitalismo contemporáneo son frágiles. Para Bell, dicha fragilidad radica en lo que él denomina «acto gratuito», acto sin sentido: donde el sujeto trata de destruir su pasado para construir su futuro o la dinámica de una sociedad disgregadora.

Las preocupaciones sobre la desintegración de la sociedad moderna de Bell son semejantes a los motivos nihilistas propuestos por Nietzsche en *El nacimiento de la tragedia* (1872) y el escritor polaco Josep Conrad en su clásica novela *El agente secreto* (1907), que conforman tres dimensiones del nihilismo y donde se estructura un régimen tecnoeconómico con un orden político que anticipa el proceso final del racionalismo, sostenido en la determinación del sujeto por el hiperconsumo que conlleva la tecnocultura hacia la órbita de la alienación y donde la propia cultura no es la excepción a la regla, pues ésta queda al servicio de las ideologías del poder.²

La manera de enfocar las conjunciones y las disyunciones sociales de la cultura nacional mexicana probablemente se puedan sumar a dicha reflexión posmoderna; sin embargo, es pertinente una visión antropológica crítica con el fin de centrar la atención sobre un fenómeno correlacionado con las contradicciones sociales y culturales que experimenta la sociedad contemporánea en esta etapa decadente del capitalismo neoliberal.

En efecto, el panorama contemporáneo refleja un contexto estructural y político-cultural de lumperización que se vive en los diferentes sectores de la sociedad mexicana, pues en aras de favorecer

las políticas mercantiles del régimen neoliberal, las clases dominantes a menudo emplean la cultura como un vehículo a conveniencia de los intereses ideológico-partidistas. En este ciclo del eterno retorno de las crisis del capitalismo, la cultura ha sido utilizada como oropel que cumple un papel festivo, artificioso y circense en la narrativa del sistema político mexicano; no debe olvidarse que históricamente se han forjado manifestaciones culturales y talentos artísticos e intelectuales que han trascendido y brillado con luz propia.

Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se avizoraba que habría un cambio profundo en la política mexicana gubernamental y esto se hizo sentir en la primera quincena de diciembre con la presentación del Paquete Económico 2019 que incluyó la Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuestos de Egresos y los criterios a seguir por parte de la política federal en el contexto de las medidas del Plan de Austeridad. Con relación a la nueva política cultural de tintes nacionalistas, la propuesta fue presentada durante la campaña presidencial de AMLO, cuando se promocionó públicamente el manifiesto morenista: «El poder de la cultura»,³ encabezado por Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, quien representa el nuevo ideario sexenal en esa materia, sustentado en la llamada «cuarta transformación», que aparentemente vendrá acompañada de una renovación cultural.

El documento se divide en tres ejes: a) impulsar una política incluyente centrada en las culturas comunitarias y las comunidades culturales; b) incentivar las artes desde la primera infancia; c) crear un fondo especial para la reconstrucción de los monumentos afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como recuperar los espacios públicos (parques y plazas asediados por la delincuencia) mediante proyecciones cinematográficas al aire libre, música, danza, talleres artísticos y promoción de la lectura.

De inicio, la agenda de las políticas culturales para el sexenio 2018-2024 plantea un concepto de cultura definido como un derecho humano incluyente que se conforma a partir de un proyecto nacionalista integrador del Estado mexicano. En la formulación del proyecto se desprenden dos vertientes: la burocrático-administrativa y la cosmovisión político-cultural.

Del neodesarrollismo a la cosmovisión nacionalista de Estado

En el programa político de AMLO, el mercado interno constituye el eje vertebrador del aparato productivo gubernamental que rige las políticas sectoriales. Desde la visión presidencial se plantea primeramente desarmar la corrupción a partir de la puesta en marcha del Plan Anticorrupción y de Austeridad, planteado como

¹ Daniel Bell, *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Madrid, Alianza, 2004, p. 23.

² *Ibid.*

³ Alejandra Frausto, *El poder de la cultura*, en <https://drive.google.com/file/d/1NuW45vOZPFwKTTbotdT6f-C4yTgs4Hfs/view>

una política de Estado para transparentar y generar un ahorro en la administración pública. En el caso de la Secretaría de Cultura, esta decisión incidirá en la reducción de su presupuesto a 522 millones, hecho que sin lugar a dudas se reflejará en la marcha de las actividades artístico-culturales durante el presente sexenio.

Acorde con el plan de descentralización administrativa, como primera estrategia seguida por el gobierno de AMLO, la Secretaría de Cultura (tercera dependencia en tamaño institucional, después de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP] y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [Sagarpa]) se trasladó a la ciudad capital del estado de Tlaxcala en aras de «acercar la Administración a las zonas alejadas y detonar posibilidades de empleo y fortalecimiento con la comunidad».⁴

Referente a las acciones correspondientes a la cosmovisión político-cultural, la propuesta consiste en priorizar el trabajo comunitario en las regiones mediante la puesta en marcha de las misiones culturales, con el objetivo de lograr una «transformación social en un plan de nación», a través del Programa de Cultura Comunitaria y un proyecto de intervención en las zonas rurales deprimidas que se desplegarán en los 720 municipios del país. En este contexto se abre una tribuna a las comunidades indígenas y afromexicanas cuya atención queda supeditada a un nuevo organismo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que sustituye a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), y a la nueva Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social).

Huelga decir que el tema de la marginación de los grupos originarios ha sido una constante en la historia nacional que los mantiene fuera del círculo de las ciudades patrimonio y de las políticas públicas sectoriales que no lograron asimilar al desarrollo a las zonas étnicas marginadas, como fue el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, dependiente de la Secretaría de Turismo desde 2001, el cual tuvo como principal meta disminuir la marginación en 121 municipios del país, aunque luego de tres sexenios no logró su cometido.

En concreto, el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas que pretende darle cobertura a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, mediante el establecimiento de 133 regiones en 68 regiones étnicas del país, y que teóricamente respaldarán a los Centros Coordinadores, articulados con los planes Integrales de Desarrollo Regional Multianual, funcionarán en el actual sexenio como órganos de consulta en las comunidades y pueblos rural urbanos.⁵

Por otra parte, las industrias culturales artesanales del país constituyen un área de oportunidad económica en la economía

mexicana, de acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura en México de 2017, la actividad artesanal en su conjunto contribuyó con 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que equivale a 661 mil 505 millones de pesos; ello supera los ingresos de otras actividades en conjunto como diseño, servicios creativos, artes escénicas y espectáculos, libros, artes visuales y plásticas, música y conciertos.⁶ Pese al pujante desarrollo de esta rama económica, fue removida de la Secretaría de Desarrollo Social y resectorizada en la Secretaría de Cultura. Este ajuste institucional es visto con incertidumbre por los investigadores y los analistas del arte popular, quienes juzgan ese movimiento como una decisión controversial, dado que es un sector que aporta más al PIB que la producción de minerales ferrosos (acero y hierro, por ejemplo), además de que la vocación sectorial de las artesanías se ubica más en el ramo económico mercantil que en el cultural, lo que conlleva una reingeniería transversal con otros sectores (turismo, economía, ciencia, salud, tecnología y cultura).⁷

Otro punto en este plan propuesto por AMLO es la reciente creación de la Comisión para Atender los Derechos de los Migrantes en Tránsito, que deberá estar al pendiente de la integridad física, alimentaria y de salud, así como de los derechos humanos de la Caravana Migrante. Si bien esta iniciativa surge en el momento de una situación de crisis internacional migratoria en México, y constituye también un problema de seguridad nacional, la pregunta latente es ¿por qué nunca se ha pensado en generar una política pública para los migrantes indígenas (artesanos y trabajadores agrícolas) que atraviesan las fronteras del territorio nacional en la búsqueda de oportunidades económicas en regiones donde no son considerados como pueblos originarios? Dicha búsqueda plantea un reto social, pues por distintos medios políticos las etnias intentan integrarse a una sociedad civil pluriétnica

⁶ INEGI, *Cuenta satélite de la cultura de México, 2017*, en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCnataNal/CSCLtura2018_11.pdf

⁷ Yanet Aguilar, «Futuro incierto del Fonart», *El Universal*, 11 de enero de 2019, en <https://www.eluniversal.com.mx/cultura/cambio-de-sector-no-garantiza-beneficio-fonart>

⁴ David Marcial Pérez, «Un gigante en la diminuta Tlaxcala», *El País*, 28 de enero de 2019, en https://elpais.com/cultura/2019/01/27/actualidad/1548615429_640774.html

⁵ *Idem*.



y pluricultural que reconozca constitucionalmente sus formas de gobierno tradicionales, su territorialidad y sus derechos de usos y costumbres.

Otra tarea adicional en las políticas públicas del nuevo sexenio será atender la vinculación comunitaria en las diferentes regiones culturales y dar mayor amplitud a las diferentes áreas por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la red de medios de comunicación culturales con más participación y eficiencia de los programas e instituciones encargados de la investigación, formación, difusión, promoción y preservación del arte y la cultura. Las organizaciones civiles y comunitarias más de una vez han alertado sobre la desvinculación de los programas culturales y sus impactos sociales a nivel educativo-cultural, además de advertir la desviación de recursos destinados a estos rubros que terminan en las campañas electorales.

Con el propósito de llevar a cabo esta monumental tarea, AMLO sugiere que las «misiones culturales» promuevan las distintas formas de intercambio entre las regiones, plantea incluso un acercamiento de los bienes culturales en el ámbito estatal-municipal con énfasis en las regiones más remotas del país. El fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial y los circuitos culturales representan dos niveles para

poner en marcha las estrategias de gestión, fortalecimiento, conservación, preservación y restauración del patrimonio cultural. De suerte que a lo largo de la campaña de AMLO no se planteó, en ninguno de sus discursos y debates, de qué manera las universidades públicas participarían en el cumplimiento de dichas metas, dado el papel formativo, investigativo y educativo que esas instituciones desempeñan en la vida nacional. El reciente colapso financiero de las universidades públicas evidenció que la corrupción interna, el endeudamiento económico, los recortes presupuestales y la falta de reformas internas han limitado su participación en las políticas culturales.

Es evidente también que los tópicos prioritarios del nuevo proyecto giran en torno a los derechos humanos, la inclusión de género, la participación de las minorías en la cultura para la paz y la convivencia con una orientación de formación de públicos y acercamiento de las artes desde la primera infancia. Adicionalmente, se contempla la recuperación de infraestructura cultural, misma que ha sido desaprovechada o en desuso (museos comunitarios y edificios históricos), el impulso a los programas específicos de las minorías y la recuperación de los espacios públicos que han sido sujetos de privatización para promover el desarrollo de las artes, la literatura, el cine, la danza y la lectura.

La actividad artesanal

en su conjunto contribuyó con

3.2% del PIB del país,

lo que equivale a

661 mil 505 mdp,

lo cual supera las ganancias de otras actividades en conjunto como el diseño, los servicios creativos, las artes escénicas y espectáculos, los libros, las artes visuales y plásticas, la música y conciertos.

De acuerdo con el enfoque político-cultural de AMLO se denota claramente la participación del sector privado en la planeación gubernamental, el cual formalizará la alianza entre un gobierno neodesarrollista y la burguesía nacional que conjuntamente se orientarán hacia la centralización del funcionamiento del aparato estatal. El propósito es incentivar la inversión en la plataforma de la cultura para la paz, donde se asentarán la promoción y el financiamiento para la gestión de proyectos culturales. Ello significa que se le otorgará un impulso estratégico a las exposiciones itinerantes a escala nacional e internacional, en la que la Red Nacional de Museos tratará de recuperar la vocación formativa de los museos. Bajo ese contexto, se abriría una oportunidad para la museología comunitaria que en los dos sexenios anteriores ha ido a la baja.

La construcción de una cultura para la paz es un modelo político-cultural desarrollado en países como Colombia, que desde hace más de 30 años vive un proceso de violencia exacerbada por la guerrilla y el trasiego de drogas, lo cual condujo al gobierno a fomentar un modelo de reconciliación social sustentado en el arte y la cultura para la pacificación. Paralelamente, se vislumbra una poderosa inversión del Estado mexicano para recuperar la manija de la cultura nacional a través de la promoción de la agenda y de la cultura digitales en la formación de artes y oficios, las narrativas digitales y la inserción de la economía cultural mediante las capacidades humanas de autogestión, bajo el modelo de una cultura orientada hacia la pacificación nacional.

Aunque se propone un impulso para los medios digitales dirigido a la cultura, el escenario es cuesta arriba. El auge e influencia de los medios a escala global con el uso de los dispositivos móviles que usan internet (el número de usuarios ya alcanza 50%) es visible; pero en el caso de México, el arribo tardío de la revolución digital apenas vislumbra un cambio promovido por las ciberculturas. Persiste además una restringida conectividad entre las regiones rural y urbanas, particularmente en el modo en que se relacionan los actores educativos y los grupos culturales con los saberes digitales. Lo

anterior evidencia el limitado desarrollo de las culturas digitales en el ámbito nacional. Es necesario, por tanto, fortalecer de manera integral las plataformas digitales y planear políticas culturales, que posibiliten su auge. En el contexto institucional organizativo de las nuevas políticas públicas culturales se prometen diversas herramientas institucionales legislativas: política inclusiva, simplificación administrativa, reducción de costos, reorientación del gasto y ejercicio presupuestal, fomento de la participación directa y activa de la ciudadanía encaminada a promover la riqueza de la diversidad.

La gran transformación sobre las ruinas posmodernas del sistema político mexicano

La realidad educativa y cultural de los países latinoamericanos, desde hace varias décadas, se encuentra aparcada en una etapa poscolonialista globalizante dirigida hacia la privatización mercantil. Como ha señalado Andrés Ordóñez,⁸ el sistema de libre mercado impuesto en México fue orientado por los grupos de poder gubernamentales que desmantelaron el modelo basado en el subsidio estatal cultural predominante durante el siglo XX. Esto generó un vacío en las políticas culturales de la primera década del siglo XXI, las cuales se intentaron reestructurar con la creación de la Secretaría de Cultura y la Ley de la Cultura en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Las dos reformas constituyeron los principales baluartes del sexenio mencionado, puesto que el Programa Piloto de Verano para la Transformación Social a través del Arte y la Cultura derivó en la primera línea de acción del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; sin embargo, en 100 zonas marginadas de 25 estados de la república, dicho programa fue efímero. Su fracaso radicó en la corrupción interna del Estado, la descoordinación burocrática intersectorial y la actividad imparable del crimen organizado, lo que ocasionó un efecto disgregador en las esferas públicas.

Sin lugar a dudas, la separación entre los sectores educativo y cultural ha repercutido en las políticas públicas gubernamentales que sostienen su engranaje en el segundo sector, en la promoción del arte y la cultura asentada sobre una plataforma compuesta por redes sociales. Éstas guardan una estrecha relación con el poder del Estado y el sistema ritual simbólico, ya que aparte de reforzar las estructuras de las redes, posibilitan el flujo mercantil de los bienes y servicios culturales, según los intereses dominantes de las comunidades acorde con la dinámica mercantil neoliberal.⁹

⁸ Andrés Ordóñez, «Diplomacia y cultura. Contenidos básicos para una reflexión pertinente», *Este País*, núm. 254, junio de 2012, pp. 39-43.

⁹ Larissa Lomnitz, «Cultura política en Chile y en México», *Revista de la Universidad de México*, núm. 530, marzo de 1995, en http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/14119/15357; Claudio Lomnitz, «Ritual, rumor y corrupción en la formación del espacio nacional en México», *Revista Mexicana de Sociología*, año LVIII, vol. 2, 1996, pp. 21-51; Daniel Hernández, «Las políticas culturales

Desde 1978, con la desconcentración administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la creación de la Subsecretaría de Cultura en 1982, el sector educativo se fue separando de la planeación y organización estratégica de la cultura en los ámbitos federal, estatal, regional y local. Lo anterior generó un espacio interdependiente entre los dos sectores gubernamentales que problematiza de modo burocrático la continuidad y la coordinación en las políticas culturales y educativas, y posee un efecto segmentado en la gobernanza de la esfera pública.

Con todo, la realidad educativa y cultural de los países latinoamericanos, como México, está sujeta al sistema de libre mercado neoliberal impuesto desde la década de 1980, orientado por los grupos de poder gubernamental. De manera que son diversos los factores que contribuyeron al desmantelamiento del modelo basado en el subsidio estatal cultural, predominante a lo largo del siglo XX. Ello causó un vacío en las políticas culturales, las cuales ahora, en los albores del siglo XXI, pretenden ser reestructuradas mediante novedosas reformas políticas: la creación de la Secretaría de Cultura, la Ley de la Cultura y el proyecto de descentralización administrativa propuesto por AMLO.

Zacatecas hoy en la cultura

La concepción cultural del subsector estatal vigente en Zacatecas desde principios de los 1980 adolece de la falta de un debate de ideas sobre la experiencia institucional de los distintos actores sociales que se han involucrado en esta actividad entre el último tercio del siglo XX y la primera década del XXI. Así, las políticas culturales estatales se ajustan a los vaivenes partidistas electorales y al manejo político sexenal que regularmente pliegan el arte y la cultura a los intereses políticos de las ideologías dominantes.

En el tránsito de los sexenios priistas de José Guadalupe Cervantes Corona (1980-1986) y Genaro Borrego (1986-1992) a los perredistas de Ricardo Monreal Ávila (1998-2004) y Amalia García Medina

en Zacatecas a examen», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, vol. 3, núm. 11, pp. 19-26.

(2004-2010) se brindó un impulso federal al estado zacatecano, cuya política cultural tendió a fortalecerse en cinco rubros con la finalidad de instalar al estado como un destino turístico: a) un paulatino incremento de la inversión financiera en el sector turístico como un polo de desarrollo; b) rescate y restauración de la arquitectura religiosa que destaca por su riqueza cultural y monumentalidad en el centro histórico de la capital del Estado; c) apertura de zonas arqueológicas, desarrollo de museos y de espacios históricos; d) desarrollo de industrias culturales orientado hacia la artesanía regional, la gastronomía y otras manifestaciones de la cultura popular; y e) enlazamiento con las redes de solidaridad de clubes de migrantes zacatecanos establecidos en Estados Unidos para acceder a la subvención de fondos mixtos dirigidos a fomentar programas sociales y a generar un encadenamiento productivo con la economía zacatecana.

Durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes (2010-2016), los escasos programas culturales que manejaba la Secretaría de Educación de Zacatecas fueron desmontados del aparato educativo estatal, al emitirse una reforma a la Ley de Educación del Estado de Zacatecas mediante un decreto en la LXI Legislatura del estado para modificar el nombre de Secretaría de Educación y Cultura (SEC) por el de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).¹⁰ A la luz de la reforma educativa nacional (2012-2013), este cambio de compromisos y de siglas en el sector educativo zacatecano comprendió también una reorientación hacia la política de centralización practicada tradicionalmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en aras de equilibrar el debilitamiento político del Estado sin lograr un impacto social de la cultura.

En el actual quinquenio de Alejandro Tello Cristerna (2016-2021), las políticas culturales se han visto afectadas por la limitación presupuestal, la austeridad gubernamental y la inercia burocrática del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), cuya dependencia de las decisiones del centro impide la apertura de un proyecto estatal zacatecano, donde los actores culturales (intelectuales, artistas y promotores culturales) participen y potencialicen sus propias iniciativas y ganen espacios en la opinión pública de frente al futuro.

De acuerdo con una declaración del titular del IZC, Alfonso Vázquez Sosa, el recorte presupuestal realizado por el Congreso local para el sector cultural zacatecano en 2019 será de 18.5% menos en relación con 2018, es decir, cerca de 50 millones de pesos, lo que se reflejará en la reducción de actividades culturales.¹¹ Si bien luce desalentador, el panorama plantea nuevos retos y desafíos para los actores sociales

¹⁰ LXI Legislatura del estado de Zacatecas, *Decreto 113, Ley de educación del estado de Zacatecas*, 2014.

¹¹ Alexa Montiel, «Le quitan más dinero al Instituto Zacatecano de Cultura», *Zacatecas en Imagen*, 8 de enero de 2019, en <https://www.imagenzac.com.mx/nota/157929-Le+quitan+más+dinero+al+Instituto+Zacat>



Durante el tránsito de los sexenios de 1980 a 2010, se dio un impulso federal al estado zacatecano, cuya política cultural tendió a fortalecerse con la finalidad de instalar al estado como un destino turístico. En los dos últimos sexenios (2010-2021), las políticas culturales se han visto afectadas por la limitación presupuestal, la austeridad gubernamental y la inercia burocrática del Instituto Zacatecano de Cultura.

pertenecientes a este subsector estatal que se ciñe a la política de austeridad propuesta por AMLO.

Corolario

Aunque el nuevo proyecto cultural de AMLO se ha puesto en marcha con el desarrollo de los primeros programas y el nombramientos de funcionarios, quienes no han sido del agrado de las élites intelectuales, es un hecho que el soporte estructural en materia de políticas culturales y educativas siempre ha sido el punto débil para la coordinación sectorial de planes y programas. Los vasos comunicantes entre ambos sectores nuevamente aparecen separados en la praxis de la función pública, ello abre interrogantes sobre el plan de aterrizaje en el ideario de la «cuarta transformación», pues es notorio que este proyecto neodesarrollista parece encauzarse a abatir los niveles de pobreza y la violencia como temas torales. En adición, es indudable que el principal propósito de la «cuarta transformación» es la integración nacional, ahí la cultura, igual como sucedió en el periodo de la posrevolución y durante el México moderno, desempeñará este papel integrador con una vertiente política nacionalista.

En síntesis: no hay estrictamente una ruptura con el proyecto priista de base nacionalista, sino con su vertiente neoliberal, lo cual se puede apreciar de forma ambivalente en el reciente Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Cultura y Cinematografía¹² de la Comisión de Cultura

y Cinematografía de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, donde se denotan los trazos y los retazos con que se pondrá en operación el proyecto cultural de AMLO que hará las veces de *bricoleur*.

Nos encontramos ante un nuevo escenario de transición para la cultura nacional mexicana que pondrá a prueba el proyecto de la «cuarta transformación», que en un inicio deberá calcular lo que puede rescatarse de los sexenios anteriores y que deberá reconstruirse en este sector. Empero, la discontinuidad y el elitismo en las políticas culturales ha sido una constante en los sexenios que preceden al nuevo gobierno neodesarrollista de AMLO. El desafío de integrar la nación mediante una cuantiosa inversión en el aparato cultural del Estado para contrarrestar la violencia y pacificar el país representa una tarea titánica que se enfrentará a una barrera de hormigón: el hiperconsumo de una sociedad mediatizada por el capitalismo neoliberal, a la cual lo último que le interesa es promover la cultura.

No es un secreto que existe una realidad mexicana profundamente oculta, disimulada detrás de los discursos desarrollistas, una sociedad saboteada por los intereses externos privatizadores del capital en coordinación con las ideologías decadentes localistas y clientelares que han contribuido políticamente a la destrucción del tejido social, educativo y cultural del país. Por ende, la tarea planteada por el gobierno de AMLO exige compromisos monumentales, donde no todos los sectores de la sociedad mexicana están dispuestos a participar y menos aún donde las ideologías localistas lumpenizadas imponen su ley en las regiones culturales. 🐦

¹² LXIV Legislatura, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, «Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Cultura y Cinematografía, correspondiente al periodo de octubre de 2018 a agosto de 2019», Comisión de Cultura y Cinematografía, Ciudad de México, 2019.

La corrupción institucionalizada en el manejo del agua en México: el caso de Zacatecas

CINDY McCULLIGH*

Los acuíferos de la región centro del estado de Zacatecas se encuentran sobreexplotados y no existen acciones efectivas para frenar o revertir esa tendencia. En este texto se emplea el concepto de «corrupción institucionalizada» para explicar determinadas prácticas gubernamentales que contribuyen a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas. Tales prácticas incluyen la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios «en el papel» de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.

*Posdoctorante, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

Este artículo es una traducción modificada y ampliada de una sección escrita por la autora en Darcy Tetreault y Cindy McCulligh, «Water grabbing via institutionalized corruption in Zacatecas, México», *Water Alternatives*, vol. 11, núm. 3, 2018, pp. 572-591

En este breve texto analizo la gestión del agua subterránea en la región centro del estado de Zacatecas, para demostrar cómo se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería. En términos más generales, este caso sirve para ejemplificar cómo, a pesar de los discursos al contrario, las políticas sobre el agua a nivel nacional no están orientadas ni a la gestión de la demanda ni a la sustentabilidad. Para ello, presento un patrón de acción oficial y de los usuarios que denomino «corrupción institucionalizada», en donde se deja sin efecto la regulación de la extracción del agua subterránea y se mantienen los patrones insustentables de desarrollo urbano, agrícola e industrial. De esta manera, la crisis del agua en Zacatecas que empezó a manifestarse en la disminución del nivel freático en la década de 1950, debido princi-

palmente al uso de agua subterránea en el sector agrícola para impulsar y diversificar la producción de cultivos comerciales, se ha profundizado desde que hace 30 años se empezó a implementar una serie de reformas de corte neoliberal, en tanto ha aumentado la sobreexplotación, ha empeorado la calidad del agua disponible y se ha exacerbado la distribución injusta del recurso.¹

El endeble control sobre los aprovechamientos del agua subterránea a nivel nacional se ve reflejado en la condición de muchos acuíferos. De los 653 acuíferos en el país, el número de los sobreexplotados subió de 32 en 1975 a 105 en 2015. Los cinco estados con los mayores déficits en aguas subterráneas son Chihuahua, Guanajuato,

¹ Para un análisis más detallado de la distribución injusta del agua en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, véase Darcy Tetreault, «Water in Zacatecas: a crisis without conflict», en Darcy Tetreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio (eds.), *Social environmental conflicts in Mexico: resistance to dispossession and alternatives from below*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 183-217.

Caudro 1. Acuíferos sobreexplotados en el estado de Zacatecas (Mm³/año)

Acuífero	Extracción	Recarga	Descarga natural comprometida	Déficit
Chupaderos	187.6	86.6	0.0	-101.0
Aguanaval	167.4	84.5	0.0	-82.9
Calera	164.8	91.1	1.2	-74.9
Loreto	81.1	32.7	0.0	-48.4
Ojocaliente	66.7	51.0	3.1	-18.8
Villa Hidalgo	53.0	41.0	0.0	-12.0
Guadalupe de las Corrientes	43.7	43.7	0.0	-10.9
La Banca	29.3	19.0	0.0	-10.3
Jérez	54.3	53.5	8.0	-8.8
Puerto Madero	24.8	16.5	0.0	-8.3
Benito Juárez	21.2	18.1	0.0	-3.1
Ábrego	19.6	20.0	3.2	-2.8
Guadalupe Bañuelos	12.7	12.1	0.0	-0.6
Guadalupe Garzarón	19.9	19.6	0.0	-0.3

Elaboración de la autora con base en el *Diario Oficial de la Federación* (2018).

La Conagua determina la extracción de acuerdo con los volúmenes concesionados, además la descarga natural comprometida se define como la «fracción de la descarga natural de un acuífero, que está comprometida como agua superficial para diversos usos o que debe conservarse para prevenir un impacto ambiental negativo a los ecosistemas o la migración de agua de mala calidad a un acuífero» (nom-011-Conagua-2015).

Baja California, Ciudad de México y Zacatecas.² Al mismo tiempo, el uso de las aguas subterráneas ha estado aumentando más rápidamente que el de las aguas superficiales. Actualmente, las aguas subterráneas proveen el 36% del agua para la agricultura, 59% del abasto público-urbano y 77% del agua para usos industriales.³

La dependencia del agua subterránea en Zacatecas es aún más significativa: 77.6% del agua concesionada para usos consuntivos es de los acuíferos y sólo 22.4% proviene de aguas superficiales. La vasta mayoría del agua del subsuelo se consume en la agricultura: 85.3% del agua subterránea se destina a actividades agrícolas, 9.2% al abastecimiento público urbano y 5.5% es para actividades industriales.⁴ De los 34 acuíferos del estado, 14 se encuentran en déficit, con niveles de extracción que superan la recarga a una tasa de 382.9 millones de metros cúbicos (Mm³) anuales (véase cuadro 1).⁵

² Comisión Nacional del Agua, *Preservación y recuperación de acuíferos en México*, México, Conagua, 2015.

³ Comisión Nacional del Agua, *Estadísticas del agua en México, edición 2016*, México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016.

⁴ Con datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), actualizado al 31 de diciembre de 2017.

⁵ «Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados



En la agricultura, las tasas de explotación de los acuíferos aumentaron fuertemente en la década de 1980 y en el contexto de la crisis de la deuda; en 1988 había 146 mil 949 ha de riego en el estado, con 108 mil 455 ha surtiéndose de fuentes del subsuelo.⁶ Ha continuado el crecimiento de las zonas de riego, alcanzando 198 mil 470 ha en 2007.⁷ Aunque los agricultores tienen que pagar el consumo de energía eléctrica para el bombeo, no pagan el agua que extraen. Al mismo tiempo, entre 70% y 84% de los productores en la región centro del estado emplean métodos de riego tradicionales, lo que resulta en un uso ineficiente del agua y «pérdidas entre 40% y 60%».⁸ Ciertamente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha promovido programas para aumentar la eficiencia del consumo del agua a nivel parcela en el sector agrícola del estado, con la introducción, entre otros, de riego por goteo y cultivos con menor requerimiento de agua. Aun así, la misma Conagua afirma que la inversión en tecnología hidroagrícola no ha redundado en una disminución de la sobreexplotación del agua, sino que los volúmenes «liberados» se han empleado para incrementar el agua de riego,⁹ en contraposición con los esfuerzos por disminuir el uso del agua de riego, además existen programas estatales para fomentar la producción de cebada para la gran cervecera de Anheuser-Busch Inbev en el municipio de Calera. Aunque requiere de más agua que los cultivos tradicionales como maíz y frijol, se sembraron 52 mil ha de cebada en Zacatecas en la primavera de 2015.¹⁰

El crecimiento demográfico en la región centro del estado, aunque secundario, es otra fuente de presión sobre los acuíferos locales. La población de los seis principales municipios de la región centro (Calera, Fresnillo, General Enrique Estrada, Guadalupe, Morelos y Zacatecas), y los que serán beneficiados por el proyecto de la presa Milpillitas que se promueve actualmente, creció de 301 mil 560 en 1980 a 628 mil 813 en 2015.¹¹ En esta región centro existen cinco acuíferos: Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe Bañuelos. Todos están sobreexplotados, con un déficit anual total de 261.3 Mm³. Esto se refleja en la baja de los niveles piezométricos: un metro por año para los acuíferos Calera y Chupaderos, 0.6 m/año

para Aguanaval y 0.4 m/año para Benito Juárez y Guadalupe Bañuelos.¹²

En las siguientes secciones del texto, empleo el concepto de corrupción institucionalizada para explicar algunas prácticas gubernamentales que contribuyen a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas. Este concepto no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón continuo de «sesgos en la generación y aplicación de las normas ambientales que favorecen el interés privado sobre el bien común».¹³ Implica eludir las regulaciones ambientales para proveer a los capitales extractivos el acceso a los recursos escasos, incluyendo el agua. Las autoridades del agua en México exhiben una corrupción institucionalizada al infringir y tolerar infracciones sobre la extracción de agua subterránea por los intereses privados. Estas infracciones toman muchas formas. Como se explorará en lo que sigue, en Zacatecas incluyen la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, así como bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y cambios «en el papel» de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.

El concepto de corrupción institucionalizada busca echar luz sobre las decisiones políticas que se toman sobre la distribución y explotación del agua, para ir más allá de las explicaciones que se enfocan en la capacidad institucional limitada o falta de recursos, y para destacar cómo se favorecen activamente a intereses privados mediante configuraciones institucionales que dan preponderancia a las actividades agrícolas e industriales sobre las estrategias de protección de las fuentes de agua en el mediano y largo plazos.

Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las Regiones Hidrológicas-Administrativas que se indican», *Diario Oficial de la Federación* (DOF), 4 enero 2018, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510042&fecha=04/01/2018

⁶ Darcy Tetreault, «Water in Zacatecas...», p. 196.

⁷ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Perspectiva estadística Zacatecas*, Aguascalientes, INEGI, 2012.

⁸ Francisco Mojarro Dávila *et al.*, citados en Darcy Tetreault, «La presa Milpillitas y el negocio del agua en la región centro de Zacatecas», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, vol. 5, núm. 15, 2016, p. 58.

⁹ Comisión Nacional del Agua, *Plan de manejo integral de los acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Estado de Zacatecas*, México, Conagua, 2011.

¹⁰ Darcy Tetreault, «La presa Milpillitas y el negocio del agua...».

¹¹ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Encuesta Intercensal 2015*, Aguascalientes, INEGI, 2015.

¹² Comisión Nacional del Agua, *Preservación y recuperación de acuíferos...*

¹³ Cindy McCulligh, «The gray side of green growth: environmental regulation and the industrial pollution of the Santiago River», en Darcy Tetreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio, *op. cit.*, p. 147. Véase también, Cindy McCulligh, *Alcantarilla del progreso: industria y Estado en la contaminación del río Santiago en Jalisco* (tesis doctoral), Guadalajara, CIESAS, 2017.

Ello está en concordancia con los argumentos de Boelens *et al.*, en su llamado para estudiar los «territorios hidrosociales» a favor de la repolitización de los análisis, para ir más allá de las interpretaciones políticamente neutras de los problemas del agua que entienden las soluciones en términos de «conocimiento técnico, <uso racional del agua> y la <buena gobernanza>». ¹⁴ En esta exploración de la corrupción institucionalizada en el caso del uso del agua en Zacatecas, las prácticas examinadas a continuación demuestran cómo la acción oficial, en lugar de frenar la sobreexplotación, normaliza e invisibiliza las prácticas que exacerbaban la explotación insostenible de los acuíferos.

Las prácticas de la corrupción institucionalizada

Antes de adentrarnos en las prácticas, destaco que la hipótesis sobre la corrupción institucionalizada se refiere en parte a que funge como una manera de resolver las contradicciones derivadas del hecho de tratar al agua primordialmente como un bien económico, en la práctica, al mismo tiempo que se crean mecanismos formales de participación así como leyes y normas que buscan procurar la sustentabilidad ambiental. La intención del término es

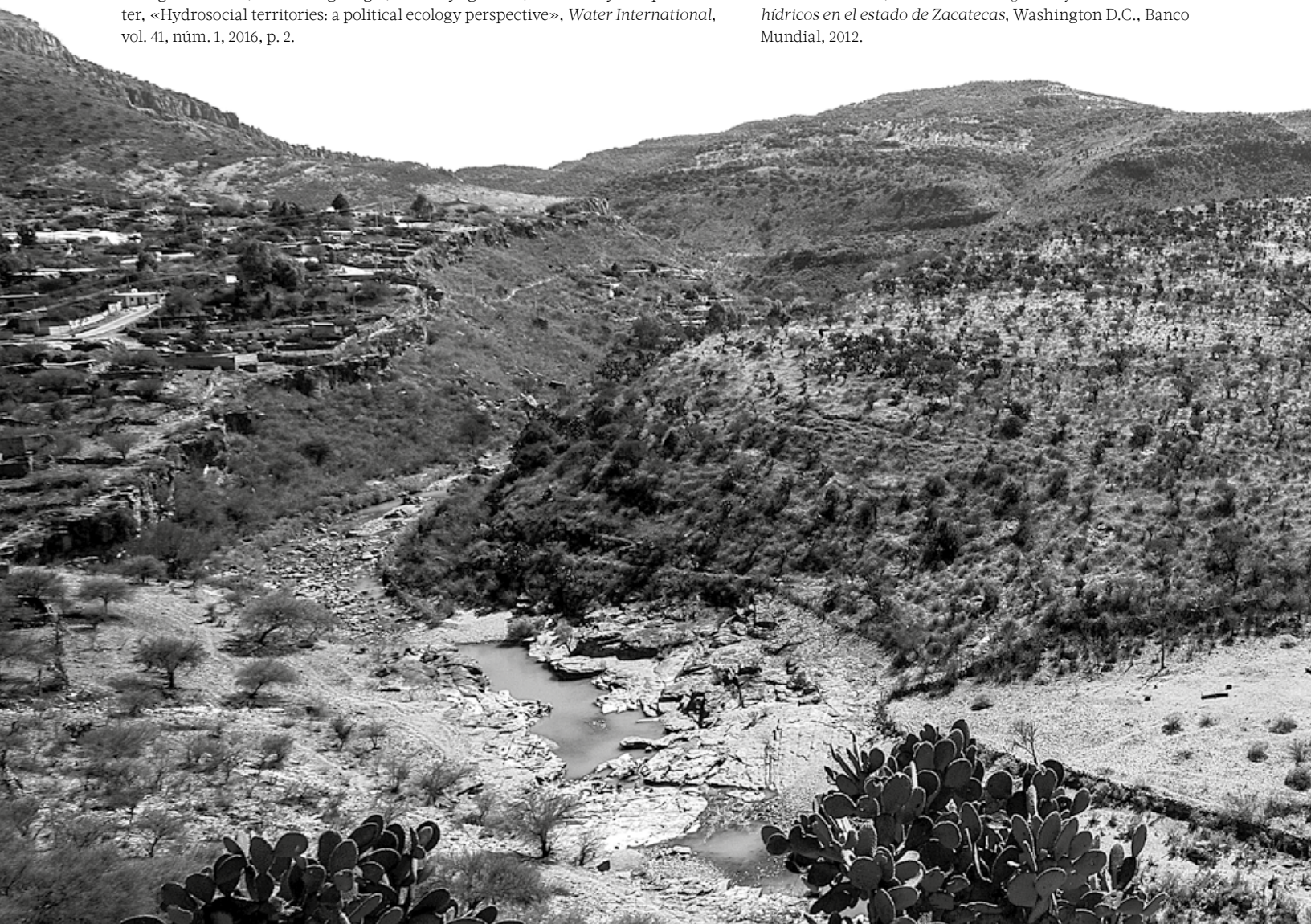
¹⁴ Rutgerd Boelens, Jaime Hoogesteger, Erik Swyngedouw, Jeroen Vos y Philipus Wester, «Hydrosocial territories: a political ecology perspective», *Water International*, vol. 41, núm. 1, 2016, p. 2.

subrayar la discrepancia existente entre la idea de un Estado democrático que vela por el bien común al tratar de procurar un equilibrio entre objetivos económicos y ambientales contrapuestos y la de un Estado neoliberal depredador que tiende a operar a favor de los intereses de corto plazo de corporaciones y empresas individuales que emplean grandes cantidades de agua en sus actividades extractivas, industriales y agrícolas. A continuación, se presentan cuatro manifestaciones de la corrupción institucionalizada en la gestión y el uso del agua en Zacatecas.

Transmisión parcial de las concesiones de agua

Desde los 1960 se han emitido diferentes decretos que instituyen zonas de veda para restringir los derechos de perforación de nuevos pozos en Zacatecas, y existe algún tipo de restricción para todos los municipios del estado. ¹⁵ En los hechos,

¹⁵ Banco Mundial, *Análisis del uso y manejo de los recursos hídricos en el estado de Zacatecas*, Washington D.C., Banco Mundial, 2012.



sin embargo, esto ha llevado al fraccionamiento y, por lo tanto, a la multiplicación de las concesiones de agua existentes mediante la práctica de las transmisiones parciales de títulos (Ley de Aguas Nacionales, artículo 33). Tanto agricultores como autoridades de la Conagua entrevistados al respecto coinciden en describir cómo funciona esto en la práctica. Por ejemplo, el presidente de los Productores de Pozos de Riego Agropecuarios del estado describe cómo realizó la transmisión parcial de su propia concesión:

[E]n mi caso, para no hablar de otros, [la concesión] tenía 300 mil m³, con los que ya hice seis concesiones. Ya están explotando 1 millón 800 mil m³ en lugar de los 300 iniciales. Ya están metiendo la cuota energética cada uno por 300 mil m³. Porque la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Sagarpa¹⁶ no tienen la capacidad ni el personal para supervisar eso.¹⁷

Mientras esto significa, en sus palabras, que «estamos seis personas en delito», la situación continúa dado que es conciente de que: «A la Comisión Nacional del Agua se le salió de control todo. No tiene absoluto control sobre las concesiones ni sobre la explotación, no

¹⁶ Sagarpa es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

¹⁷ Entrevista realizada por Ángela Ixkic Bastian Duarte, en agosto de 2014.

nada más en Zacatecas, en todo el país». La encargada de la Unidad Jurídica en la oficina estatal de la Conagua considera que «lo más dañino para la Conagua y los acuíferos, son las transmisiones parciales», al reconocer que, «no tenemos la capacidad técnica ni humana para estar verificando que saquen el volumen que les toca».¹⁸

La prevalencia de las transmisiones parciales de títulos es destacada por el encargado del Banco de Agua en Zacatecas, organismo creado en el estado en 2011. Conagua opera los Bancos de Agua en el país, cuyo propósito es regular las transmisiones entre usuarios de los títulos de agua.

¹⁸ *Idem.*

«A la Comisión Nacional del Agua se le salió de control todo. No tiene absoluto control sobre las concesiones ni sobre la explotación, no nada más en Zacatecas, en todo el país».

Fotografía: Adolfo Valtierra



De acuerdo con el gerente en Zacatecas, «somos el segundo o tercer estado con mayor número de transmisiones parciales, debido a que la mayoría o la totalidad de los acuíferos están en veda» para nuevos pozos.¹⁹ La multiplicación de pozos a través de la transmisión parcial de los títulos de concesión se traduce en una situación donde se desconocen los volúmenes reales del agua subterránea que se extraen. La naturaleza no regulada de los aprovechamientos de agua en el sector agrícola también queda patente en el hecho de que, por ejemplo, entre los 4 mil 266 «usuarios» con concesiones para extraer agua de los acuíferos Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe Bañuelos, solamente 11% cuenta con medidor en su pozo, aunque esto es una obligación legal.²⁰

Bajos niveles de inspección y vigilancia

Debido a que los cálculos de la extracción se basan en datos de las concesiones, la falta de supervisión e inspección implica que las verdaderas tasas de sobreexplotación con probabilidad exceden lo que se estima. La Conagua carece de capacidad de inspección en el nivel nacional, hecho que se evidencia en el número de inspectores y de las inspecciones realizadas comparado con el número de usuarios con una concesión para extraer aguas superficiales o subterráneas, o bien con un permiso para descargar a aguas nacionales o para ocupar una zona federal. El número total de concesiones y permisos registrados a escala nacional es cercano a medio millón (491 mil 362 en febrero de 2016), y Conagua cuenta con alrededor de 180 inspectores.²¹ Con base en el promedio anual de inspecciones realizadas por la Conagua entre 2011 y 2015 (8 mil 337), se puede estimar que requeriría de 59 años para poder inspeccionar a cada usuario. Esto pone en perspectiva el tipo de vigilancia que puede movilizar la comisión.²²

¹⁹ *Idem.*

²⁰ Darcy Tetreault, «La presa Milpillas y el negocio del agua...», pp. 50-59.

²¹ Entrevista con el gerente de Inspección y Medición de la Conagua, mayo de 2015.

²² Este cálculo se basa en las versiones públicas de las visitas de inspección que ha publicado la Conagua entre los años 2011-2015.

La encargada de la Unidad Jurídica de Conagua en Zacatecas —antes inspectora— subraya, además, otro problema con las inspecciones que se llegan a realizar. Con referencia a operativos de inspección realizados entre 2010 y 2012 para pozos que extraen agua de los acuíferos Chupaderos y Calera, esta funcionaria explica que, a pesar de la «clausura» oficial de muchos pozos, errores procedimentales en las inspecciones significaron que muchas de estas clausuras fueron revertidas en acciones legales subsecuentes. Menos del 5% de las aproximadamente 290 sanciones se mantuvieron después de las acciones legales, ella explica: «No lo hicieron bien [las inspecciones]. Llámese la visita, los oficios, etcétera. Y si tú me preguntas de todos los juicios que yo llevé, se perdió 95% por cuestiones de la visita».²³ Un anterior gerente de personal en las oficinas centrales de Conagua en la Ciudad de México identifica este patrón de acción, donde la vigilancia se debilita: «En la parte procesal, me refiero [al] levantamiento de actas, si resulta que a la hora que levantas el acta, <te equivocas> en alguna cosa a la hora de levantar el acta, y luego le avisas al usuario que te equivocaste, entonces le das toda la posibilidad de que se ampare y no le haces nada».

En su experiencia, esto sólo puede explicarse en términos de la «corrupción» (institucionalizada).²⁴ La falta generalizada de vigilancia y aplicación de la regulación es reconocida por el presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (Cotas) para los acuíferos Chupaderos y Calera, quien señala que, en el sector agrícola, una proporción importante de usuarios: «Infrinjamus la ley y nos acostumbramos a que ese tipo de reglamentos no tienen ninguna consecuencia, podemos hacer lo que queramos en pocas palabras». En la práctica, esto se traduce en una carencia de control y medición de los volúmenes de agua extraídos para la irrigación. Los usuarios se preguntarán, en las palabras del presidente: «¿Para qué quiero llevar un control de volumen si nadie viene y me revisa? Si ya se terminó mi volumen pero tengo el cultivo a media etapa, ¿qué hago? ¿Lo sigo regando? Mejor me olvido de eso y saco mi cultivo. Total, nadie viene a decirme algo».²⁵ El presidente del Cotas considera que esta ausencia de supervisión está tan implantada que, en el caso de que las autoridades realmente intentaran hacer valer las regulaciones, el resultado sería un conflicto social. Esto hace eco de la percepción del presidente de los Productores de Pozos de Riego Agropecuarios, quien afirma que, «cuando toquen al primero de nosotros, les vamos a venir a dar en la madre, porque la mitad de culpabilidad es de Conagua (...) porque ellos han tenido la tolerancia de hacerse de

²³ Entrevista realizada por Ángela Ixkic Bastian Duarte, en agosto de 2014.

²⁴ Entrevista con el director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA Jalisco y anterior gerente de personal de la Conagua, febrero de 2013.

²⁵ Entrevista realizada por Ángela Ixkic Bastian Duarte, en agosto de 2014.

los ojos ciegos».²⁶ Este es un ejemplo claro del «Estado débil» descrito por Aboites²⁷ mediante varios casos de la depredación del agua por parte de industriales y agricultores, en los que destaca «la incapacidad, o la franca complicidad del Estado, para someter a esos grupos a alguna lógica de racionalidad no empresarial, buscando una cierta equidad o algún criterio de conservación a largo plazo». Nosotros lo llamamos corrupción institucionalizada.

Aparente manipulación de datos

Otra práctica importante que funge para asegurar el agua para satisfacer intereses económicos involucra la manipulación o tergiversación de los datos acerca del estado y la cantidad del recurso hídrico. Un caso bastante claro proviene del norte de Zacatecas, donde las cifras oficiales de la recarga natural del acuífero Cedros se mul-

tiplicaron durante la etapa antes de la instalación de la mina Peñasquito, una enorme mina a cielo abierto de la compañía canadiense, Goldcorp, en el municipio de Mazapil.²⁸ En 2007, Conagua dio a conocer un estudio de la disponibilidad del agua en el acuífero Cedros, donde se afirma que la tasa de recarga natural es de 10.1 Mm³/año, y que el volumen comprometido en concesiones es de 4.45 Mm³/año. Dos años después, la Conagua publicó información en el *Diario Oficial de la Federación* indicando que la recarga para el acuífero Cedros era de 54.4 Mm³/año, ¡un aumento de 435%!²⁹ Como afirman Garibay *et al.*³⁰ en su análisis detallado, esto era

²⁸ Claudio Garibay, Andrés Boni, Francesco Panico y Pedro Urquijo, «Corporación minera, colusión gubernamental y desposesión campesina. El caso de Goldcorp Inc. en Mazapil, Zacatecas», *Desacatos*, vol. 44, enero-abril 2014, pp. 113-142.

²⁹ «Acuerdo por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos», *Diario Oficial de la Federación*, 28 agosto 2009, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5107344&fecha=28/08/2009

³⁰ Claudio Garibay *et al.*, *op. cit.*, p. 130.

²⁶ *Idem.*

²⁷ Luis Aboites, *La decadencia del agua de la nación. Estudio sobre desigualdad social y cambio político en México, segunda mitad del siglo XX*, Ciudad de México, El Colegio de México, 2009, p. 46.

Mina a cielo abierto de la minera canadiense, Goldcorp, en el municipio de Mazapil. Fotografía: Goldcorp.com



«algo asombroso, incluso mágico: ¡crear agua por decreto gubernamental!» Actualmente, la mina Peñasquito, considerada la mina de oro más grande del país, cuenta con concesiones para 38 Mm³/año de 60 pozos en el acuífero Cedros, así como otros 6 Mm³/año del sobreexplotado acuífero Guadalupe Garzarón.³¹ Garibay *et al.* lo describen como un caso de «reciprocidad negativa» entre la corporación y las comunidades locales, quienes han perdido su acceso a los recursos hídricos. En este caso, las autoridades del agua han incurrido tanto en «falsificar los estudios técnicos» como en realizar actos de omisión al permitir la continua extracción no sustentable del agua del acuífero.³²

La minimización discursiva del consumo industrial del agua

En los debates acerca del agua en la región centro de Zacatecas, parece existir un patrón claro de representación errónea de los datos del agua con el fin de desviar la atención de los usuarios industriales. El *Programa Hídrico Estatal 2014-2018*³³ de la Conagua, por ejemplo, afirma en una parte que «[s]e estima que en el estado la industria emplea un poco más de 18.8 [Mm³] anuales, lo cual representa un porcentaje de agua realmente pequeño respecto del total de volúmenes extraídos». Más adelante en el mismo documento, sin embargo, se contradice esta cifra al indicar que, en realidad, el consumo industrial del agua en Zacatecas es casi cuatro veces mayor: 71.1 Mm³/año.³⁴ En forma similar, al hablar de la cervecería de Anheuser-Busch Inbev y el acuífero Calera, el entonces delegado estatal de la Conagua, Benjamín de León Mojarro dijo a reporteros en 2016 que la fábrica extrae «muy poco» volumen de agua del acuífero y que su consumo estimado de 6 Mm³/año representa sólo 0.05% del agua consumida por la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG).³⁵ De hecho, este nivel de consumo (que sólo representa un poco menos de la mitad de los volúmenes de agua concesionados a Anheuser-Busch Inbev) equivale a 22% del agua consumida en la ZCZG o 444 veces más de lo «estimado» por de León.

³¹ Comisión Nacional del Agua, «Concesiones, asignaciones, permisos otorgados y registros de obras situadas en zonas de libre alumbramiento de Conagua», 2015, en <https://datos.gob.mx/busca/dataset/concesiones-asignaciones-permisos-otorgados-y-registros-de-obras-situadas-en-zonas-de-libre-alu>

³² Claudio Garibay *et al.*, *op. cit.*, p. 132.

³³ Comisión Nacional del Agua, *Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de Zacatecas*, México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, p. 31.

³⁴ *Ibid.*, p. 39.

³⁵ Alma Ríos, «Presas Milpillitas tendrá registro ante SHCP a más tardar entre mayo o junio», *La Jornada Zacatecas*, 5 de febrero de 2016, en <http://ljz.mx/2016/02/05/presa-milpillitas-tendra-registro-ante-la-shcp-a-mas-tardar-entre-mayo-o-junio/>

Conclusiones

Sin duda, se requieren de acciones y estrategias diversas para cambiar la gestión del agua subterránea en la región centro de Zacatecas, para frenar la sobreexplotación y asegurar el acceso a agua potable de calidad para los asentamientos humanos. Como exploran otros artículos de este número de *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, la apuesta actual de las autoridades del estado es aumentar el abastecimiento a través de la construcción de la presa Milpillitas, sobre el río del mismo nombre, al extremo occidente del estado en la cuenca del río Santiago. Un trasvase de cuenca y una gran obra de infraestructura hidráulica no sólo no solucionarán los problemas que son de una magnitud importante, sino que no (tras)tocan los patrones actuales de uso del agua en la región centro del estado. Minar agua subterránea para emprendimientos privados, sean agrícolas o industriales, se realiza actualmente con la anuencia de las autoridades, cuya aplicación de la regulación se inscribe en las prácticas de la corrupción institucionalizada. El panorama futuro se vuelve más incierto si tomamos en cuenta que las previsiones del cambio climático incluyen disminuciones en los niveles de precipitación, en promedio de 15.2% para la segunda mitad del siglo XXI, lo que tendrá impactos más severos en las zonas áridas.³⁶

Mientras la corrupción institucionalizada permite que persistan los patrones no sustentables de explotación del agua en la región centro del estado, la crisis del agua se profundiza y se cristaliza en el conflicto naciente en torno a la presa Milpillitas. Sin duda, la participación y la vigilancia ciudadanas serán clave para poder develar y romper las prácticas oficiales que solapan la sobreexplotación de los acuíferos en aras de garantizar actividades y ganancias privadas. 🐦

³⁶ Polioptro Martínez Austria y Carlos Patiño Gómez, «Efectos del cambio climático en la disponibilidad del agua en México», *Tecnología y Ciencias del Agua*, vol. 3, núm. 1, 2012, pp. 5-20.

La No Factibilidad de la presa Milpillas

DARCY TETREULT*

El Estudio de factibilidad de la presa Milpillas señala que la obra permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos en la región centro del estado de Zacatecas, lo cual se considera «un efecto importante del proyecto (...) de gran magnitud e importancia». Sin embargo, esta proposición es una falacia. Como se advierte en este texto, luego de hacer un análisis crítico del estudio de factibilidad y del discurso oficial, el proyecto se construye sobre arenas movedizas, por lo que es necesario esbozar algunas alternativas como se intenta hacer al final del artículo.

*Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

Este artículo es una traducción modificada y ampliada de una sección escrita por el autor en Darcy Tetreault y Cindy McCulligh, «Water grabbing via institutionalized corruption in Zacatecas, México», *Water Alternatives*, vol. 11, núm. 3, pp. 572-591

El río Milpillas no fue mencionado explícitamente por Miguel Alonso Reyes el 8 de septiembre de 2015 cuando anunció los planes para construir una gran presa para transferir agua a la región centro del estado de Zacatecas, durante la presentación del V Informe de Gobierno. Lo que dijo en ese momento es que, gracias a su iniciativa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había llevado a cabo un estudio que determinó la disponibilidad de 100 millones de metros cúbicos anuales (Mm³/año) de agua para consumo humano, y que ya había obtenido la autorización del presidente Enrique Peña Nieto para construir una presa para capturar 47 Mm³/año de agua para dicho propósito. Declaró que la presa iba a «asegurar durante los próximos 50 años la viabilidad de la vida y del desarrollo económico de la gran zona metropolitana Fresnillo-Zacatecas-Gua-

dalupe, la más poblada del estado». Durante las siguientes semanas, Alma Fabiola Rivera Salinas, la entonces directora de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del estado de Zacatecas, señaló que el proyecto consistía en construir una presa sobre el río Milpillas —la primera de dos presas sobre el mismo río— y un acueducto para llevar el agua a una distancia de 166 km para abastecer el corredor urbano industrial entre Fresnillo y la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG). Al ser autorizada la segunda, serviría para transferir lo que quedara de los 100 Mm³/año de agua que supuestamente está disponible.¹

El método utilizado para estimar el volumen de agua disponible no está incluido en el Estudio de factibilidad de la presa Milpillas,² elaborado por el Gobierno de Zacatecas y Conagua en 2015 a un costo de 16 millones 362 mil 98 pesos, para cumplir con el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).³ De hecho, como se notó en la opinión técnica emitida por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el 25 de octubre de 2015, el estudio de 542 páginas carece de información básica, por ejemplo, un cálculo para estimar el caudal del río en diferentes temporadas del año, la elevación y la longitud de la cortina, el volumen del agua que se pretende capturar y la calidad del agua.⁴

¹ Secretaría del Agua y Medio Ambiente, «Presa Milpillas, la obra hidráulica más grande para Zacatecas», *Agua y Saneamiento* (órgano oficial de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México), año 15, núm. 6, 2015, p. 50.

² Gobierno de Zacatecas y Conagua, *Estudio de factibilidad de la presa Milpillas en el Municipio de Jiménez del Teul y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo*, 2015, en <http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html>. Clave del proyecto: 32ZA2015HD020. Se menciona la existencia de dos anexos que no hemos podido obtener.

³ Respuesta de Conagua a una solicitud de información mediante el sistema Infomex, folio 1610100124316.

⁴ El Resolutivo de Semarnat sobre el proyecto Milpillas señala que el «promoviente» (es decir, el gobierno del estado de Zacatecas) proporcionó información adicional para responder a estas observaciones. En cuanto a la calidad del agua, reporta que «de acuerdo

Cuadro 1. Tasas de sobreexplotación y distribución sectorial de las aguas subterráneas concesionadas en la región centro de Zacatecas

	Concesiones (Mm ³ /año)	Recarga natural (Mm ³ /año)	Tasa de sobreexplotación (Mm ³ /año)	Distribución sectorial			
				Agrícola %	Público urbano %	Industrial %	Otros ² %
Aguanaval	167.4	84.5	82.9	97.9	1.93	0.00	0.13
Benito Juárez	21.2	18.1	3.1	57.4	42.50	0.00	0.10
Calera	164.8	91.1	73.7	82.1	8.96	8.48	0.51
Chupaderos	187.6	86.6	101.0	98.5	1.35	0.03	0.12
Guadalupe-Bañuelos	12.7	12.1	0.6	42.6	55.60	0.00	1.80
Totales	553.7	292.4	261.3	90.6	6.60	2.50	0.30

* La categoría «otros» incluye los sectores doméstico, pecuario y agroindustrial.

Fuente: elaboración propia, con base en información de Conagua, «Disponibilidad del agua subterránea», Diario Oficial de la Federación, 4 de enero 2018, para las primeras tres columnas; Plan de manejo integral de los acuíferos Calera, Chupaderos y Aguanaval, Zac. (2011) para la distribución sectorial de Aguanaval, Calera y Chupaderos; y el Registro de Usuarios 2012, Departamento de Aguas Subterráneas de la Dirección Local Zacatecas de Conagua, para la distribución sectorial de Benito Juárez y Guadalupe-Bañuelos.

En el Estudio de factibilidad se afirma repetidamente que el proyecto servirá para aliviar la presión sobre los acuíferos sobreexplotados en la región centro del estado y en la página 29 se dice que para finales de la vida útil de la presa (50 años) «se espera que los acuíferos que dotan de agua a esta (sic) poblaciones, ya hayan recuperado sus niveles freáticos y se encuentran en condiciones satisfactorias para poder abastecer la demanda de agua en ese momento».⁵ Sin embargo, en ningún lugar se presentan los datos y cálculos correspondientes para respaldar esta afirmación.

De acuerdo con los datos presentados en el cuadro 1, las concesiones de agua subterránea en la región centro de Zacatecas suman 553.7 Mm³/año; las tasas de recarga de los cinco acuíferos en la misma región suman sólo 292.4 Mm³/año, lo que deja un déficit total de 261.3 Mm³/año. Según SAMA, el acueducto tendrá la capacidad de transportar 41.0 Mm³/año de agua a la región centro.⁶

a un análisis de calidad del agua conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, realizado por el laboratorio denominado MicroLab Industrial, (...) la calidad del agua del río [Milpillás] es considerada como aceptable» (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/04223 Resolutivo sobre el proyecto Milpillás, 6 de julio de 2016, p. 27, en <http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html>).

⁵ Gobierno de Zacatecas y Conagua, *op. cit.*, p. 29.

⁶ SAMA *op. cit.* Se señala que «el acueducto tendrá una capacidad de 1.3 m³ por segundo» (p. 50), equivalente a 41 Mm³/año.

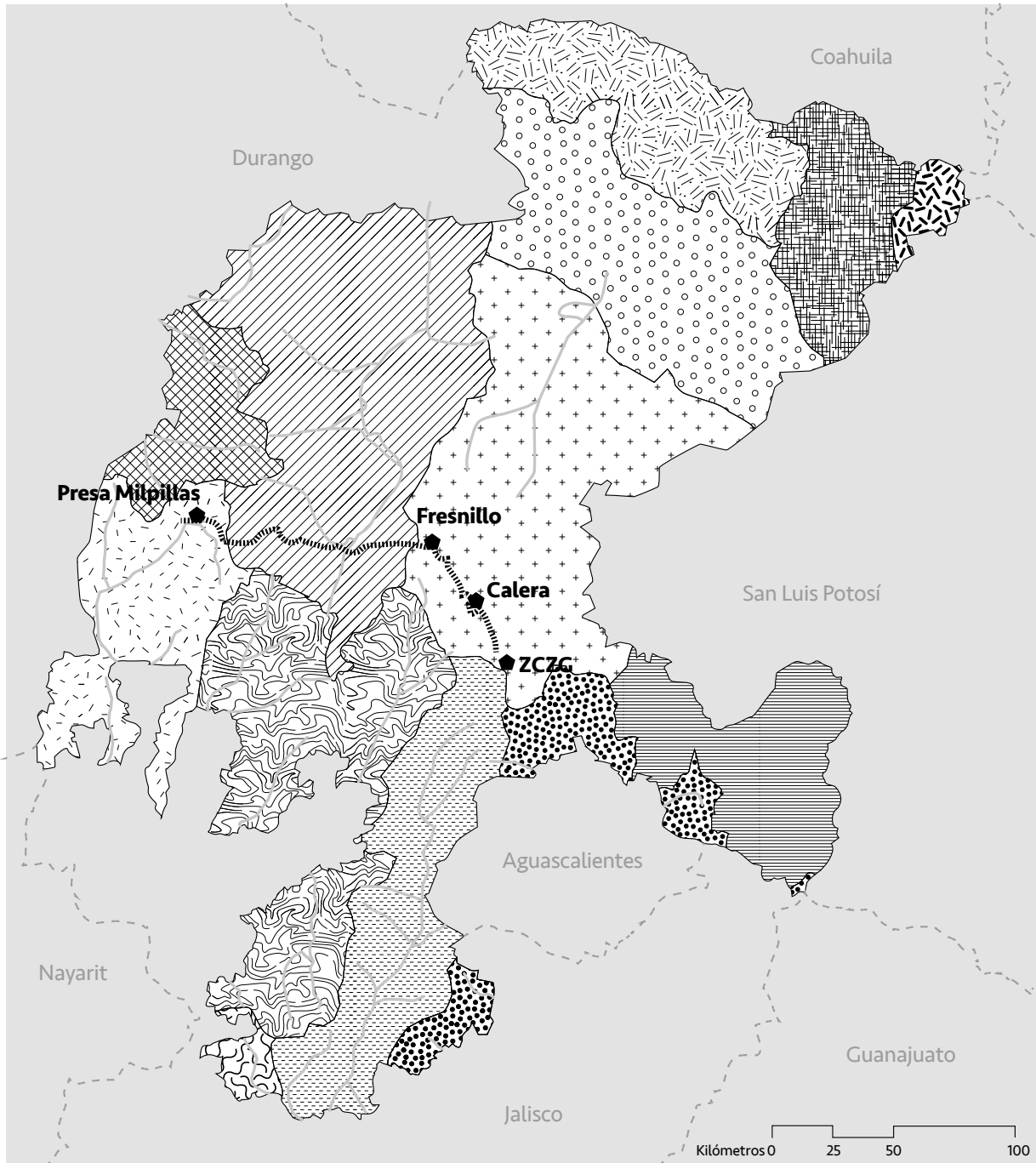
Si con ello se alivia en la misma magnitud la explotación de los acuíferos en la región centro de Zacatecas, estos todavía serán sobreexplotados a una tasa de 220.3 Mm³/año, o sea, más de cinco veces el volumen de agua que se espera de la presa Milpillás. Así, la presa Milpillás no permitirá que los acuíferos en la región centro del estado de Zacatecas se recuperen de las altas tasas de sobreexplotación.

Cabe destacar que las verdaderas tasas de extracción probablemente sean mucho mayores que los volúmenes definidos por las concesiones de Conagua, pues 89% de los usuarios con concesiones para extraer agua del subsuelo en la región centro del estado de Zacatecas no tienen medidores. Conagua no aplica las regulaciones al respecto y la práctica de tolerar la transmisión parcial de concesiones ha resultado en la multiplicación de pozos cuyas verdaderas tasas de extracción se desconocen.

El Estudio de factibilidad indica que la presa será construida sobre el río Milpillás, a 5 km de la cabecera municipal de Jiménez del Teul. Este sitio se ubica en el oeste del estado de Zacatecas, cerca de la frontera con Durango. En el Resolutivo de la Semarnat sobre el proyecto Milpillás (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/04223), fechado el 6 de julio de 2016, se señala que la altura de la cortina será de 88.85 m y la longitud de 100 m, y que la presa tendrá la capacidad de retener 60.58 Mm³ de agua.⁷ Por otra parte, el acueducto tendrá un diámetro de 42 pulgadas y una extensión de 166 km para transportar el agua de la presa a la región centro del estado, entre Fresnillo y la ZCZG, así como tres estaciones de bombeo y una planta de tratamiento. Esto implica un transvase de la cuenca de Bajo Santiago (específicamente

⁷ Semarnat, *op. cit.*, p. 7.

Figura 1. Ruta propuesta del acueducto



Cuencas

Bajo Santiago

- Río Bolaños
- Río Huaynamota

Alto Santiago

- Río Juchipila
- Río Verde Grande
- Río Santiago-Guadalajara

Alto Aguanaval

- Laguna de Mayrán y Viesca
- Río Aguanaval

El Salado

- Presa San José-Los Pilares
- Fresnillo Yesca
- Camacho-Gruñidora
- Sierra de Rodríguez
- Matehuala

Presidio San Pedro

- Río San Pedro

- Ríos
- Estados
- Localidades
- Acueducto propuesto

Zona: 13N
Proyección: UTM WGS84



Autores:

Cindy McCulligh
Darcy Tetreault
Jorge Alberto Cruz



Ejido de Atotonilco, comunidad que se encuentra junto al cauce del río Atenco que será afectado por la construcción de la presa Milpillas.

Fotografía:
Adolfo Valtierra

la subcuenca Milpillas, con un área de 912.5 km²) a las cuencas Alto Aguanaval y El Salado en la región centro del estado (véase la figura 1). Cabe señalar que la zona hidrológico-administrativa Bajo Santiago, donde se pretende construir la presa Milpillas, actualmente sufre un déficit de agua de 34 Mm³/año.⁸

Según el Estudio de factibilidad, la presa creará un embalse de 259.8 ha,⁹ el cual inundaría tierras utilizadas por los ejidatarios de Atotonilco y El Potrero, «evitando la inundación de las localidades con población humana e infraestructura, especialmente El Potrero y la Lagunita».¹⁰ En el Estudio de factibilidad se considera que estas comunidades se beneficiarán del proyecto debido a las oportunidades de pesca y turismo derivadas

⁸ Gobierno de Zacatecas (sin fecha), *Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas*, p. 50, en [http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/Marco%20Prog2015/UPLA/2\)%20Programa%20H%C3%ADdrico%20Estatal%20visi%V3%B3n%202030.pdf](http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2015/Marco%20Prog2015/UPLA/2)%20Programa%20H%C3%ADdrico%20Estatal%20visi%V3%B3n%202030.pdf)

⁹ En el Resolutivo de Semarnat sobre el proyecto Milpillas, se señala que el embalse será aún más grande: 284.4 ha (Semarnat, *op. cit.*, p. 10).

¹⁰ Gobierno de Zacatecas y Conagua, *op. cit.*, p. 260.

del embalse, y porque habrá más agua disponible en los ámbitos local y municipal para el consumo público urbano y las actividades agrícolas.

Al mismo tiempo, el Estudio reconoce que habrá impactos aguas abajo, dado que la presa «habrá de modificar las condiciones hidrológicas, con menor disponibilidad de agua, destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del cauce del río».¹¹ Más aún, reconoce que esta situación «puede producir molestias e inconformidades sociales de las poblaciones humanas de localidades ubicadas aguas abajo del embalse».¹² Sin embargo, el Estudio de factibilidad no analiza los impactos socioambientales derivados de tener menor disponibilidad de agua en los poblados y ecosistemas aguas abajo de la presa. A pocos kilómetros aguas abajo del sitio donde se pretende construir la presa Milpillas, se encuentran dos poblados humanos con actividades agrícolas en las riberas del río: Atotonilco, con una población de 530 habitantes; y

¹¹ *Ibid.*, p. 237.

¹² *Ibid.*, p. 284.



la cabecera municipal de Jiménez del Teul, con mil 662 habitantes.

El Resolutivo de Semarnat sobre la presa Milpillas presenta un método indirecto para estimar el escurrimiento medio mensual del río Milpillas¹³ a través del cual se calcula un caudal medio anual de 44.69 Mm³/año. En el documento se señala que la capacidad del acueducto será de mil 300 litros por segundo, equivalente a 41 Mm³/año.¹⁴ Esto quiere decir que, si se opera la infraestructura a su capacidad, la presa y el acueducto desviarán 91.7% del agua que fluye en el río Milpillas. Además, el Resolutivo señala que «el promovente deberá observar el caudal ecológico propuesto para el desarrollo del proyecto», en

¹³ «El promovente indicó que para la determinación de dicho caudal, procedió a recabar los datos de escurrimientos de la estación hidrométrica «el Platanito», la cual se ubica aguas abajo del sitio Proyecto, para posteriormente con base en la proporción de dicha área con respecto a la cuenca donde se situará la Presa Milpillas, que representa 13.08% de la cuenca donde se ubica la estación hidrométrica, determinar los escurrimientos medios mensuales particulares de la cuenca donde se localiza el proyecto» (Semarnat, *op. cit.*, p. 28).

¹⁴ *Ibid.*, p. 9.

este caso se propone 10% del volumen del caudal, equivalente a 4.469 Mm³/año.¹⁵

Sorprendentemente, el Estudio de factibilidad no especifica la cantidad de agua que será transferida de la presa Milpillas a la región centro del estado de Zacatecas; además, no queda claro qué parte del volumen del agua extraída de la presa estará destinada a llegar hasta la región centro del estado. La confusión se genera porque, en algunas partes del texto, se señala que el proyecto beneficiará a todos los municipios por los que cruza el acueducto (ocho en total: Jiménez del Teul, Sombrerete, Valparaíso, Fresnillo, Calera, General Enrique Estrada, Morelos y Zacatecas), al incrementar la disponibilidad de agua para el consumo público urbano, la agricultura y otras actividades productivas.¹⁶ Además, en varias partes del documento se menciona que el agua de la presa Milpillas será no sólo para el consumo público-urbano, sino también para proveer de más agua a las actividades agrícolas, industriales y de servicios.¹⁷

El mismo Estudio señala la necesidad de bombear el agua de la presa Milpillas desde una distancia vertical de casi 600 metros en su trayectoria a la capital del estado.¹⁸ Aunque no se calculan los costos energéticos asociados con este bombeo, el documento presenta un cálculo más abarcador del costo del agua de la presa: 8.62 pesos por cada metro cúbico.¹⁹ Si el acueducto mueve 41 Mm³/año de agua hacia la región centro del estado, entonces según dicho Estudio el costo anual promedio de operación de la presa y el acueducto será de 353.4 millones de pesos durante un periodo de 50 años.

El Estudio de factibilidad indica que el costo inicial de las obras contempladas en el proyecto será 3 mil 214 millones 825 mil 289 pesos, incluyendo la cortina, el acueducto y demás infraestructura.²⁰ Para mediados de 2018, el cálculo del costo inicial del proyecto casi se había duplicado hasta quedar en 6 mil millones de pesos: 1.8 mil millones de pesos para la cortina y 4.2 mil millones de pesos para el acueducto. Ahora la estimación del costo del acueducto es siete veces mayor que la planteada en el Estudio de factibilidad.

Se espera que el financiamiento para el proyecto venga de los gobiernos federal y estatal, así como del sector privado,²¹ incluso de Anheuser-Busch Inbev, según reportes de la prensa local.²² Los recursos para la cortina se obtendrán del Presupuesto de Egresos

¹⁵ Se indica que se seleccionó un porcentaje de 10 porque la cuenca donde se ubica el sitio del proyecto ya tiene «un estado de conservación deficiente» (*Ibid.*, p. 29).

¹⁶ *Ibid.*, pp. 48-49.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 48-50, 281, 285.

¹⁸ *Ibid.*, p. 24.

¹⁹ *Ibid.*, p. 18.

²⁰ *Ibid.*, p. 17.

²¹ *Ibid.*, p. 99.


²² Alfredo Valadez, «Cofinanciará Grupo Modelo presa y acueducto para planta en Zacatecas», *La Jornada Zacatecas*, 11 de diciembre de 2017, p. 28, en <https://www.jornada.com.mx/2017/12/11/estados/028n1est>

de la Federación y del Fondo Nacional de Infraestructura, y le toca a Conagua la responsabilidad de licitar el contrato a una empresa privada. La licitación del acueducto le corresponde al Gobierno del Estado de Zacatecas. El 49% del financiamiento para ello vendrá del Fondo Nacional de Infraestructura y el 51% de una asociación público-privada que tendrá una concesión de 25 años para recuperar su inversión y generar una ganancia.²³

Como se advierte en el Estudio de factibilidad, uno de los «beneficios» que se espera del proyecto es la posibilidad de obligar a los consumidores de agua en las zonas urbanas a cumplir con el pago por el servicio, generando así ingresos fiscales.²⁴ En los preparativos a la llegada del agua de la presa Milpillas, el actual director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), Benjamín de León Mojarro (antes delegado estatal de Conagua), ha contratado una firma privada llamada Agua y Soluciones para aplicar un cuestionario a los 122 mil «usuarios» de agua en la ZCZG con el objetivo de detectar tomas clandestinas y problemas con los medidores.²⁵ Con todo, la presa Milpillas promete aumentar el costo del agua para los habitantes del corredor Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, al mismo tiempo que promete generar ganancias extraordinarias para la empresa privada que obtendrá el contrato para construir y operar el acueducto, junto con el Gobierno de Zacatecas.

En la actualidad, el manejo del agua en Zacatecas se caracteriza por ineficiencias, pérdidas, falta de medidores y contabilidad, desigualdad, la no aplicación de leyes, la corrupción institucionalizada y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.²⁶ Existen alternativas,

en lugar de gastar 6 mil millones de pesos en una presa que sólo servirá para lucrar con el agua de consumo humano y también para proteger los intereses de las grandes empresas que actualmente sobreexplotan y contaminan los acuíferos. En un plano técnico, éstas giran en torno al objetivo de reducir la demanda, empleando por ejemplo las siguientes medidas: medir todas las extracciones y el consumo para poder aplicar tarifas escalonadas que incentivan el uso eficiente del líquido vital, impulsar la adopción de tecnologías y cultivos ahorradores de agua en el campo, tratar bien las aguas municipales residuales para su empleo en la agricultura e industria y reparar las fugas en el sistema municipal de agua. Ha habido iniciativas para aplicar algunas de estas medidas en Zacatecas, pero con relativamente poco respaldo presupuestal. Corresponden a lo que Wolff y Gleick llaman el «camino suave del agua», el cual busca reducir la demanda, hacer más eficiente el consumo y diversificar las fuentes de acuerdo con las circunstancias y posibilidades hidrológicas, económicas y culturales en el ámbito local y regional.²⁷

Como hemos señalado en otro texto,²⁸ el vigor con el cual se aplican las alternativas de este tipo y su éxito dependen en última instancia de la participación inclusiva y amplia de la ciudadanía en la gobernanza del agua. Además, se requiere esta participación para impulsar dinámicas democráticas capaces de efectuar una redistribución de los recursos hídricos subterráneos existentes, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 14 de la Ley de Aguas Nacionales, el cual prioriza el agua para el sector público urbano y para propósitos domésticos. Esto es congruente con la «nueva cultura del agua» que ha emergido de luchas sociales en torno al agua, la cual reconoce que el líquido vital tiene cuatro funciones que deben priorizarse en el siguiente orden: agua para la vida (es decir, para la satisfacción de necesidades humanas básicas), agua para el mantenimiento de los ecosistemas (lo que implica no sobreexplotar los acuíferos), agua para las actividades de interés social general (por ejemplo, para regar parques públicos o para la producción agroecológica de pequeña escala) y agua para el crecimiento económico y el desarrollo.²⁹ En este orden de ideas, las alternativas a la presa Milpillas implican la necesidad de subordinar los intereses del capital extractivista a los del bien común. 

²³ «Presa de Milpillas podría resolver crisis hídrica de Zacatecas por 30 años», *La Jornada Zacatecas*, 22 de agosto de 2018, en <http://ljz.mx/2018/08/22/presa-de-milpillas-podria-resolver-crisis-hidrica-de-zacatecas-por-30-anos/>

²⁴ Gobierno de Zacatecas y Conagua, *op. cit.*, p. 283.

²⁵ «Están inactivas 10% de las tomas de agua de la JIAPAZ: director», *La Jornada Zacatecas*, 7 de abril de 2018, en <http://ljz.mx/2018/04/07/estan-inactivas-10-de-las-tomas-de-agua-de-la-jiapaz-director/>

²⁶ Darcy Tetreault, «La toma del agua zacatecana», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, vol.

3, núm. 10, 2014, pp. 19-29. Darcy Tetreault y Cindy McCulligh, «Water grabbing via institutionalized corruption in Zacatecas, México», *Water Alternatives*, vol. 11, núm. 3, pp. 572-591.

²⁷ Gary Wolff y Peter Gleick, «The soft path for water», en Gleick, P (ed.), *The world's water 2002-2003: the Biennial report on freshwater resources*, Washington, DC, Island Press, 2002, pp. 1-32.

²⁸ Darcy Tetreault y Cindy McCulligh, «El camino suave del agua. Una alternativa para superar la crisis en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, vol. 1, núm. 4, 2013, pp. 33-37.

²⁹ David Barkin y Dan Klooster, «Estrategias de la gestión del agua urbana», en David Barkin (ed.), *La gestión del agua urbana en México. Retos, debates y bienestar*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2006, p. 4.

La desinformación oficial sobre la presa Milpillas: una estrategia para el despojo territorial

GRECIA EUGENIA **RODRÍGUEZ NAVARRO***

SERGIO ELÍAS **URIBE SIERRA****

DARCY **TETREAUULT*****

Los promotores de la presa Milpillas en el estado de Zacatecas, México, llevan a cabo una campaña de desinformación sobre los impactos socioambientales del proyecto, la cual forma parte de una estrategia más amplia para conseguir contratos de ocupación de tierras ejidales en el municipio de Jiménez del Teul, donde se planea construir la cortina. En este texto se analizan algunas de las contradicciones y omisiones del discurso oficial en torno de la presa Milpillas, así como la manera en que la desinformación ha sido empleada en un esfuerzo por despojar a los pobladores locales de tierras y agua.

El 22 de agosto de 2018, Luis Fernando Maldonado Moreno, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del estado de Zacatecas, aseguró a los pobladores de las localidades ubicadas cerca del sitio donde se planea construir la cortina y el embalse de la presa Milpillas que «no se va a acabar el río: seguirá el agua por el río como ahorita corre». Según su discurso, «el gasto que se requerirá para el agua potable es solamente de 15%, o sea, una octava parte del caudal que tiene el río».¹ Sobre este punto y muchos otros, los promotores gubernamentales del proyecto han llevado a cabo una campaña de desinformación sobre la presa Milpillas y sus impactos socioambientales.

Este texto tiene el objetivo de revelar las incongruencias y falacias del discurso oficial sobre la presa Milpillas, así como las acciones ilegales avaladas por agencias gubernamentales en su afán por conseguir un contrato de ocupación de las tierras ejidales afectadas por el embalse. Se basa en una investigación participativa que gira en torno a un proceso de acompañamiento y asesoría a los directamente afectados por los planes de construir una presa en el municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, y un acueducto de 166 km para transportar el agua de la presa a la zona urbana industrial ubicada entre Fresnillo y la Zona Conurbada Zacatecas-Guadalupe (ZCZG). Nuestro acercamiento incluye un análisis crítico de los documentos y discursos oficiales sobre la presa Milpillas.

*Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas (OCMZac)
**OCMZac y estudiante,
Doctorado en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana
***Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

¹ «Ejidatarios y autoridades realizan asamblea informativa sobre la presa de Milpillas», *La Jornada Zacatecas TV*, 22 de agosto de 2018, en <https://www.youtube.com/watch?v=MZp1r1E9nNg&t=458s>

De la falta de información a la difusión de información falsa

En la reunión «informativa» que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2018 en El Potrero, Jiménez del Teul, uno de los pobladores locales tomó la palabra: «Desde un principio deberían haber consultado a la población de Jiménez (...) Jamás nos consultaron. Siempre andaban como a escondidas». Esto es un reclamo generalizado entre los afectados por la presa. En dicha reunión, Maldonado Moreno reconoció que «ha faltado mucha comunicación, sobre todo con el pueblo», pero trató de justificarlo diciendo que «no podíamos venirles a explicar un proceso que todavía no estaba terminado».²

Pese a esta justificación, mientras el gobierno del estado de Zacatecas no enviaba a sus representantes a las comunidades afectadas para que explicaran los planes de construcción de la presa, en cambio sí contrató a una empresa privada para que negociara la compra de las tierras. En una comunicación personal enviada el 3 de octubre de 2017, un ejidatario de El Potrero comenta: «Los funcionarios públicos de gobierno no se han presentado aquí, quienes sí lo han hecho son integrantes de una empresa llamada Corporativo Krystal (...) son intermediarios del gobierno».³

Cabe señalar que durante el gobierno de Miguel Alonso Reyes (2010-2016), a finales del cual se anunciaron los planes para construir la presa Milpillás, el Corporativo Internacional Krystal S.A. de C.V. recibió más de 100 millones de pesos por trabajos que correspondían exclusivamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), bajo condiciones denunciadas por el periodista Horacio Zaldivar como de «lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias».⁴

Sea como fuere, cuando el 22 de septiembre de 2017 una comisión de ejidatarios y pequeños propietarios de los ejidos de Atotonilco y El

Potrero realizó un viaje a la capital del estado de Zacatecas, con la expectativa de reunirse con los secretarios responsables de impulsar el proyecto Milpillás, pero fueron los integrantes del corporativo Krystal quienes la recibieron; los representantes del gobierno estatal la dejaron «plantada».

En diciembre del mismo año, el entonces titular de SAMA, Víctor Armas Zagoya, dijo en una rueda de prensa que SAMA ya había conseguido 86% de las tierras afectadas por el proyecto Milpillás, y que «se obtuvieron antes de anunciar el proyecto, para que su precio no se disparara».⁵ De esta manera, la desinformación se presenta como una estrategia ahorradora de los recursos del Estado para engañar a los dueños de la tierra sobre el valor de su patrimonio. Con respecto al 14% restante, Armas Zagoya hizo referencia a algunos problemas técnico-legales de herencias o de definición de propiedad y «aseguró que existe diálogo y se tienen identificados al 100% de los propietarios de las hectáreas y sólo están a la espera de que se solucionen los asuntos legales de la propiedad para negociar con los dueños».⁶

Cuando la prensa zacatecana descubrió a principios de febrero de 2018 que un grupo de ejidatarios de El Potrero había registrado un amparo para frenar el proyecto Milpillás, aparecieron las primeras grietas en esta fachada discursiva que daba la impresión de que la compra de tierras afectadas por la presa iba avanzando de manera legal y no conflictiva. Armas Zagoya anunció que

² *Idem.*

³ *Idem.*

⁴ Manuel Medina Castro, «Periodista demanda penalmente a varios funcionarios de la SCT», *Página 24*, 6 de enero de 2006, en <https://pagina24zacatecas.com.mx/local/2016/01/06/periodista-demanda-penalmente-a-varios-funcionarios-de-la-sct/>

⁵ César Orta, «Sin adquirir, 14% de tierras para la presa Milpillás», *Imagen*, 5 de diciembre de 2017, en <https://www.imagenzac.com.mx/nota/134931-Sin-adquirir,-14-de-tierras-para-la-Presa>

⁶ *Idem.*



el amparo no detendría el proceso de licitación y los promotores del amparo fueron tachados como oportunistas, sólo interesados en el dinero.⁷

Bajo estas condiciones, con la complicidad de los miembros del Comisariado del ejido de El Potrero, se convocó a una asamblea del ejido el 29 de abril de 2018, con un punto destacado en la agenda: «Someter a consideración de la Asamblea la anuencia para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realice trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y/o cualesquier otra autoridad de carácter federal, estatal o municipal, para el cambio de uso de suelo respecto a aproximadamente 11 hectáreas de tierras ejidales». Según la lista de asistencia, estuvieron presentes 62 ejidatarios, con lo que apenas alcanzaba el quórum, ya que son 121 ejidatarios en total y requeriría la mitad más uno de los ejidatarios. Sin embargo, sólo 52 personas firmaron el acta y varios de ellos no son ejidatarios. En este caso, la Procuraduría Agraria, encargada de vigilar y asesorar a los campesinos, hizo lo contrario: estuvo presente en dicha reunión, pero no vigiló la legalidad ya que no permitió que se pudiera firmar el acta con la observación de «inconformidad» y, en su lugar, permitió el registro de un acta apócrifa para avalar un permiso de ocupación de tierras.

A pesar de estas irregularidades, durante la primera mitad de 2018 el gobierno de Zacatecas llevó a cabo el proceso de licitación para contratar a una empresa privada para realizar las obras preliminares del proyecto, tales como la construcción de caminos de acceso y campamentos, limpieza del área de construcción de la cortina y obras de desvío del río Milpillas, conocido localmente como río Atenco y también como río San Andrés. A

Figura 1. Mapa de zonas de afectación de la presa Milpillas en el ejido El Potrero, Jiménez del Teul, Zacatecas



Fuente: elaborado por el Colectivo GeoComunes para el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZAC).

finales de junio de 2018, se anunció que el ganador del contrato era una compañía zacatecana: Materiales y Construcciones Camino Real S.A. de C.V. Una semana más tarde, salieron las primeras noticias sobre irregularidades en el manejo de fondos para el proyecto de la presa Milpillas. Detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, éstas incluyen el doble pago por un concepto denominado «Gerencia y acompañamiento de la estructuración del proyecto Milpillas», por una cantidad de 386 mil 200 pesos, multiplicada por dos.⁸

Desde esas fechas, el gobierno del estado de Zacatecas ha buscado realizar convenios con los ejidos El Potrero y Atotonilco, ahora para la ocupación de los terrenos afectados por la construcción de la cortina, el embalse y el acueducto. A continuación se presenta una breve descripción de la dinámica política de una asamblea realizada en El Potrero con este propósito.⁹

⁷ Juan Castro, «Funcionarios, atrás del conflicto en Milpillas: Víctor Armas», *El Sol de Zacatecas*, 7 de febrero de 2018, en <https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/funcionarios-atras-del-conflicto-en-milpillas-victor-armas1171442.html?token=661504753>

⁸ Raquel Ollaquindia, «Detecta ASF irregularidades en proyecto de la presa Milpillas», *La Jornada Zacatecas*, 7 de julio de 2018, en <http://ljz.mx/2018/07/07/detecta-asf-irregularidades-en-proyecto-de-la-presa-milpillas/>

⁹ El relato presentado es una versión sintetizada de un comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas (OCMZac) redactado por los mismos autores de este artículo.

Bajo un ambiente pleno de intimidación, tal como lo expresaron algunos ejidatarios y pobladores de El Potrero, el 3 de agosto de 2018, a las 12:00 del día, se llevó a cabo la asamblea en segunda convocatoria para someter a consideración la autorización para celebrar un convenio con el gobierno del estado de Zacatecas de ocupación previa de 126 ha de terrenos de uso común del ejido para la construcción del camino de acceso, el acueducto y el área de inundación por la edificación de la presa Milpillas, así como el permiso para que una empresa contratista realice el trámite de cambio de uso de suelo debido al convenio con Semarnat.

Cuando arribamos al recinto donde se celebraba dicha asamblea, nos percatamos de la presencia de autoridades de diferentes dependencias estatales y federales, entre ellas la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Durante la asamblea, las autoridades negaron la posibilidad de afectaciones en caso de aprobarse el pretendido convenio; tampoco mencionaron el riesgo económico y ambiental que implica, mucho menos el despojo. En general, parecía como si esto fuese una carrera de tiempo, un mandato a cumplir de forma rápida ordenado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Al principio, la mayoría de los ejidatarios estaba a favor de aceptar el permiso y firmar el convenio, pero había un grupo importante que se negaba y alentaba a los compañeros para que realmente pensaran la situación, pues el dinero ofrecido no corresponde al valor real de las tierras, ni en términos económicos y mucho menos en lo que representan simbólicamente. Se le cuestionó al presidente del Comisariado la prisa por acceder al arrendamiento de las tierras, también se mencionó que el martes 31 de julio dos ejidatarios, acompañados por integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), acudieron al Registro Agrario Nacional (RAN) en la capital del estado y se percataron de la existencia de un acta que se había inscrito, supuestamente avalada con firmas, para la autorización del usufructo del territorio, siendo evidentemente un documento ficticio, sin validez oficial.

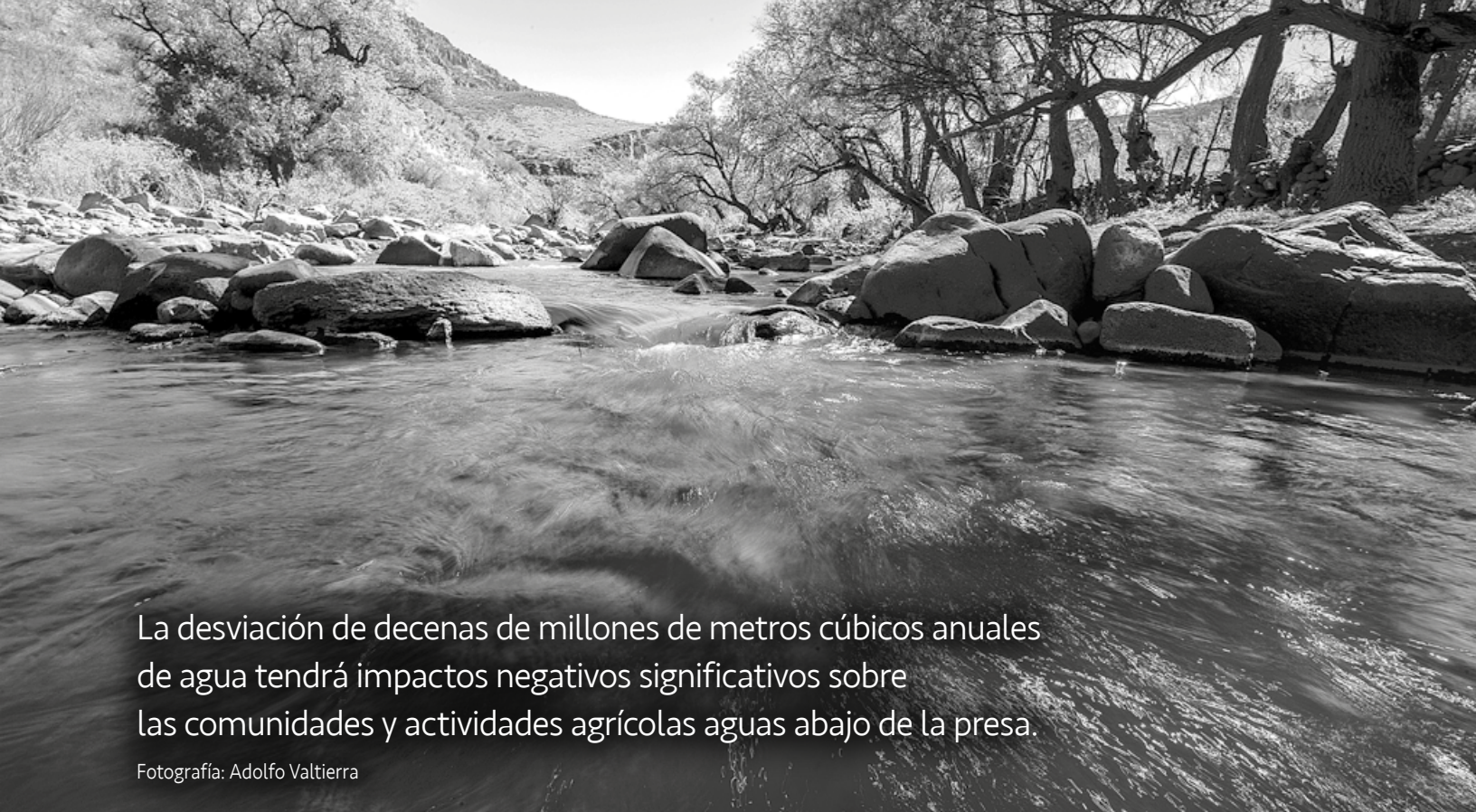
Poco a poco, la presión ejercida a los ejidatarios mediante las irregularidades, el hostigamiento y las amenazas y la versión de los funcionarios que aseguraban que si no firmaban el convenio de cualquier manera la presa se iba a hacer, generaron dudas en la mayoría de los participantes. Con el ánimo encendido entre los ejidatarios se propuso la anulación de la asamblea al considerar que no había un sustento fuerte para tomar una decisión en ese momento, y que sentían que era más una imposición que una petición, además de evidenciarse las violaciones a los

derechos agrarios antes mencionadas. Al final, mediante votación se anuló la asamblea, con 18 votos a favor y 10 en contra.

La presión ejercida por SAMA y otras agencias del gobierno estatal para conseguir un contrato de ocupación de tierras ejidales ha sido constante. Los ejidatarios de El Potrero que se oponen reportan que «ya se vendieron los de la mesa directiva ejidal».¹⁰ Además, mientras los intermediarios del gobierno estatal ofrecen prebendas de todo tipo a la población local, el mismo gobierno ha organizado «asambleas informativas», como la que tuvo lugar en El Potrero el 22 de agosto de 2018, para difundir en el nivel local la (des)información oficial sobre el proyecto Milpillas.

Cabe señalar que en estas reuniones ha participado el titular de Conagua en Zacatecas, Héctor González Curiel, quien anteriormente era el titular de la misma dependencia federal en el estado de Nayarit, donde ayudó a gestionar la construcción de dos presas controvertidas y conflictivas: Aguamilpa y El Cajón. Hubo protestas públicas y una petición que circuló en contra de su nombramiento como titular de Conagua en Nayarit, pues, había sido acusado de malversar fondos públicos municipales de Tepic cuando era alcalde de esta ciudad entre 2012 y 2014. En su visita a El Potrero, González Curiel tomó la palabra para pintar un escenario de un río aguas abajo mejor en términos ecológicos, porque «todo el año va a estar soltando agua (...) para que la flora, la fauna, todo lo que está aguas abajo, eso se siga manteniendo». Como esta cita indica, los promotores del proyecto abundan sobre sus supuestas bondades, mientras omiten mencionar las potenciales consecuencias que este tipo de emprendimientos genera, tanto para las familias como para el territorio y los bienes naturales que los rodean. A continuación, presentamos de manera breve algunos de los mensajes falsos y omisiones más importantes del discurso oficial.

¹⁰ Comunicación personal por escrito, 3 de octubre de 2017.



La desviación de decenas de millones de metros cúbicos anuales de agua tendrá impactos negativos significativos sobre las comunidades y actividades agrícolas aguas abajo de la presa.

Fotografía: Adolfo Valtierra

Tres mitos oficiales sobre la presa Milpillas

Mito 1. La presa no afectará de manera negativa a los poblados y ecosistemas aguas abajo; sólo desviará 15% del caudal del río

El Estudio de factibilidad de la presa Milpillas reconoce que aguas abajo «el cambio de la dinámica hidrológica (...) producirá la disminución de agua para riego y, ocasionalmente, podrá comprometer el volumen disponible para el consumo humano».¹¹ Además, en el resolutivo de Semarnat sobre el proyecto Milpillas, se presentan estimaciones del escurrimiento medio mensual del río Milpillas. Sumándolas, se puede ver que —según los mismos promotores del proyecto— el caudal medio anual del río es sólo de 44.7 millones de metros cúbicos anuales (Mm³/año). Dejando a un lado por el momento la probabilidad de que este volumen

¹¹ Gobierno del estado de Zacatecas y Comisión Nacional del Agua, *Estudio de factibilidad de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo*, 2015, p. 284, en <http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html>. Clave del proyecto: 32ZA2015HD020.

se reduzca conforme avanza el cambio climático, se puede calcular que, si se desvía de la presa 42.3 Mm³/año de agua para uso público urbano (el volumen señalado por Maldonado Moreno), entonces el gasto para la región centro del estado será 95% del caudal del río.

Mito 2. La presa Milpillas es una solución viable al problema de escasez de agua entre Fresnillo y la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe

En el Resolutivo de Semarnat sobre el proyecto Milpillas consta que «el proyecto generará un significativo alivio a los acuíferos de la región del corredor Zacatecas-Fresnillo».¹² Sin embargo, como ha señalado Darcy Tetreault en un trabajo anterior,

aunque la obra [Milpillas] eliminara por completo la necesidad de extraer agua subterránea para el consumo público urbano e industrial, los acuíferos de la región [centro de Zacatecas] seguirían siendo sobreexplotados, debido a que las actividades agropecuarias por sí solas consumen más agua que la disponible, casi dos veces más.¹³

¹² Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/04223 (Resolutivo sobre el proyecto Milpillas), 2016, p. 54, en <http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html>

¹³ Darcy Tetreault, «La presa Milpillas y el negocio del agua en la región centro de Zacatecas», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, vol. 5, núm. 15, 2016, p. 58, en <http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/observatorio/ob15/5.pdf>

De acuerdo con los datos que el mismo investigador presenta en este número de *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, los cinco acuíferos que actualmente abastecen a la población urbana y a las actividades agrícolas e industriales en la región centro del estado están sobreexplotados por una tasa de 261.3 Mm³/año; la presa promete transferir a esta región cuando mucho 41 Mm³/año de agua, dejando un déficit de 220.3 Mm³/año.

Mito 3. El agua de la presa Milpillas es sólo para el sector público urbano

En varias partes del Estudio de factibilidad se señala que el agua de la presa Milpillas será no sólo para el consumo doméstico sino también para dinamizar las industrias, los servicios y las actividades agrícolas. Asimismo, el Resolutivo de Semarnat sobre el proyecto Milpillas señala que «el proyecto logrará brindar una gran estabilidad a las actividades económicas relacionadas con los ámbitos industrial, urbano y de servicios».¹⁴ Aunque el agua de la presa fuera sólo para el sector público urbano —como han señalado los promotores del proyecto desde mediados de 2018—, hay que destacar dos implicaciones. Primero, hay una diferencia entre «uso público urbano» y «uso doméstico». El anterior incluye el uso de agua para satisfacer necesidades humanas básicas y abarca además el agua que se distribuye al sector privado a través de las redes municipales. Segundo, si se usa el agua de la presa Milpillas exclusivamente para abastecer el sector público urbano, esto implica que el agua subterránea —la cual es mucho más fácil de acceder y de óptima calidad en el acuífero Calera para la producción de bebidas— se entrega por completo al sector privado, a Anheuser Busch Inbev, Coca-Cola y Pepsi-Cola; y también a los productores agrícolas que utilizan el agua como un insumo en sus procesos de producción, con bajos niveles de tecnificación en los sistemas de irrigación, lo que se traduce en pérdidas de eficiencia entre 40 y 60%.¹⁵

¿Inundación de infraestructura urbana?

Los promotores de la presa Milpillas han sido enfáticos en que el embalse no inundará la infraestructura urbana. Sin embargo, las preocupaciones de los pobladores locales al respecto no son sin fundamento. En primer lugar hay antecedentes. No olvidamos que en un principio la presa El Zapotillo no pretendía inundar el pueblo Temacapulín en Los Altos de Jalisco. En segundo lugar, en el estudio de factibilidad se menciona la existencia de «crecimiento

urbano irregular, en la cercanía del embalse», sugiriendo la posibilidad de tener que inundarlo. Y en tercer lugar, porque los voceros del gobierno estatal han manejado diferentes números para dar dimensión a la cortina y al embalse. En el estudio de factibilidad se omite señalar la altura de la cortina y se asegura que un embalse de 259.8 ha no inundará la infraestructura urbana. Por su parte, el Resolutivo de Semarnat señala que la altura de la cortina será de 88.85 m y que el embalse tendrá un área más grande, de 284.4 ha. Maldonado Moreno señala que la cortina tendrá una altura de 87 m.

Otros impactos y riesgos socioambientales

Otros daños se asocian a la modificación de los regímenes del caudal de ríos, con la consecuente pérdida de especies ribereñas endémicas. Relacionado con lo anterior, la modificación del régimen fluvial impactará en la reducción de aportes de nutrientes para laderas, valles y corrientes de agua de ríos y arroyos. Además, queda pendiente analizar los impactos sobre la flora y fauna aguas abajo de la presa, algo no considerado en el Estudio de factibilidad del gobierno de Zacatecas y de Conagua, ni en el Resolutivo de Semarnat sobre la presa Milpillas. No debemos olvidar tampoco el riesgo de que la cortina colapse o que sucedan accidentes en el manejo de flujos de agua o por factores naturales que ocasionen la posible inundación de pueblos aledaños a la presa. Al mismo tiempo es importante no perder de vista los impactos del acueducto. Como puede observarse en la figura 2, se trata de un megaproyecto que afectará a 19 ejidos: Atotonilco y El Potrero en el municipio Jiménez del Teul; Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México en Sombrerete; La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia en Fresnillo; Hacienda Nueva en Morelos; y La Pimienta en Zacatecas.

¹⁴ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, *op. cit.*, p. 53.

¹⁵ Francisco Mojarro Dávila, Benjamín de León Mojarro, Hugo Enrique Júnez Ferreira y Carlos Francisco Bautista Capetillo, *Agua subterránea en Zacatecas*, México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2013, p. 49.

Conclusiones

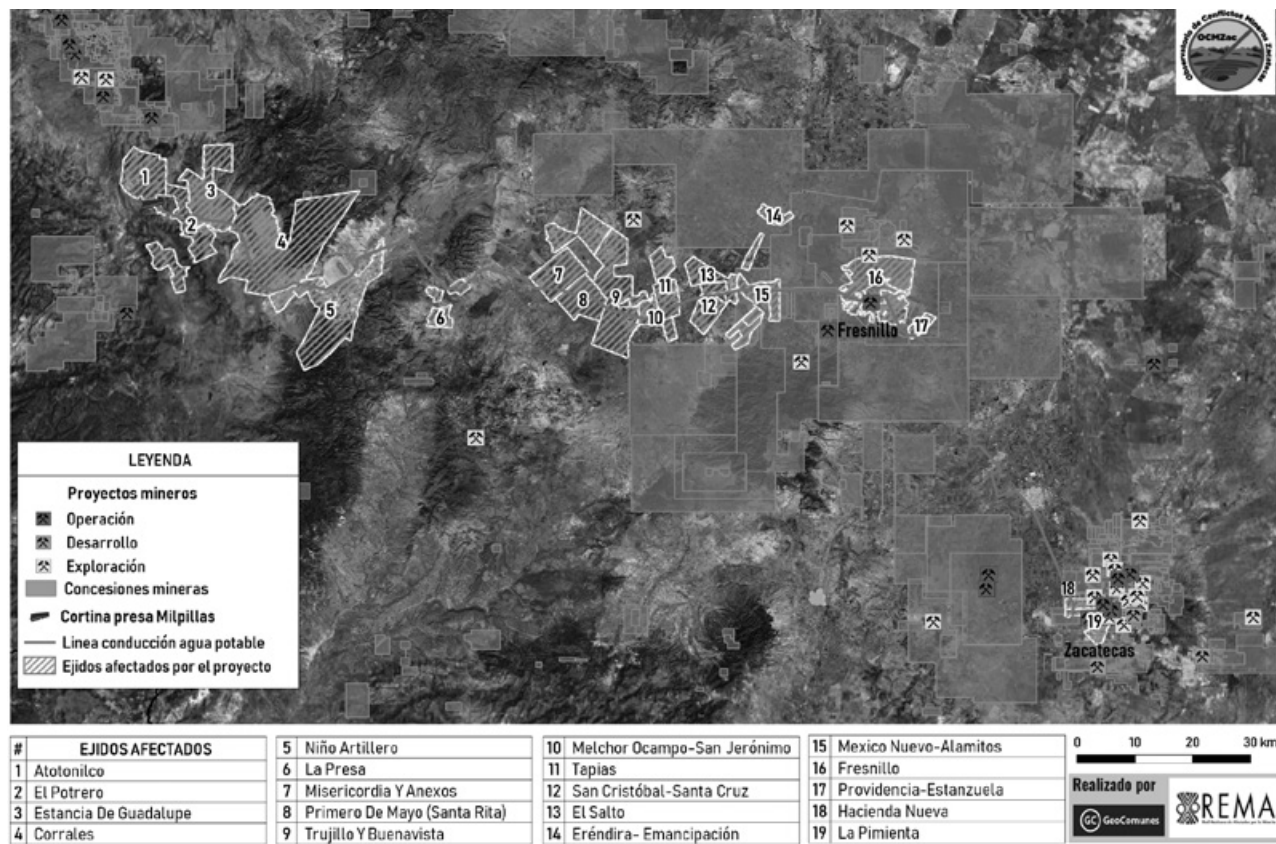
Los discursos de los funcionarios del gobierno del estado de Zacatecas y de Conagua, difundidos recientemente en el municipio de Jiménez del Teul, comunican información que contradice lo dicho en el Estudio de factibilidad y el Resolutivo sobre el proyecto Milpillas, además de omitir o subestimar los impactos y riesgos socioambientales asociados con el proyecto. Como hemos visto, esta «desinformación» ha sido empleada como parte de una estrategia más amplia para conseguir contratos de ocupación de tierras ejidales afectadas por la presa. Otra parte de la misma estrategia fue el registro de un acta de asamblea ejidal apócrifa.

Según los cálculos incluidos en el resolutivo de Semarnat, la presa está diseñada para desviar no 15%, sino hasta 95% del caudal medio anual del río Milpillas. Aunque la presa tuviera que operar por

debajo de su capacidad para respetar un «gasto ecológico» mínimo, la desviación de decenas de millones de metros cúbicos anuales de agua tendrá impactos negativos significativos sobre las comunidades y actividades agrícolas aguas abajo de la presa, empezando con Atotonilco y la cabecera de Jiménez del Teul. Estos impactos no han sido analizados por los promotores del proyecto.

El discurso oficial sostiene que el agua de la presa Milpillas permitirá la recuperación de los acuíferos en la región centro del estado de Zacatecas. Esto es falso. Por otra parte, el discurso oficial difundido verbalmente a partir de mediados de 2018 en el municipio de Jiménez del Teul y a través de la prensa local en la capital del estado es que el agua es sólo para el uso público urbano. El Estudio de factibilidad dice lo contrario. En todo caso, lo que no dicen los promotores del proyecto Milpillas es que éste pretende servir para generar ganancias privadas en la provisión de agua para el consumo público urbano entre Fresnillo y la ZCZG, y al mismo tiempo pretende permitir que los grandes agricultores y las empresas transnacionales con actividades en la región centro del estado sigan con acceso ilimitado a las aguas subterráneas. 🐾

Figura 2. Afectaciones a la propiedad de la línea de conducción de agua potable corredor Fresnillo-Zacatecas, presa Milpillas



Fuente: elaborado por el Colectivo GeoComunes para el OCMZAC.

Problemática de la calidad del agua que abastece a la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe

FRANCISCO AGUILAR ORTEGA*

Actualmente se extrae agua del acuífero Guadalupe Bañuelos para abastecer la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, y también los pueblos ubicados al sur de ésta, a pesar de que contiene concentraciones de flúor, arsénico y otros metales pesados por encima de los valores máximos permitidos por la ley. El mismo acuífero se explota para fines agrícolas. Con todo, se encuentra sobreexplotado y conforme bajan los niveles piezométricos se empeora la calidad del agua.

Introducción

El funcionamiento de los acuíferos fue motivo de innumerables teorías que datan desde los griegos, quienes creían, por ejemplo, que los manantiales que daban lugar al nacimiento de los escurrimientos superficiales tenían conexión con ríos o lagos subterráneos alimentados por los océanos. Los antiguos griegos, sin embargo, no podían explicar la pérdida de sales de agua marina, ni como podían las aguas de dichos mares subir hasta la altura de los manantiales en las montañas. Otras teorías involucraban a las fuerzas del viento que presionaban al agua a introducirse en las rocas, para emerger después como manantiales. Entre las teorías romanas destaca la de Marco Vitruvio, quien explicaba que la nieve derretida de las montañas se colaba hacia el subsuelo y aparecía a menores elevaciones en forma de manantiales.¹

*Docente investigador, Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Zacatecas

¹ Stanley Nelson Davis y Roger J.M. DeWiest, *Hydrogeology*, Nueva York, John Wiley & Sons, 1966.

Es hasta el Renacimiento cuando Leonardo da Vinci describe esta teoría con toda propiedad. El agua se ve como la expansión y el humor de todos los cuerpos vitales. Sin ella, nada conserva su forma. Por su introducción, une y engruesa los cuerpos. Adquiere cualquier olor, color y sabor, pero en sí no tiene ninguno.² El agua es a veces mañosa, otras fuerte; a veces ácida, amarga, dulce, espesa o delgada; a veces se la ve trayendo salud, otras avería, pestilencia o veneno. Así podría decirse que adquiere otras tantas naturalezas según sean los sitios por los cuales pasa; como que el espejo cambia con el color de sus objetos, de tal manera que varía con la naturaleza del lugar por el cual transita saludable, nociva, laxante, astringente, sulfurosa, salina, sanguínea, deprimida, enfurecida, roja, verde, negra, azul, untuosa, espesa, delgada.³

² Levi Enzo, *El agua según la ciencia*, México, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2001.

³ Irma Richter, *Leonardo Da Vinci Notebooks*, Nueva York, Oxford University Press, 2008.

Actualmente, la calidad del agua presente en los acuíferos varía debido a las composiciones de las formaciones rocosas en zonas geográficas con diferentes tipos de clima, también a los recorridos subterráneos del agua y a la precipitación imperante en el entorno. El agua subterránea, cuando no es afectada por impactos antropogénicos, es usualmente considerada de excelente calidad desde sus características físicas, químicas y biológicas. Sin embargo, los acuíferos pueden contener concentraciones naturales de metales pesados, como hierro, manganeso, arsénico, boro, flúor, plomo, entre otros, que la hacen inaceptable para ser agua potable. La calidad en los acuíferos resulta del filtrado natural que sufre el agua de lluvia y de los ríos mientras se percola a través del suelo hacia los mantos acuíferos, donde queda protegida, en mayor o menor medida de la contaminación antropogénica, en contraposición a la que se ve expuesta el agua superficial.

El aprovechamiento más eficaz de un acuífero, para utilizar al máximo sus recursos y no incurrir en un déficit (sobreexplotación), es el de extraer anualmente una cantidad de agua igual o inferior a los volúmenes de agua que externamente ingresan (generalmente es la precipitación). El aprovechamiento intensivo o sobreexplotación consiste en extraer más agua de la que entra en un sistema, lo que supone un consumo de las reservas que se refleja en el descenso del nivel del agua (freático o piezométrico). En general, cuando un acuífero es sometido a un aprovechamiento intensivo, se tienen los siguientes efectos: el primero, el descenso del nivel freático y profundización de los niveles de bombeo, provocando el cambio de los patrones originales de flujo, así como el incremento de los consumos de energía eléctrica en los equipos de bombeo; el segundo, la reducción del caudal de manantiales y la desaparición de algunos; el tercero, hundimientos y agrietamientos del suelo con daños en las edificaciones y viviendas locales. Además, la calidad natural del agua subterránea puede ser alterada como consecuencia de este aprovechamiento intensivo, de tal manera que conforme se bajan los niveles piezométricos, aumentan las concentraciones de metales pesados. La calidad del agua subterránea puede sufrir alteraciones también por diversas formas de contaminación antropogénica; por ejemplo, las lixiviaciones de los basureros y las descargas de aguas residuales no tratadas de industrias, centros de población o incluso de zonas de cultivo.

Si consideramos al acuífero como un sistema regulador de entradas y salidas de agua, una disminución de las re-

servas hará que disminuyan las garantías de suministro ante situaciones extraordinarias, como una sequía prolongada, y puede favorecer además la intrusión de aguas de calidad no deseable. Las consecuencias más directas de la sobreexplotación son: a) el agotamiento de las reservas de aguas fósiles, b) el descenso no estabilizado de los niveles de bombeo, c) la desaparición y reducción de los caudales de manantiales, y d) el deterioro de la calidad química de las aguas subterráneas. Esta última consecuencia se debe a la disolución en menor grado de las aguas fósiles almacenadas en el acuífero con las nuevas de la recarga anual, lo que favorece la concentración de sales. Otro factor que puede contribuir al deterioro de la calidad de las aguas subterráneas tiene que ver con la recarga por aguas contaminadas de los ríos a los acuíferos, ya que los ríos pasan de ser efluentes a ser influentes. Asimismo, los acuíferos pueden ser enturbiados por las aguas contaminadas por lixiviación de los desechos industriales y municipales situados sobre el acuífero.⁴

El acuífero Guadalupe Bañuelos

El acuífero Guadalupe Bañuelos se localiza en el estado de Zacatecas a 19 km al sur de la ciudad capital de Zacatecas, ubicado entre las coordenadas geográficas 22° 30' a 22° 50' de latitud norte y 102° 25' a 102° 35' de longitud oeste, abarcando unos 371 km² de superficie que traslapa con porciones de los municipios de Guadalupe, Genaro Codina y Ojocaliente (véase figura 1). Pertenece al Distrito Agropecuario de Temporal número 1, controlado por la unidad número 3, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. En la mayor parte de la superficie de estudio se practica la agricultura de secano, además de unas 100 ha bajo riego en las zonas agrícolas de La Zacatecana y Bañuelos.⁵

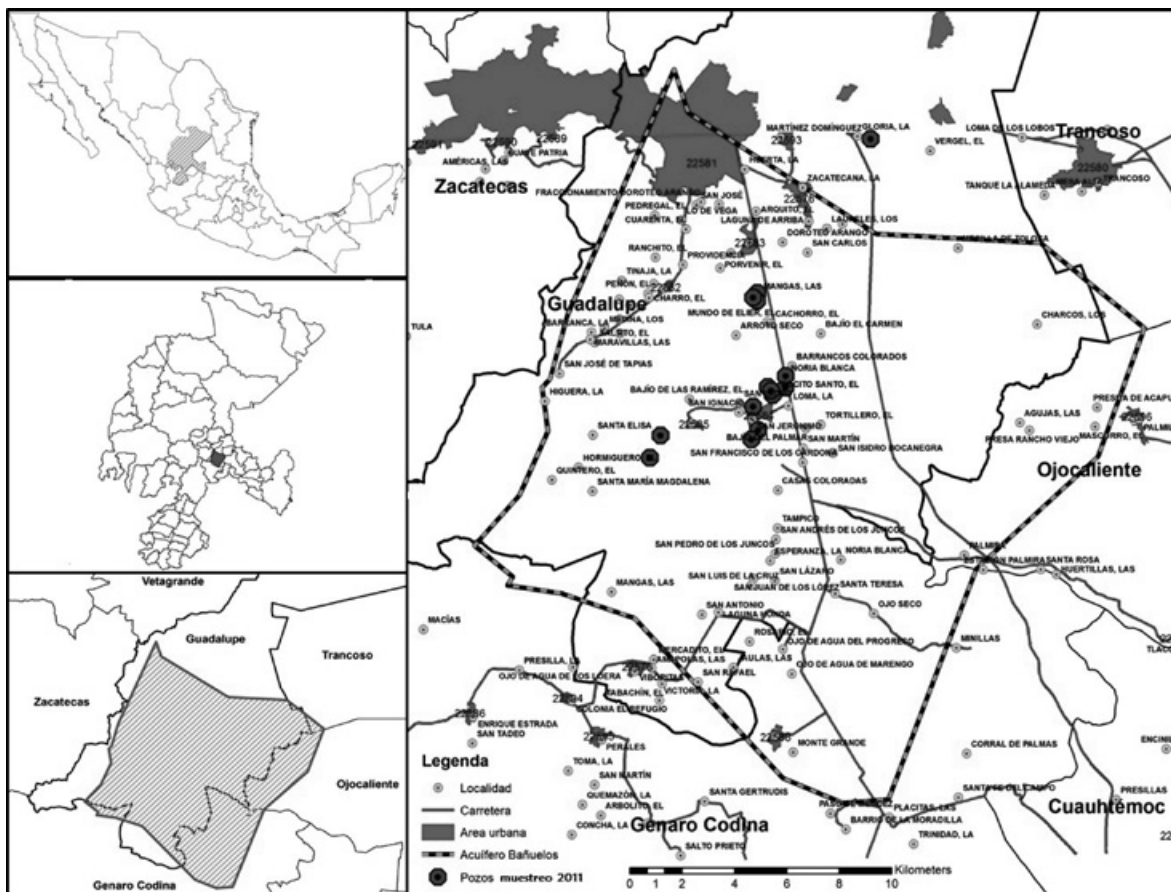
El clima imperante es semiseco, templado y con lluvias en verano. La precipitación pluvial media anual es del orden de 450 mm; la temperatura media anual es de 16 °C y la evaporación potencial media anual es 2200 mm,⁶ lo que implica la existencia de pocos arroyos, que son intermitentes y de bajo caudal, por lo que el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento de los centros de población y de las actividades económicas agrícolas e industriales.

⁴ Francisco Aguilar Ortega, *Evolución y estado actual del aprovechamiento del agua subterránea en el valle de Río Verde, San Luis Potosí* (tesis doctoral), Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2010.

⁵ Comisión Nacional del Agua (Conagua), «Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea Acuífero (3227) Guadalupe Bañuelos Estado de Zacatecas», *Diario Oficial de la Federación*, 28 de agosto de 2009.

⁶ *Idem*.

Figura 1. Acuífero Guadalupe-Bañuelos, Zacatecas, México. Ubicación, límites y pozos



Fuente: Adaptado de Conagua (2009).

Existen básicamente tres tipos de usuarios que extraen agua del acuífero Guadalupe Bañuelos, dos de uso público urbano y rural y el otro agrícola. El primero corresponde a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), la cual extrae el agua subterránea mediante pozos profundos para el abastecimiento de la Zona Conurbana Zacatecas Guadalupe; el segundo corresponde a Juntas o Comités de Agua, en las comunidades de Bañuelos, San Ramón, Perales, Viboritas, Las Mangas, Las Cumbres, entre otras, para el abastecimiento de sus respectivas comunidades; el tercero se refiere a los agricultores de escala pequeña, cuyos sistemas de riego exhiben baja o nula tecnificación y, por lo tanto, de escasa producción y rentabilidad. Con todo, hay concesiones para extraer anualmente 12.4 millones de metros cúbicos de agua ($\text{Mm}^3/\text{año}$) del acuífero Guadalupe Bañuelos,

aunque su recarga natural es de sólo $10.7 \text{ Mm}^3/\text{año}$, según la Comisión Nacional de Agua (Conagua), lo que se traduce en un déficit de $2 \text{ Mm}^3/\text{año}$.⁷ 55.6% del agua extraída del acuífero Guadalupe Bañuelos es para el sector público urbano, 42.6% se canaliza al sector agrícola, 1.8% se registra en la categoría de «otro», que incluye los sectores doméstico, pecuario y agroindustrial.⁸

El aprovechamiento del acuífero Guadalupe Bañuelos

Desde 1546, la actual Zona Conurbana Zacatecas Guadalupe se encontraba en un área eminentemente minera denominada Distrito Minero Zacatecas. Originalmente los minerales extraídos, plata nativa y minerales oxidados de alta ley fueron tratados directamente por un proceso de fusión, limitando la productividad de las minas. Posteriormente se introdujo el proceso de amalgamación, lo que permitió el beneficio de minerales de plata con mayores contenidos y otra gran variedad de minerales argentíferos. Dado

⁷ *Idem.*

⁸ Conagua, *Registro de usuarios*, Departamento de aguas subterráneas de la dirección local Zacatecas, Guadalupe, 2012.

lo rudimentario de estos procesos, los residuos (lamas y gangas) arrastraron cantidades de plata, mercurio y pequeñas porciones de oro libre y otros metales como plomo, zinc y cobre.⁹

El Distrito Minero Zacatecas contaba con tres principales grupos de vetas: Vetagrande, San Bernabé y La Cantera. Además, se contaban 48 haciendas de beneficio, situadas en la serranía de Zacatecas. Durante 360 años estas haciendas tiraron todos sus desechos al medio ambiente, de tal manera que fueron arrastrados hacia los valles, formando depósitos muy importantes. El arroyo La Plata era el principal conducto de descarga del Distrito Zacatecas, ya que cruzaba la mayoría de las haciendas en otro tiempo instaladas hasta llegar a la presa El Pedernalillo, también conocida como La Zacatecana, que fue la trampa donde se concentraba la mayoría de los residuos producto de la actividad minera. Para la presa El Pedernalillo estos desechos se estiman en un aproximado de 5 millones de toneladas de materia mineralizada con cloruro de plata, mercurio y otros minerales. Por lo tanto, siempre ha existido la posibilidad de contaminación del acuífero Guadalupe Bañuelos por metales pesados.¹⁰

En 1928 existían en la zona del acuífero Guadalupe Bañuelos numerosos pozos a cielo abierto alimentados por abundantes aguas freáticas. Destacaba el pozo número 22, el cual fue construido para alimentar a las máquinas de vapor del Ferrocarril Central Mexicano y para el uso doméstico de la estación. Este pozo construido a principios de siglo alcanzó originalmente 200 m de profundidad, con la particularidad de que el nivel del agua freática se fue abatiendo a medida que se profundizaba la perforación, debido a esto se procedió a construir cuatro galerías filtrantes en forma radial de 25 m de longitud cada una, con el fin de obtener volúmenes de agua adicionales a los que la noria por sí misma era capaz de aportar funcionando al mismo tiempo como cisterna o aljibe que recibía las aportaciones de las galerías. Dicho pozo se equipó para abastecer a la ciudad de Guadalupe y actualmente se encuentra en funcionamiento.¹¹

Alrededor de 1950 se inicia el aprovechamiento masivo de los acuíferos y se incrementa la extracción princi-

palmente mediante pozos profundos de gran caudal.¹² En el acuífero Guadalupe Bañuelos los pozos a cielo abierto eran excavados a pico y pala hasta profundidades máximas de 40 m, suministraban a pequeños regadíos y viviendas, mientras los pozos perforados con profundidades de hasta 200 m suministraban a poblaciones rurales y a la ciudad de Guadalupe. De acuerdo a la respectiva norma de salud en aquel entonces, el agua se consideraba como potable.¹³

Hacia 1978 continúa el incremento en el número de pozos profundos de gran caudal y disminuye el número de pozos a cielo abierto, mientras que las autoridades en materia de agua caracterizan los equipos de bombeo, las profundidades de extracción, la superficie bajo riego y las poblaciones abastecidas, además de llevar a cabo estudios sobre la calidad del agua. Los resultados fueron 22 pozos profundos, 35 pozos a cielo abierto (norias) y dos manantiales. Del total de los pozos, 19 pozos a cielo abierto correspondían al riego, seis pozos profundos al abastecimiento de agua potable y 20 pozos a cielo abierto para uso particular (doméstico, riego y pecuario).¹⁴ Además, se registran los primeros indicios de «contaminación natural» en un pozo por flúor (F^-), con un valor de 1.74 mg/L, valor que sobrepasa a la norma de calidad para el consumo humano que establece un nivel máximo de 1.5 mg/L.¹⁵

En 1980, los pozos a cielo abierto disminuyen drásticamente su mermado caudal. Predominan los pozos profundos y se reafirma la presencia de contaminación por flúor. Además, algunos pozos presentan valores por encima de la norma de salud vigente en los parámetros de sólidos disueltos totales (STD), calcio (Ca^+) y magnesio (Mg^+), de tal modo que se ratifica la existencia de pozos con aguas impropias para el consumo humano.¹⁶

En 2011, se realiza la caracterización de las aguas contenidas en pozos a cielo abierto y profundos por maestros y alumnos de servicio social del Laboratorio de Química de Superficies y Análisis Industriales de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). En este estudio las muestras de agua mostraron valores en los parámetros de hierro (Fe^+), plomo (Pb^+), cadmio (Cd^+) y mercurio (Hg^+) fuera de los límites permisibles

⁹Frédérique Langue, «Trabajadores y formas de trabajo en las minas zacatecanas del siglo XVIII», *Historia Mexicana*, vol. 40, núm. 3, 1991, pp. 463-506; Peter John Bakewell, *Minería y sociedad en el México colonial Zacatecas (1546-1700)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

¹⁰ *Idem*.

¹¹ Conagua, «Actualización de la disponibilidad media anual...»; Irma Richter, *op. cit.*

¹² Francisco Aguilar Ortega, *op. cit.*

¹³ Proyesco SA, *Estudio geohidrológico para determinar fuentes de abastecimiento en la zona de Perales, Bañuelos, Zacatecas*, 1980.

¹⁴ Francisco Aguilar Ortega, *op. cit.*

¹⁵ Proyesco SA, *op. cit.*

¹⁶ Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), *Estudio geohidrológico de la zona Guadalupe, Bañuelos, Zacatecas*, SARH, 1980.



de la norma de salud vigente, principalmente en las comunidades de Casas Coloradas, Las Mangas y San Jerónimo (véase figura 1).¹⁷

Hacia 2012, en el acuífero Guadalupe Bañuelos se realiza un estudio en nueve pozos profundos, tres pozos a cielo abierto (norias) y un manantial. Aunque el agua se clasifica como potable o propia para el consumo humano, se revela la existencia de un pozo profundo con valores altos en los índices de flúor y arsénico, sin evidenciar la localización de los pozos muestreados.¹⁸

Conclusiones

El aprovechamiento del acuífero Guadalupe Bañuelos inicia ante necesidades y requerimientos pequeños, como era el abastecimiento a poblaciones rurales y pequeños regadíos, suministrados principalmente mediante pozos a cielo abierto, de bajo caudal y excavados a poca profundidad. Poco después, para resolver el suministro del incremento poblacional de la Zona Conurbana Zacatecas Guadalupe y debido a la cercanía del acuífero con ésta, se inicia la perforación de pozos profundos de gran caudal, para

abastecer las nuevas zonas de crecimiento. Al iniciarse el aprovechamiento intensivo se presentan los primeros síntomas de sobreexplotación: *a)* la profundización de los niveles de bombeo, provocando mayores consumos de energía eléctrica, lo cual genera baja rentabilidad en los cultivos y en algunos casos el abandono de la actividad agrícola; y *b)* la «contaminación natural» del acuífero, exacerbándose con el tiempo hasta llegar a límites impropios para el consumo humano. Cabe mencionar que si bien la zona de «inadecuada» calidad del agua se encuentra bien establecida, lo cierto es que se deben desarrollar acciones encaminadas a evaluar con mayor precisión las características de la calidad del agua extraída de este acuífero, para que en determinada condición reubicar o reorientar el aprovechamiento de ciertos pozos. Es importante mencionar que la «calidad» del acuífero no sólo debe ser atendida por las instituciones gubernamentales; las condiciones de transparencia en el manejo de la información promueven la participación de la ciudadanía en su análisis así como en las soluciones de los posibles problemas de contaminación que podrían incrementarse bajo este aprovechamiento intensivo, siendo la ciudadanía la que en mayor parte consume el agua que se extrae de este acuífero y que, en caso de existir graves problemas, es la que a largo plazo sufriría de las consecuencias de una deficiente gestión del agua. 🐦

¹⁷ V. Saucedo y R. Pallares, *Contribución al estudio de la calidad del agua subterránea para uso y consumo humano en el Valle Bañuelos-San Ramón Guadalupe Zacatecas* (tesis de licenciatura), Universidad Autónoma de Zacatecas.

¹⁸ Diego Alonso Padilla Reyes, Ernesto Patricio Núñez Peña, Felipe de Jesús Escalona Alcázar y Jorge Bluhm Gutiérrez, «Calidad del agua del acuífero Guadalupe Bañuelos, Estado de Zacatecas, México», *GEOS*, vol. 32, núm. 2, 2012, pp. 367-84.

Reseña de *Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos. Las ideas sobre el desarrollo nacional (1914-1980)*, de Marcelo Rougier y Juan Odisio

CARLOS MALLORQUIN*

Localicé, en el libro *Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos. Las ideas sobre el desarrollo nacional (1914-1980)*¹, escrito por Marcelo Rougier y Juan Odisio, apenas un equívoco: el título. Y sobre ello versan mis palabras a continuación. Un título alternativo elevaría sustancialmente el número de lectores potenciales de un texto que debe ubicarse en un género como el del «pensamiento económico latinoamericano» o «las ideas argentinas sobre el desarrollo». En el muy «largo» título también se reflejan las problemáticas existenciales centrales de la lucha política en Argentina durante su prematura evolución hacia una nación «oligárquica».²

Lo que podríamos denominar el mito, u horizonte social de las oligarquías, y sus proyectos hegemónicos nacionalistas, bajo sus diversos colores entre 1914-1945,³ se trasluce, hasta la actualidad en títulos semejantes,⁴ pero cuyo orden teleológico

*Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas

¹ Marcelo Rougier y Juan Odisio, *Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos. Las ideas sobre el desarrollo nacional (1914-1980)*, Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 2017.

² Véase por ejemplo, Jimena Caravaca, *¿Liberalismo o intervencionismo? Debates sobre el rol del Estado en la economía argentina. 1870-1935*, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.

³ Manuel Ugarte, «Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos», 1915.

⁴ Gerchunoff, Pablo, Lucas, Llach, *El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos



de membrete desaparece: en la representación evolutiva socioeconómica de sus diversos actores-agentes, y sobre cuya narrativa sustantiva se detalla el horizonte de las luchas descritas, se observa la violación de los postulados de las leyendas y apologías subsumidas por los títulos en cuestión. Aspecto que, tal vez, con el simple título del «gobierno de las vacas» —como se ha hecho en ocasiones— pudo haber sido suficiente como terapia contra las estrambóticas imágenes («el enigma argentino», «no es un caso perdido», «desilusión») nada esclarecedoras para comprender la historia de la cimentación de la nación.

En otras palabras, dentro de la primera parte del libro, los discursos giran en torno o en contraposición a una figura central, del Estado argentino y su conformación: Alejandro Bunge, al que muchos, entre ellos el propio Raúl Prebisch, bautiza como el primer «apóstol de la industrialización» argentina. A la exposición sobre la narrativa de las diversas vías de la construcción nacional, le sigue el periodo de las ideas relacionadas al «desarrollo», y creo que es el lugar adecuado donde cabe el proceso de análisis de las ideas acerca de la «industria» (1945-1980), cuya exuberancia y calidad para describir los antagonismos discursivos entre los autores argentinos será de difícil superación por mucho tiempo.

Aires, Ariel, 1988; Llach Juan J., *La Argentina que no fue*, Buenos Aires, Ediciones del IDEAS, 1985; Carlos Alberto Carballo, *Las ilusiones perdidas: ensayo sobre el siglo XX en la Argentina*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Católica Argentina, 2010.

Otra manera de distinguir los diversos momentos narrativos o ciclos representados en el libro ocurre al examinar la propia evolución teórica del discurso de Prebisch, para quien allá en 1943, paralelamente a Adolfo Dorfman, el impulso por la «industrialización» no estaba necesariamente resuelto, pues requería una calculada deliberación pormenorizada. En efecto, el libro no confunde las tesis del rumano Mihail Manoilescu con los vocabularios y con las perspectivas enarboladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Prebisch.

Dicho año se subraya para hacer hincapié en el hecho de que el discurso del «desarrollo», en la propia cuna de Prebisch, si es que no en el mundo, es producto de una guerra de interpretaciones teóricas y mitos que nacen en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. El «espíritu» del desarrollo regional latinoamericano, su vocabulario, adquiere forma durante los desenlaces políticos e institucionales ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial. A manera de síntesis, los elementos que componen el caleidoscopio histórico de la época serían los siguientes: la amenaza estadounidense, invariablemente incumplida, de otorgar apoyo al «desarrollo» de los países democráticos de la región, con el gobierno de Franklin D. Roosevelt en 1945; los acuerdos financieros de Bretton Woods en 1944; la reconstrucción de una Europa devastada y el Plan Marshall en 1948; los inicios de la «guerra fría», la constitución de la Cepal en 1947 (y la «casta» presente de sus primeros funcionarios) y, sin duda alguna, la figura de Prebisch y su transición teórica durante el segundo lustro de la década de 1940, así como su decisión de participar en el proyecto de desarrollo latinoamericano y lo concerniente a la «industria», después de varias «invitaciones».

Por los años y los discursos teóricos narrados «puntillosamente» de la lucha y el debate teórico en Argentina (1945-1980), el libro de Rougier y Odisio debe compartir un espacio privilegiado en el anaquel de libros hoy ya clásicos: *Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo*,⁵ de Ricardo Bielschowsky; y *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*,⁶ de Osvaldo Sunkel (con la colaboración de Pedro Paz). Mayor distinción imposible.

Es probable que los autores del libro condenen mi síntesis del mismo, ya que he intentado desplazar la supuesta centralidad explícita («la historia de las ideas sobre la industria»), un «objeto» teórico, entre otros, pero cuya aparición, desde mi perspectiva, es de reciente aparición. La generación de las ideas latinoamericanas en torno del desarrollo (estructuralistas, cepalinas, dependentistas, etcétera) pertenece al ámbito de la guerra de interpretaciones sobre el perfeccionamiento y la manera más democrática de distribuir e incrementar el producto, por ello tales ideas intentaron ocupar y conquistar el espacio

que el marxismo asume como de su única exclusividad. En consecuencia, resultan incomprensibles en tradiciones eurocéntricas o anglosajonas del pensamiento tradicional y «keynesiano», donde los términos eficiencia y productividad suponen una impoluta higiene respecto a la toma de decisiones políticas, las cuales corresponden al antagonismo político para pensar la construcción de una justicia social democráticamente articulada, espacio contingente e inestable como las propias asimétricas relaciones sociales que la sustentan.

El libro es, entonces, incomprensible fuera de la región, pero el que sea una excelente introducción al discurso teórico sobre el desarrollo —«puntillosamente» presentado—, más allá de las latitudes argentinas, revela la generación y existencia de una perspectiva desde y para la «periferia»: las copiosas confrontaciones y posturas teóricas, las similitudes de las figuras conceptuales acerca de la relación campo-ciudad; el comportamiento de las burguesías o sus gobiernos; «la sustitución de importaciones»; la «dependencia cultural» y el capital estadounidense, como promesa, por un lado, y como derrotero del cambio, por el otro; y, por último, en el ámbito del imaginario intelectual y político: la errabunda representación del espectro de «Prebisch» por propios y extraños en la tierra de Juan Domingo Perón y en la región.

Sin embargo, cabe subrayar que, para los argentinos de reciente data como para lectores del pensamiento latinoamericano, muchas de las discordias teórico-políticas que ofrece el libro son desconocidas, lo cual lo convierte en una herramienta muy útil en aras de iniciar el recuento de nuestra narrativa específica, regional, sobre la evolución económica. Asimismo, el episodio histórico descrito por el texto culmina en 1980, cuando la región fue avasallada por pretéritas ideas «liberales», aunque no necesariamente «democráticas», y cuyo dominio es imprescindible confrontar. Por lo tanto, persiste una ausencia de evaluación más general de lo que transcurrió subsecuentemente en el horizonte teórico político regional, una postura que contraste el estilo puntilloso del «zorro» presente en el libro, con una explicación global del «erizo» con el fin de aproximarnos a la comprensión del actual régimen de verdad. 🐿

⁵ Ricardo Bielschowsky, *Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo*, Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1988.

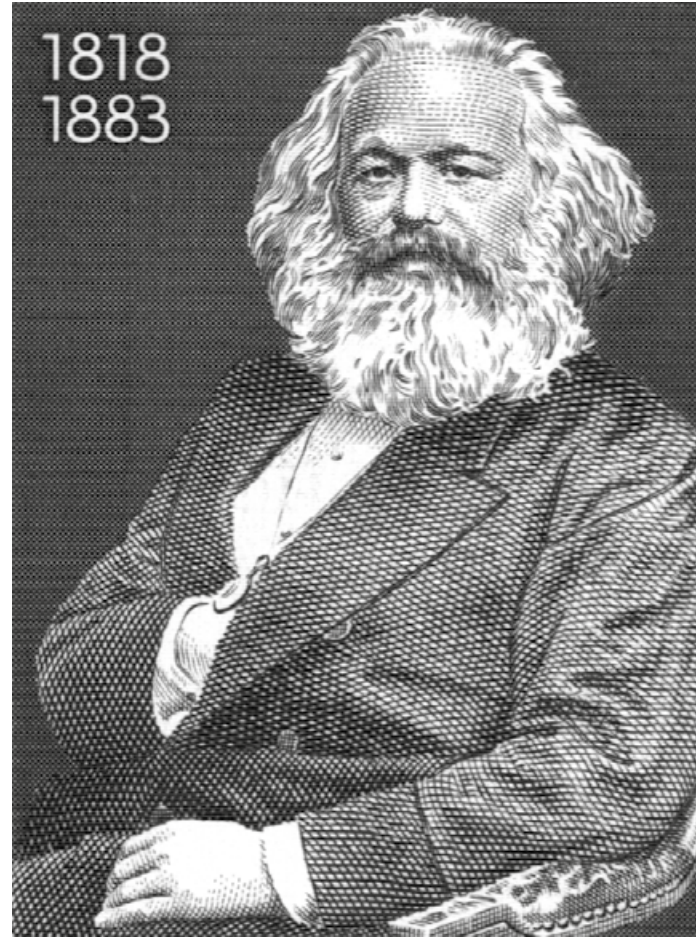
⁶ Osvaldo Sunkel, *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*, México, Siglo XXI, 1970.

Marx, a dos siglos

SERGIO ESPINOSA PROA*

I
¿En qué sentido —y hasta dónde— se puede seguir siendo marxista hoy en día? Voy a responder rápido: se puede (y acaso debe) ser marxista evitando hacer de ello una profesión de fe. Se dice fácil, pero en absoluto lo es. No es fácil con ningún filósofo, pero con Marx es particularmente arduo porque su pensamiento representa realmente un tope o una cima del impulso ilustrado: no sigan a nadie excepto a sí mismos. En consecuencia, declararse «marxista» contradice el ideal ético-epistémico del propio Marx. Voluntaria o involuntariamente, seguimos, sin embargo, pensando y trabajando con algunas de sus ideas y orientaciones. Lo mejor sería empezar por saber con cuáles; tal vez no lo estemos haciendo con las menos envejecidas. A mi juicio, la actualidad de Marx no se cifra en su filosofía (hegeliana de un cabo al otro), ni en su análisis metódico del funcionamiento del capital (porque corresponde a un tramo histórico muy determinado y localizado), y ni siquiera en sus lineamientos de política revolucionaria (siempre a ras de las coyunturas específicas), sino en la afirmación de una voluntad universal de ruptura con las estructuras económicas, políticas e ideológicas en cierto momento imperantes. Podemos (tal vez debemos) tomar distancia de la teoría y de la práctica empleadas para garantizar

*Docente investigador, Unidad Académica de Docencia Superior, Universidad Autónoma de Zacatecas



o ahondar esa ruptura, pero la necesidad de ella tiende a mantenerse en el horizonte: entonces y ahora. No sin ironía, la vigencia de Marx reside —me atreveré a afirmarlo— en su (soterrado) anarquismo: en su combate, dicho con más rigor, a la forma Estado. Al parecer, de la teoría de Marx no queda mucho, y de la experiencia práctica de los regímenes constituidos en su nombre menos, pero esta voluntad de ruptura con la forma Estado —que es la dominante— lo es todo, lo sigue siendo. El triunfo del capital es la mayor prueba de la exigencia de oponérsele desde todos los flancos y echando mano de todas las herramientas (teóricas y prácticas, materiales e ideales) posibles. Ahora bien, ¿habría una razón para hacerlo? Justificarla éticamente ¿no equivale a traicionarla, a poner toda presunta resistencia y voluntad de ruptura al servicio

de la forma Estado? El problema es complicado porque precisamente no estamos en condición de aplicar esquemas o categorías fabricados y perfeccionados en el siglo XIX. Ni la lógica del Espíritu Absoluto, que progresa espontánea e indefectiblemente, ni la historia de la ciencia, que natural y victoriosamente se enfrenta a la superstición. ¿En qué o en quién se encarna —nunca mejor dicho— esta voluntad de ruptura? ¿En los artistas? ¿Serán ellos el sujeto revolucionario tras dos siglos de derrotas mundiales de las clases subalternas? Aquí, la obvia amenaza, la fundamental, es la rehabilitación de la teología. El sujeto, o, mejor, la idea de un sujeto consciente, responsable y comprometido con la transformación social mantiene una deuda evidente con la noción —rabínica— del pueblo elegido. Es a tal respecto que la posición de filósofos «de izquierdas» o «comunistas» como Alain Badiou o Slavoj Žižek me resulta insuperable e insoportablemente ambigua: contra el relativismo posmoderno, escenifican un retorno al absolutismo, en una suerte de subteología remozada y puesta al día. Es ambiguo porque la ruptura de la forma Estado depende y no depende de la voluntad subjetiva. Es algo que meramente ocurre, pero hay que desear y buscar esa rotura. El individuo está naturalmente en la sociedad —en su sociedad— como el agua en el agua, pero puede (o debe) salir de ella y articularse bajo la modalidad de un sujeto colectivo y transhistórico; el singular concreto (animal, natural) ha de advenir sujeto (humano, cultural). ¿Por qué? ¿Qué necesidad habría de ello? La argumentación de Badiou resulta bastante floja: me conmueven las tragedias griegas, me tocó el 68, domino las matemáticas y una vez me enamoré... El animal se hace hombre tocando lo universal. Pero insistamos: ¿por qué lo haría? Ni por razones teórico-prácticas ni por exigencias políticas: el sujeto es aquel individuo que, por milagro, «experimenta el sentimiento profundo de su igualdad.»¹ Estamos ante una conversión en el sentido plenamente religioso del término (no por nada Badiou le dedicó un libro a san Pablo). La forma Estado se disuelve por moti-

¹ Alain Badiou, *La filosofía frente al comunismo. De Sartre a hoy*, México, Siglo XXI, 2016, p. 64.

vos religiosos: ¡gracias a Dios! Bien entendido que «Dios» es para un filósofo comunista lo Absoluto Universal, lo infinitamente real. Y estar en su presencia sólo puede provocar el mayor entusiasmo. Es decir que al anticuado marxismo decimonónico tal vez sólo le haga falta un pequeño toque hare-krishna para poder actualizarse a cabalidad. Bromas aparte, mi comentario apunta a mostrar el talante religioso —voluntario o no— de este retorno a Marx y de esta defensa reciente de la idea de comunismo. Por otra parte, Badiou se remite a la justificación que del proletariado hace Marx como sujeto revolucionario: lo hará todo porque está reducido a la nada. El verdadero nihilismo es, pues, el de una humanidad despojada de cualidades, propiedades, atributos, características. El proletariado no tiene intereses particulares, por ello es revolucionario. Por lo mismo, no tendría que ser aleccionado, adoctrinado, educado, ni siquiera despertado. Dado que es una nada, nada lo ata a nada, y en especial nada lo sujeta al presente: su ser está enteramente en el futuro (en el no ser). El proletariado posee una existencia literalmente utópica; todo decae si alguien se arroga el poder de hablar en su nombre, llámese partido o sistema de partidos, llámese Lenin o Trotsky o Stalin, llámese destino manifiesto o lógica de la Historia... Pero eso no cambia el hecho de que el sujeto de la revolución, en Marx, tiene una existencia puramente negativa. ¿Es mucho especular, ante esta idea, que para Marx, su gran teórico, la revolución es imposible, impracticable, inverificable? Peor aún: ¿injustificable?

II

A mí, en principio, el marxismo me sedujo —en plena adolescencia— por su espíritu jacobino; de pronto, o poco a poco, todos fueron resultando medio curitas. En realidad no tengo nada contra las iglesias —con tal de que me dejen en paz. Me gusta tener amigos, pero el espíritu de secta me es completamente ajeno. Ni fui católico, que es lo que quizá la escuela esperaba de mí, ni espiritista (magnético), como mi abuelo paterno, ni americanista e irregularmente bohemio, como mi padre (es broma); tampoco, gracias a mis sapos,

científico. Ni siquiera, en caridad del cielo, y esto por culpa de algunas tarántulas (literal y figuradamente hablando), antropólogo: preferí siempre, sin saber muy bien por qué, la soledad filosófica y su errático deambular. Leyendo, a fin de amañar este comentario, a Alain Badiou, por quien honradamente no profeso simpatía alguna, me topo con una idea por fin interesante: lo único que rompe la forma Estado es la experiencia de una excepción inmanente. ¿Eso qué es? No está muy claro; pero viene a ser aquello que toda representación aniquila. Después de muchas vueltas, Badiou lo confiesa: la excepción inmanente es una forma laica de un dogma cristiano —la idea de resurrección.² Y también del tema místico del hinduismo: el despertar. Conversión, resurrección, despertar místico: ¿qué tiene esto que ver con la Ilustración? Nada, o muy poco, pero Marx no es el marxismo. Su vigencia —y su honestidad intelectual— consiste en precisamente no ser marxista; eso lo sabemos desde él mismo. ¿Cómo, sin tartufería, serle fiel a un espíritu ilustrado? ¿Siéndole infiel? Acaso despojándolo de sus adherencias, de su séquito. Y, sobre todo, de quienes hablan en su nombre. Forman legión. Son la cofradía de la Vela Perpetua, y eso por una simple y sencilla razón: no lo leen. O lo leen filtrado y alicaído por manuales y catecismos. Están, por otro lado, los marxólogos, igualmente desesperantes: el maestro les ahorra —con cierta elegancia— la exigencia de pensar. Al parecer, ya estamos lejos de ambos extremos. La pregunta por su perdurabilidad involucra preguntas más serias: ni siquiera tendrían que ver con su doctrina. ¿En qué sentido y hasta qué punto Marx es filósofo? Lo es cuando inventa y ensaya conceptos; lo es hasta que se cansa o se fastidia. Ustedes dirán. A partir de Nicolás de Cusa, todos los modernos proponen algo nuevo, algo interesante, algo estimulante; trabajan un poco desde cero. Por eso vuelve uno a ellos; no es nunca cuestión de lealtad. ¡Todos están bien finados! La arenga de Sartre suena desfasada: quien intente refutar a Marx caerá detrás de él. ¿Qué clase de oscurantismo es ese? La frase de Jean Lacroix es más matizada: Marx

² *Ibid.*, p. 86.

podrá ser refutado, pero aun así seguirá viviendo en el corazón de «millones de seres», en la conciencia de la masa...³ («¿Exceso o insuficiencia de humanismo?»). Lo cual, en buen plan, espanta un poco. Porque, según los marxistas, la masa es profunda y naturalmente humanista: afán de sentido moral, conciencia del objetivo, afán de libertad, autoactividad, autoexpresión... Todos, si nos fijamos bien, sean o no imputables a la masa, ideales burgueses. Qué contrariedad: según los intérpretes, la doctrina de Marx es la única en asegurar el acceso al hombre... burgués. ¡El mundo vuelve a estar patas arriba! No: Marx es filósofo por sus vacilaciones, por sus suspicacias, por sus titubeos, por su voluntad autocrítica: pensar es volver a pensar, y hacerlo sin subterfugios. Eso es lo perdurable, y no sus ideas, que son, mal que a todos nos pese, demasiado humanas. Es, al menos, el resultado de muchas lecturas, entre ellas la de Kostas Axelos, que desde un ángulo heideggeriano considera que la idea reguladora de Marx es de orden metafísico: realizarla práctica y técnicamente, llegando a la reconciliación con la naturaleza en un estado cuasi-edénico, es decir, transparente, abundante y feliz... gracias a la técnica. «Ésta (re) conciliación significa: conquista del mundo por y para el hombre, despliegue ilimitado de las fuerzas de la técnica».⁴ Otra vez: mentalidad burguesa. Nos queda, pues, el impulso, no el sistema. Nos queda, digámoslo bien, el deseo. No la carta a los Reyes Magos, sino su caligrafía. ✍

³ Varios autores, «¿Exceso o insuficiencia de humanismo?», de Jean Lacroix en *Marxismo y humanismo*, Barcelona, Martínez Roca, 1975, p. 12.

⁴ Kostas Axelos, *Marx, pensador de la técnica*, Barcelona, Fontanella, 1969, p. 8.



Estudios del Desarrollo

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Investigación, reflexión y análisis

Convocatoria

El Comité Editorial de la revista *Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis* invita a los investigadores interesados en analizar la crisis y alternativas de la Universidad pública a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el volumen 8, número 22, enero-marzo 2019.

Temática

Crisis y alternativas de la Universidad pública.

Objetivo

Analizar la situación actual de la Universidad pública en el contexto de la crisis del modelo neoliberal y la necesidad de impulsar procesos de reforma para fortalecer la misión social universitaria y contribuir al desarrollo nacional.

Líneas temáticas

- ◆ La Universidad pública en América Latina en el contexto de los cien años de reforma universitaria.
- ◆ Crisis de la Universidad pública en México y necesidad de reforma en el cambio de régimen político.
- ◆ Desarrollo desigual de las universidades federales y estatales en México.
- ◆ Crisis de la Universidad Autónoma de Zacatecas y perspectivas de transformación.

Descripción

La Universidad pública en América Latina y México ha estado sometida a un proceso de reestructuración dentro del proyecto neoliberal mediante la restricción del presupuesto educativo y la implementación de medidas de control institucional que vulneran la autonomía: evaluación estandarizada en todos los niveles, mercantilización de la educación, privatización de la educación superior, precarización del trabajo académico, subsunción de la investigación,

pedagogía orientada por criterios del mercado, exclusión de estudiantes de las clases populares, entre otros problemas. La Universidad pública está llamada a cumplir un papel estratégico en la formación de científicos, intelectuales, docentes y profesionistas; en la generación de conocimiento, tecnología y formas de pensamiento; en la difusión de la ciencia y la cultura. Con la finalidad de cumplir a cabalidad su misión social, se requiere redefinir y actualizar el entramado institucional con un soporte presupuestal para potenciar su papel como agente del desarrollo.

Normas editoriales

Los textos deberán sujetarse a las normas editoriales de la revista (<http://estudiosdeldesarrollo.mx/documentos/InstruccionesObservatorio.pdf>).

Recepción de originales

Los interesados deberán enviar sus contribuciones a la dirección electrónica de la revista (revistaod@uaz.edu.mx) a más tardar el 1 de febrero de 2019.

Arbitraje

Los trabajos que cumplan con los requisitos serán sometidos a un proceso de arbitraje.

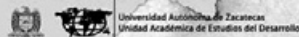
Publicación

La publicación de los artículos aprobados estará sujeta a la disposición de espacio en cada número.

Mayores informes

revistaod@uaz.edu.mx

SEMINARIO INTERNACIONAL



Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe

Jueves 15 noviembre 2018

PROGRAMA

10:00 horas. *Bienvenida* por el Dr. Raúl Delgado Wise, Director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, UAZ
10:15 horas. *Presentación de la Colección CRES, 2018*, por el Dr. Pedro Henríquez
11:00 horas. *Mesa de discusión "Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe"*
Dr. Francisco Tamarit, Ex Rector de la Universidad de Córdoba-Argentina y Coordinador Conferencia Regional de Educación Superior, 2018.
Dr. Axel Didriksson, Coordinador de la Cátedra UNESCO "Universidad Pública e Integración Regional".
Dr. René Ramírez Gallegos, Coordinador del "Eje Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe" de la Colección CRES, 2018 y director de la Cátedra UNESCO "Sociedades de los conocimientos y libertad de expresión".
Dr. Humberto Márquez Covarrubias, Docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, UAZ.
Dr. Dacio Matheus, Rector de la Universidad Federal ABC-Brasil.
Dra. Margarita González Hernández, moderadora.

ENTRADA LIBRE

Auditorio de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo
Campus Universitario II. Av. Preparatoria s/n. Fracc. Progreso. Zacatecas, Zac.

Teléfono: (492) 8906945
Página web: <http://www.estudiosdeldesarrollo.mx>
Correo: difusion.uaed@uaz.edu.mx
Facebook: Difusión, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo
Twitter: @uaed_uaz
Instagram: [difusionuaed](https://www.instagram.com/difusionuaed)
YouTube: Difusión, UAED



La Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, la revista Observatorio del Desarrollo y el Seminario de Pensamiento Crítico

invitan a la comunidad universitaria y el público en general a la



MESA DE ANÁLISIS POLÍTICO

"El proyecto de gobierno de AMLO: potencialidades de cambio y limitaciones estructurales"

Ponentes:
Víctor López Villafaña
Raúl Delgado Wise
Humberto Márquez Covarrubias
Moderador:
Sigifredo Esquivel Marín

30 DE AGOSTO 2018
18:00 horas
Patio de Rectoría
Centro Histórico
Zacatecas, Zac.
Entrada libre



Difusión, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo



@uaed_uaz

Informes:
Tel. (492) 8996945
<http://www.estudiosdeldesarrollo.net>



Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas

tienen el honor de invitar a la

V SESIÓN DEL SEMINARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO

"CRÍTICA A LA CULTURA COMO POLÍTICA PÚBLICA"

participan

Limonar Soto Salazar, INAH
Irma Faviola Castillo Ruiz, UAZ
Daniel Hernández Palestino, UAZ
Sigifredo Esquivel Marín, UAZ

ENTRADA LIBRE
MIÉRCOLES 24
OCTUBRE 2018
18:00 horas

PATIO DE RECTORÍA UAZ
Jardín Juárez 147
Centro Histórico
Zacatecas, Zac.

Teléfono: (492) 9256690 ext. 3523
Correo: difusion.uaed@uaz.edu.mx
Página web: www.estudiosdeldesarrollo.mx
Facebook: Difusión, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo
Twitter: @uaed_uaz
Instagram: [difusionuaed](https://www.instagram.com/difusionuaed)
YouTube: Difusión, UAED



Universidad Autónoma de Zacatecas
Unidad Académica de Estudios del Desarrollo

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO

Repensando el desarrollo en América Latina:

MODELOS ALTERNATIVOS

27 y 28
Septiembre
2018
10:00 A.M.

PARTICIPANTES

Dario Azzellini: Cornell University - Development Sociology (Ithaca)
Raúl Delgado Wise: Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Gian Carlo Delgado: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM
José Déniz: Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Arturo Esquerro-Cañete: Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Humberto Márquez Covarrubias: Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Carlos Montaña: Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)
Juan Carlos Moreno-Brid: Universidad Autónoma de México (UNAM)
Gerardo Otero: Simon Fraser University (SFU)
Hugo M. Pons Duarte: Universidad de Holguín (Cuba)
René Ramírez Gallegos: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador
Darcy Tetreault: Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Henry Veltmeyer: Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Leandro Vergara-Camus: SOAS, University of London
Marcelo Vieta: University of Toronto
Fernanda Wanderley: Universidad Católica Boliviana (UBSC-UCB)
Edgar Zayago Lau: Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
Pablo Gentili: Secretario Ejecutivo de CLACSO

AUDITORIO

Unidad Académica de Estudios del Desarrollo
Campus Universitario II
Av. Preparatoria s/n
Fracc. Progreso
Zacatecas, Zac.
Tel. (492) 8996945
(492) 56690 ext. 3501 y 3524



Difusión, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo



@uaed_uaz

Colaboradores

FRANCISCO AGUILAR ORTEGA
ISAAC ENRÍQUEZ PÉREZ
SERGIO ESPINOSA PROA
DANIEL HERNÁNDEZ PALESTINO
VÍCTOR LÓPEZ VILLAFañE
CARLOS MALLORQUIN
OSCAR MAÑÁN
HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS
CINDY McCULLIGH
JOSEFINA MORALES
GERARDO OTERO
GRECIA EUGENIA RODRÍGUEZ NAVARRO
DARCY TETREALT
SERGIO ELÍAS URIBE SIERRA

Revistas



Universidad Autónoma
de Zacatecas «Francisco
García Salinas»



Unidad Académica
de Estudios del
Desarrollo

